

SOBERANÍA Y PODERES EN DURANGO A 200 AÑOS DE SU PRIMERA CONSTITUCIÓN

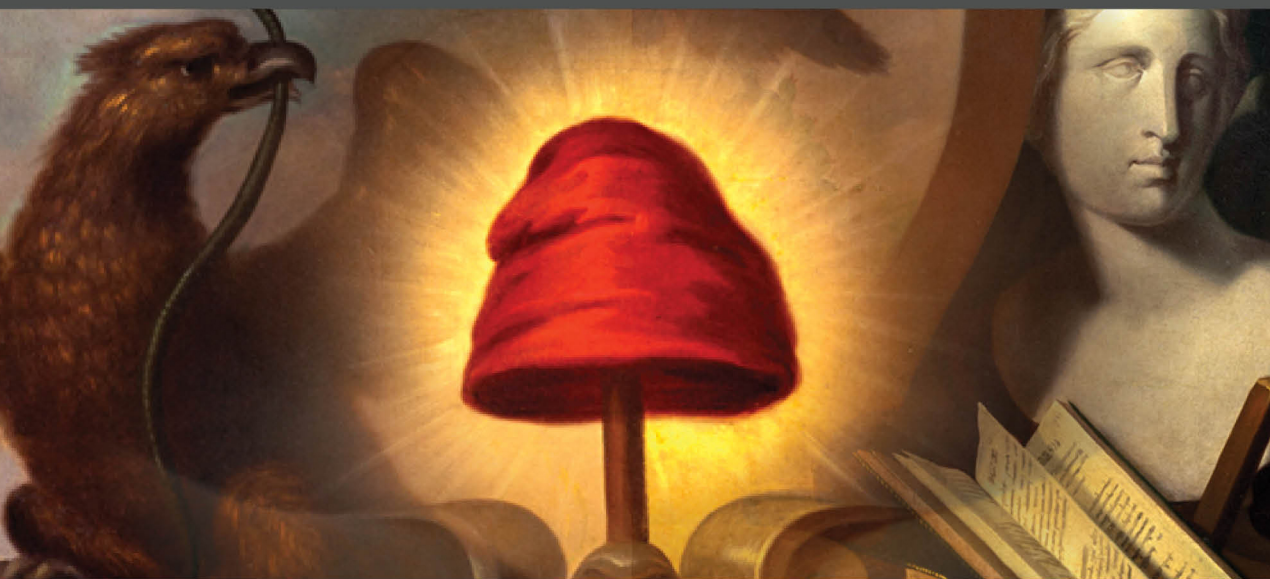
“EL TRANQUILO GOCE DE SUS NATURALES
E IMPRESCINDIBLES DERECHOS”

Tania Celiset Raigosa Gómez

Pavel Navarro Valdez

Coordinación

BIBLIOTECA INEHRM BIBLIOTECA INEHRM BIBLIOTECA INEHRM BIBLIOTECA INEHRM BIBLIOTECA INEHRM



BIBLIOTECA **INEHRM**

**SOBERANÍA Y PODERES
EN DURANGO A 200 AÑOS
DE SU PRIMERA CONSTITUCIÓN**

“EL TRANQUILO GOCE DE SUS NATURALES
E IMPRESCINDIBLES DERECHOS”

Cultura

Secretaría de Cultura



SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura



INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO

Felipe Arturo Ávila Espinosa
Director General

SOBERANÍA Y PODERES EN DURANGO A 200 AÑOS DE SU PRIMERA CONSTITUCIÓN

“EL TRANQUILO GOCE DE SUS NATURALES
E IMPRESCINDIBLES DERECHOS”

Tania Celiset Raigosa Gómez

Pavel Navarro Valdez

Coordinación

MÉXICO 2025

Obra dictaminada bajo el sistema de pares ciegos.

Portada: Composición realizada empleando
un detalle de la *Alegoría a la Patria*.
Óleo sobre tela de Jesús Corral, 1844.
Museo Nacional de las Intervenciones.
SECRETARÍA DE CULTURA.INAH.GOB.MX. Véase página 7.

Ediciones en formato electrónico:
Primera edición, INEHRM, 2025.

D. R. © Pavel Navarro Valdez, *Durango y su andar federalista*;
Daniel Guillermo Rodríguez Barragán, *El Legislativo bicameral...*;
Tania Celiset Raigosa Gómez, *El poder judicial de Durango...*;
Citlali Rodríguez González, *La construcción del estado de Durango...*;
Edgar Bueno Hurtado, *El pacto fiscal y la administración...*;
Laura Suárez de la Torre, *Guadalupe Victoria, primer presidente de México...*;
José Enciso Contreras, *La invocación a dios en la constitución...*;
Óscar Hernández Santiago, *¿Reformar lo irreformable?...*

D. R. © Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México (INEHRM),
Plaza del Carmen núm. 27, Colonia San Ángel, C. P. 01000,
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
www.inehrm.gob.mx

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables; la persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

ISBN INEHRM: 978-607-549-628-3

HECHO EN MÉXICO

Introducción.

<i>A 200 años de la primera constitución de Durango y sus poderes locales</i>	9
<i>Pavel Navarro Valdez y Tania Celiset Raigosa Gómez</i>	
Durango y su andar federalista, 1824-1835.....	19
<i>Pavel Navarro Valdez</i>	
El Legislativo bicameral como mecanismo para detener la tiranía.....	37
<i>Daniel Guillermo Rodríguez Barragán</i>	
El Poder Judicial de Durango durante la Primera República Federal, 1824-1835... ..	55
<i>Tania Celiset Raigosa Gómez</i>	
La construcción del estado de Durango:	
El Poder Ejecutivo Estatal en la Primera República Federal, 1824-1835.....	79
<i>Citlali Rodríguez González</i>	
El pacto fiscal y la administración del erario federal en el estado de Durango, 1824-1835	101
<i>Edgar Bueno Hurtado</i>	
Guadalupe Victoria, primer presidente de México ¿de la gloria al olvido?.....	123
<i>Laura Suárez de la Torre</i>	

La invocación a dios en la constitución mexicana de 1824 y sus homólogas estatales	145
<i>José Enciso Contreras</i>	
¿Reformar lo irreformable? Una aproximación al cambio normativo desde el constitucionalismo estatal mexicano, 1824-1827.....	165
<i>Óscar Hernández Santiago</i>	



*A Mariana Terán Fuentes
y en Memoria de César Navarro Gallegos.
Por su pasión en los estudios del federalismo.*



Jesús Corral, *Alegoría a la Patria*. Óleo sobre tela, 1844.
Museo Nacional de las Intervenciones. SECRETARÍA DE CULTURA.INAH.GOB.MX.

Introducción

A 200 años de la primera constitución de Durango y sus poderes locales

Pavel Navarro Valdez

Instituto Nacional de Antropología e Historia/
Museo Nacional de las Intervenciones

Tania Celiset Raigosa Gómez

Instituto de Investigaciones Históricas/
Universidad Juárez del Estado de Durango



El presente libro comparte el estudio de diversos temas relacionados con la construcción del estado de Durango y su primera constitución, promulgada en septiembre de 1825 y la federal publicada en 1824. Todo ello tomando en cuenta que las indagaciones sobre un régimen federal no pueden lograrse sin aquilatar la historia desde las regiones, cuanto más en un sistema que otorga autonomía y soberanía a los estados integrantes. Así, los hombres artífices de la nueva república, hace poco más de 200 años, tuvieron el reto de mantener la unidad de la nueva nación y diseñar una estructura política que diera salida a las presiones y los conflictos que se pusieron de manifiesto en el estallido de la revolución de independencia entre las provincias y el poder central. El nacimiento del texto constitucional federal y los cuerpos constitucionales estatales es una de las etapas más importantes en la construcción del federalismo mexicano. Las constituciones locales dotaron de voz y dieron cabida a los protagonistas regionales y sus intereses entreverados en la relación con el gobierno federal, establecido en la ciudad de México, que se mantuvo como el centro político del país. De esta forma, tal y como el sistema nacional requiere del estudio de sus actores, ordenamientos, redes y relaciones, lo mismo se demanda a la historiografía desde las entidades, para sopesar las contribuciones desde los estados a la construcción de un sistema federal.

Por este motivo, en este tomo, al conmemorarse el bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango se resalta la participación duranguense en el sistema federal, a la vez que se avanza en las pesquisas sobre las instituciones locales y sus procesos particulares, en temáticas desatendidas por la historiografía local que comienzan a encontrar investigadores que se acercan con interrogantes pertinentes a las maneras en que los duranguenses se apropiaron de los nuevos proyectos políticos, los adecuaron a sus expectativas con la independencia, los ajustaron a sus intereses y circunstancias económicas para tratar de resolver problemas de gobernabilidad, aislamiento, inversiones productivas y dispersión de la población, que se reflejaron en la redacción de la

constitución duranguense de 1825. Así, el devenir histórico de Durango se entrelazó a las vicisitudes de la vida nacional, pero también adquirió especificidades y rasgos propios. Adoptar la atalaya regional, pero con mirada atenta a la construcción nacional y sus interacciones, fue la manera en que se coordinó este volumen.

Es importante recalcar que la historiografía ha observado la influencia que el pensamiento liberal tuvo sobre los ordenamientos legales, pues desde Cádiz hasta la constitución mexicana de 1824 y la estatal de Durango de 1825, tuvieron esa esencia que se percibe en su contenido. Además, hay que destacar que uno de los aspectos más sobresalientes de las mencionadas constituciones es que fueron fruto de un proceso revolucionario, con ellas se consolidó un concepto y una idea de nación que vino gestándose desde tiempo atrás y no fue resultado del azar o la simple copia de un modelo, sino del trabajo intenso de un grupo de pensadores y legisladores que supieron vislumbrar la revolución política que vivían en ese momento. La división de poderes quedó definida de una manera explícita, aun con elementos a modificar en el tiempo, tal como lo fueron las cámaras de senadores y diputados establecidas en el Legislativo de Durango, las facultades de los alcaldes dentro del Poder Judicial o la limitada fortaleza del Ejecutivo estatal. Todos estos aspectos fueron modificados con el transcurrir del tiempo, ajustes sucedidos entre debates y problemáticas que llevaron a experimentar posteriormente el centralismo como opción de gobierno, etapa que escapa a los límites temporales de esta publicación.

En este volumen se encontrará una muestra de la vocación federalista duranguense, una entidad alejada del centro, en situación de frontera, con precariedad económica pero que mantuvo un cariz notoriamente federalista en la conducción de su gobierno durante la primera etapa de la República, como quedó de manifiesto en la actuación de sus primeros gobernadores, Santiago Baca Ortiz y Francisco Elorriaga, y las iniciativas y legislaciones aprobadas por el congreso local. Aquí se exponen y desarrollan las principales características de Durango durante la Primera República Federal ligadas con algunos de los aspectos que a nivel nacional tuvieron repercusión en el devenir de los estados y la construcción de la nación. De acuerdo con lo anterior, la obra propone una metodología que aborda a la constitución como un elemento que consolidó al nuevo Estado nacional a través de sus distintos poderes, proyectos, relaciones políticas y la nueva soberanía encarnada en la nación y sus estados. Todo ello desde una óptica centro-periferia, o como lo definen Alicia Salmerón y Fausta

Gantús, centro-región,¹ pues la influencia, las contrariedades y relaciones acontecidas entre estos dos sectores y sus autoridades están presentes a lo largo del libro. Ejemplo de ello es la encarnada lucha de poder entre las logias masónicas yorkina y escocesa en el territorio de Durango, región en la que Guadalupe Victoria apoyó a los federalistas yorkinos para la consolidación de su proyecto. Estas decisiones influirían de manera importante en el sistema de gobierno.

La obra la integran ocho ensayos. Los primeros cinco se centran en lo que fue Durango y su sentir federalista, que mediante su división de poderes pudo establecer un estado de derecho y una vida social, económica y política. En cada uno de los textos, los autores aportan desde diferentes ópticas un nuevo conocimiento hacia la historia de Durango. De esta forma, el libro va de lo particular acontecido en Durango a lo general acontecido a nivel nacional y concluye con tres artículos que presentan aspectos de índole federal: uno relacionado al primer presidente de México, de origen duranguense, quien como es sabido formó parte de este entramado político para consolidar la nación y los estados; y dos que muestran algunos aspectos de la constitución mexicana de 1824 y su implementación en los textos estatales, escenarios políticos fundamentales para la comprensión de lo que acontecía en el país.

Elemento clave que une los diferentes ensayos es el proceso de construcción del estado de Durango, el cual se erigió como tal separándolo del estado de Chihuahua mediante el decreto de 22 de mayo de 1824, mismo que fue ratificado en la constitución mexicana de 1824. Antes de ello Durango formó junto con Chihuahua y Nuevo México el Estado Interno del Norte, según acta constitutiva; por lo que, al constituirse como un estado más de la federación, emprendió una tarea de organización para lograr su consolidación.

Primeramente, encontramos el texto “Durango y su andar federalista, 1824-1835”, de Pavel Navarro, investigador del Museo Nacional de las Intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El autor presenta la idea de una primera constitución que asentó en su andar un cariz confederalista, con un referente político anclado en Zacatecas y Jalisco. El texto inicia haciendo referencia al surgimiento del estado mediante el decreto emitido el 22 de mayo de 1824 por la Comisión de Constitu-

¹ Fausta Gantús y Alicia Salmerón, *Un siglo de tensiones. Gobiernos generales y fuerzas regionales. Dinámicas políticas en el México del siglo XIX*, tomo I, p. 15.



ción presidida por Miguel Ramos Arizpe; con el decreto se erigió a Durango como un estado más de la federación, separándolo de Chihuahua, situación que posteriormente se confirmó en la Constitución de 1825. De esta forma, Navarro desarrolla aspectos que el Congreso Constituyente dejó plasmados en la primera constitución y que fueron de relevancia para echar a andar la política y función estatal. Además, en el capítulo muestra algunas de las principales aportaciones del primer federalismo en Durango, tales como las acciones del primer gobernador, Baca Ortiz, para impulsar una política de tendencia liberal, para lo cual se apoyó en las leyes y los decretos del primer congreso. Prosigue con el ascenso del segundo gobernador electo por el congreso del bando federalista, el licenciado Francisco Elorriaga, quien entre sus primeras medidas adquirió la imprenta del gobierno del estado como parte de ese andar del primer federalismo en Durango.

Por su parte, desbrozando la división de poderes, se incluye el trabajo de Daniel Rodríguez Barragán, de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), titulado “El Legislativo bicameral como mecanismo para detener la tiranía”, que fija su atención en el Poder Legislativo y su peculiar composición dividida en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El autor sostiene que el congreso bicameral fue pensado como defensa contra la tiranía, aunque volvió necesariamente más complicado su funcionamiento y no logró apaciguar las posiciones radicales de los diferentes grupos políticos, alentando las pugnas en vez de diluirlas. Además, menciona que la preponderancia del Poder Legislativo sobre los poderes Judicial y Ejecutivo no fue resultado de una influencia acrítica de los sistemas políticos europeos o norteamericanos, sino fruto de las relaciones de poderes locales y la situación política del país, según palabras del autor. Por ello se generó la singular característica de las dos cámaras dentro del congreso.

Tania Celiset Raigosa Gómez, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED, en su ensayo denominado “El Poder Judicial en Durango durante la Primera República Federal, 1824-1835”, expone el nacimiento de éste con el surgimiento del Supremo Tribunal de Justicia. El texto nos muestra la influencia de la herencia jurídica de Cádiz y las ideas liberales. Además, hace que nos percatemos de diferentes continuidades con el antiguo régimen, tales como los alcaldes-jueces que aplicaron la justicia en primera instancia y que mantuvieron una vigencia importante dentro de la organización del Estado, al encargarse de la justicia en primer grado.

El capítulo da un paso más en el reto de poner rostro a los magistrados del Tribunal de Justicia y los rasgos de su desempeño. Además, menciona algunas de las dificultades que tuvieron los primeros gobernadores para la organización de la justicia en el estado. De esta forma, el primer gobernador, Baca Ortiz, así como el gobernador Pescador, mencionan la falta de dinero para consolidar un Poder Judicial fuerte y firme. Este aspecto, sumado a la falta de asesores letrados para los alcaldes constitucionales, propició una justicia en detrimento de las causas interesadas. Estos y otros aspectos más son mencionados por la autora, que logra dilucidar algunos de los más descabales relacionados al Poder Judicial de Durango.

Por su parte, el trabajo de Citlali Rodríguez, egresada de la Maestría en Ciencias y Humanidades de la UJED, denominado “La construcción del estado de Durango: El Poder Ejecutivo estatal en la Primera República Federal, 1824-1835”, expone un poder que vivió vaivenes en sus primeras décadas, debido a que no estaba tan fortalecido como el Poder Legislativo y por lo tanto tuvo que adaptarse a los tiempos y templarse para poder consolidarse y avanzar con los cambios que se estaban generando. Baca Ortiz, liberal reconocido y primer gobernador, sustituido por José Pescador en 1830, gobernador no reconocido por el bando liberal y destituido en 1832 para restituir a Elorriaga, son algunos de los nombres que podemos encontrar en el estudio. En el juego político, los cambios constantes en el Poder Ejecutivo eran frecuentes, y la autora nos los presenta de manera clara y precisa. Es un capítulo sustentado en fuentes de archivo y hemerográficas, que le dan un importante sustento en su desarrollo, pues si bien la autora menciona que la Constitución Federal de 1824 consolidó la división de poderes, cada uno de los territorios estatales presentó su propio matiz en el avance de cada uno de sus poderes, de acuerdo con las circunstancias políticas. Por ello, en Durango, los gobernadores no lograron concluir su periodo de gobierno establecido por la constitución.

La explicación de la fiscalidad en el estado está desarrollada en el capítulo “El pacto fiscal y la administración del erario federal en el estado de Durango, 1824-1835”, de Edgar Bueno, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED. El texto analiza el arreglo fiscal de la joven nación mediante el estudio del caso del estado de Durango, observando cómo la federación mantuvo presencia en la entidad en lo referente a la administración de los impuestos y rentas. Con esto, permite observar con detalle la estrecha relación entre ambas esferas durante el periodo referido, bajo los términos que establecieron el reparto de rentas, la recaudación, la ad-



ministración de los impuestos y el funcionamiento de la Comisaría de Hacienda. Es una indagación por demás esclarecedora para los interesados en las dinámicas fiscales, donde se desglosa cómo el elevado porcentaje de las rentas del estado tuvo que ser transferido a las arcas federales. Además, explica cómo se organizó la administración de rentas del estado y el funcionamiento y la conformación de las comisarías, es decir, las dependencias encargadas de la recaudación y administración de los impuestos.

El último bloque son tres ensayos relacionados con el entramado político nacional: el de Laura Suárez de la Torre, del Instituto Mora, denominado “Guadalupe Victoria, primer presidente de México ¿de la gloria al olvido?”, que pone su atención en el duranguense Guadalupe Victoria, a través de la mirada de la prensa. Muestra un tiempo de reacomodos de los distintos grupos políticos y desvela cómo la Primera República se convirtió en el escenario propicio para la instauración y el actuar de las logias masónicas, que adquirieron gran importancia debido a la actividad emprendida por los republicanos federalistas o centralistas y por los ritos masónicos: yorkino o escocés. Guadalupe Victoria es un personaje por demás apasionante en la historia de México que no podía quedar fuera de este libro, ya que fue pilar central en la consecución de la independencia; fue un insurgente, liberal y republicano al que le tocó encarar como presidente de México los iniciales vaivenes. Este personaje se ganó el profundo odio de sus adversarios y el recuerdo de aquéllos con los que se identificó en el sueño de construir un país. El texto, sustentado en numerosa hemerografía, nos invita a leerlo de inicio a fin y a reparar en la olvidada imagen del primer presidente.

A continuación, está el trabajo de José Enciso Contreras, del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, quien ofrece el texto denominado “La invocación a dios en la constitución mexicana de 1824, y sus homólogas estatales”. Allí el autor expone algunos de los antecedentes de la cláusula diplomática de invocación a dios en las primigenias constituciones escritas en español y su contexto en Cádiz; incluye asimismo algunos de los debates parlamentarios en torno a esta temática en la constitución mexicana de 1824; además, hace un análisis de las constituciones estatales de la república que mencionan esta cláusula, aportándonos un minucioso cuadro comparativo acerca del número de palabras que en cada una de ellas se dedicaron al tema y la fecha de emisión de la constitución. Este estudio aporta una meticulosa comparación de dicho tema en las constituciones francesa, de Cádiz y mexicana, permitiéndonos comprender el

tipo de invocación respecto a su extensión en prosopopéicas, ampulosas, afectadas y simples. Y finalmente aquellas que no la contuvieron, tal como fue la de Veracruz, partiendo desde la explicación del significado y efecto de esta cláusula.

La obra concluye con un estudio acerca de los procedimientos de reforma constitucional de los primeros 19 textos constitucionales estatales, en un periodo comprendido entre 1824 y 1827, diseccionados por Óscar Hernández Santiago, posdoctorante de El Colegio Mexiquense, en su artículo “¿Reformar lo irreformable? Una aproximación al cambio normativo desde el constitucionalismo estatal mexicano, 1824-1827”. Este ejercicio de derecho constitucional comparado sirve para comprender las inquietudes, expectativas y los temores de los constituyentes estatales en un momento en el que la cultura constitucional mexicana iniciaba su andar. Asimismo, expone algunos de los aspectos más importantes sobre los límites del poder soberano que en el ámbito hispano tuvieron influencia. Repara en el pensamiento de Jacobo Rousseau que influyó en Estados Unidos de América, la propia Francia y tiempo después en España con la Constitución de Cádiz, en donde fue de suma importancia y que el constitucionalismo mexicano adoptó en la constitución política mexicana de 1824.

Los ocho capítulos de este volumen se basan en fuentes de archivo, bibliografía especializada, periódicos, legislación e informes y documentos de la época, con el objetivo de enriquecer la obra y las aportaciones de los autores.

No resta más que agradecer a las instituciones que nos apoyaron en la realización de este libro, especialmente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que hizo posible su publicación. Con esto se demuestra que desde los estados se produce una historia que se entreteje con la que se difunde a nivel federal, al hacer posible que las voces de constituyentes del pasado resurjan para demostrar que las conmemoraciones no son meras fechas para recordar, sino oportunidades para hacer memoria, reflexionar y analizar momentos y procesos que dejaron huella en el devenir de México y sus territorios. Esta obra se suma a la historiografía que enaltece los 200 años del surgimiento de las constituciones estatales y la nacional. De esta manera esperamos contribuir al entendimiento de la historia de México, en la que se entretengan los acontecimientos, las normativas legales, los discursos, las ideas, los actores políticos, la política y las circunstancias sociales que dan matiz al sentir y a la construcción de la nación.



Durango y su andar federalista, 1824-1835

Pavel Navarro Valdez

Instituto Nacional de Antropología e Historia/
Museo Nacional de las Intervenciones



Tras el breve episodio del Imperio de Iturbide, el Congreso Nacional Constituyente elegido para redactar la constitución de la República Mexicana y que además asumió la tarea de reorganizar el gobierno y las instituciones del país, al expedir el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana en enero de 1824 determinó la creación del Estado Interno del Norte, el cual quedaría integrado por las antiguas provincias de Chihuahua, Nuevo México y Durango, con capital en la ciudad de Chihuahua.¹ La decisión del constituyente fue objetada por el gobierno y la Diputación Provincial de Durango, que estaba ya separada de la de Chihuahua, mediante diversas exposiciones y manifiestos dirigidos al congreso general, presentados ante el constituyente por el diputado duranguense Francisco Elorriaga, que demandaron que Durango se integrara por sí mismo en un estado de la Federación. Igualmente, las diputaciones provinciales de Chihuahua y Durango cruzaron entre sí varios comunicados, a través de los cuales los primeros expresaron su respaldo a la decisión del congreso, en tanto que los duranguenses reiteraron su propuesta.²

Ante estas posturas divergentes y la posibilidad que el diferendo entre Durango y Chihuahua evolucionara hacia un conflicto de mayores dimensiones el constituyente dio marcha atrás y resolvió la separación de Durango del Interno del Norte. El 22 de mayo de 1824 la comisión de Constitución, presidida por Miguel Ramos Arizpe, presentó un dictamen para erigir a Durango en un estado más de la Federación, el cual fue aprobado por el pleno del congreso y unos meses más tarde, al promulgarse en el mes de octubre la Constitución de 1824, se ratificó su existencia como estado de Federación.³

Correspondió al nuevo estado llamar a la integración de su propio Congreso Constituyente, el cual tuvo como prioridad redactar la constitución duranguense y sentar los cimientos para la administración pública

¹ César Camacho y Manuel González Oropeza, *Constitucionalismo*, p. 39.

² César Navarro, *Durango*, p. 90.

³ Michael Costeloe, *La primera*, p. 33.

y la vida política de la entidad. Tocó entonces a la Diputación Provincial emitir la convocatoria para elegir a los miembros del constituyente de Durango. Así, tras la realización del proceso electoral el Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Durango quedó instalado el 30 de junio de 1824 y con ello llegó a su fin la Diputación Provincial Durango.⁴ La conformación del naciente congreso conjugó la presencia de antiguos funcionarios del gobierno colonial, miembros de la extinta Diputación Provincial, sacerdotes del obispado, militares que habían participado en los pronunciamientos de Casamata, comerciantes de media fortuna, letrados de filiación republicana, en esta composición, desarrolló una labor legislativa dentro del marco y las ideas federalistas que imperaban en el país.⁵ Buena parte de los noveles congresistas contaba con experiencia de haber participado en la Diputación Provincial de la Nueva Vizcaya. Pertenecían al clero, José Joaquín Escárcega y Vicente Elizalde, el primero era cura de Santiago Papasquiaro y miembro de la Diputación Provincial, Elizalde párroco de Cuencamé y también diputado provincial. José María Elías González y Martín Miramontes eran integrantes de la corporación militar y ambos secundaron al coronel Gaspar de Ochoa cuando en nombre de la guarnición de Durango se adhirió el 5 de marzo de 1823 el Plan de Casamata. Por parte de los letrados, Felipe Ramos, José Agustín Gamiz y Francisco Robles Ramos contaba con una amplia experiencia como funcionarios de la Corona española, miembros de la facción contraria a la independencia hasta el último momento.⁶ José de Jesús Matos era un acaudalado hacendado y comerciante de Santiago Papasquiaro. Miguel Pérez Gavilán fue regidor del ayuntamiento de Durango. De Vicente Escudero, Pedro Cano y Francisco Arreola no se han encontrado antecedentes del desempeño en cargo públicos anteriores, por lo que se puede inferir que corresponden

⁴ César Navarro, *La Diputación*, p. 40.

⁵ Manuel Ferrer, *La formación*, pp. 153-159.

⁶ Para la elaboración de este trabajo se tomó como fuente primordial la *Colección de Leyes y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Durango*, publicada en 1828, junto con la *Colección de Leyes y Decretos del Primer Congreso Constitucional* cuyos ejemplares se conservan en la Biblioteca Central del Estado de Durango. Estos fueron los primeros libros editados en el estado de Durango, una vez que el gobierno adquirió una imprenta con cargo al erario, manejado por el impresor Manuel González. José Fernando Ramírez, *Noticias*, p. 19. Una nueva edición de estos importantes documentos para la historia legislativa de Durango fue publicada por el H. Congreso del Estado de Durango y el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora en 2006.

a los ciudadanos a los que la nueva legislación les abrió espacios para la participación política.

La misión primordial del Congreso Constituyente fue la de redactar la Constitución Política del naciente estado de Durango. Sin embargo, el cuerpo legislativo debió dotar primeramente de un conjunto de leyes básicas para el gobierno del nuevo estado en tanto la constitución terminaba de redactarse. Entre los primeros decretos que dictó el congreso cabe destacarse la *Ley Orgánica del Estado de Durango*⁷ promulgada apenas un mes después de instalado el congreso. Siguiendo las bases marcadas en el *Acta Constitutiva de la Nación Mexicana*, en la que se vislumbraba la adopción del sistema federalista.⁸ La *Ley Orgánica*, que sirvió de estatuto provisional en tanto se promulgaba la constitución política, determinó la independencia y soberanía del estado en lo referente a su gobierno y administración interior, asumió la república representativa y popular como forma de gobierno, estableció la perpetuidad de la religión católica, sin tolerancia de ninguna otra en la entidad.⁹ Aunque con el paso del tiempo y el desarrollo del trabajo constituyente las posiciones al interior del congreso se inclinaron hacia posturas de corte más federalista que posteriormente quedaron plasmadas en la propia constitución y la legislación adicional. Ya que en tanto se redactó la constitución, el congreso emitió un importante número de leyes y decretos que fueron dando forma al gobierno de la entidad. Después de poco más de un año de discusión, el constituyente culminó su tarea primordial de redactar el texto constitucional. Una más de las prioridades del constituyente fue la aprobación de la ley electoral, que regulara la elección de los siguientes congresos locales, así como de los representantes de Durango ante el congreso federal. En esta se estableció un sistema indirecto de tres instancias: en un primer momento se elegían electores municipales, que a su vez elegían a los de partido y estos últimos se reunían en la Junta Electoral del Estado, para nominar a los diputados y senadores, tanto locales como federales.¹⁰

Entre noviembre de 1824 y enero de 1825 se publicaron las constituciones de los vecinos estados de Jalisco y Zacatecas, cuyos modelos tomaron los legisladores duranguenses para proseguir su discusión y tener

⁷ Colección, 2006, p. 108.

⁸ Fernando Serrano Migallón, *Historia*, p. 155.

⁹ Colección, 2006, p. 108.

¹⁰ *Ibid.*, p. 125.



un cuerpo elaborado meses después, el 1 de septiembre de 1825.¹¹ Como apuntó la Dra. Mariana Terán Fuentes con los influjos del trienio liberal se vivió una eclosión de impresos y folletería política, tanto en Guadalajara como en la ciudad Zacatecas con el arribo de la primera imprenta.¹² En ese tiempo el estado de Durango carecía de imprenta, por lo que los primeros decretos fueron elaborados a mano y al igual que sus copias, no se imprimió por primera ocasión hasta que fue enviada a la ciudad de México en 1826, creando la falsa información que la fecha de publicación (en su acepción de difundir algo por medio de imprenta) era la fecha de su promulgación, queda claro que no es así, fue publicada, en su acepción de decretar o hacer público, en 1825, en el grupo promedio de los otros estados promulgadas en 1825.¹³

El propio año de 1825, al tiempo que la novel nación mexicana dio los primeros pasos bajo la organización de la República Federal y Durango como entidad soberana y vio la luz la constitución estatal falleció el obispo Juan Francisco de Castañiza y González, tercer Marqués de Castañiza, quien fungió como el representante más conspicuo de la provincia de Nueva Vizcaya en los asuntos políticos durante la década anterior. El prelado y heredero del título nobiliario ante el fallecimiento de su padre y sus cuatro hermanos mayores (marqués improbable), se desempeñó como rector del Colegio de San Ildefonso, posteriormente de la Real y Pontificia Universidad de México y fue alto funcionario del Tribunal del Santo Oficio; obispo de Durango desde 1816 a la par que diputado Constituyente en 1822. Ante la disolución del Congreso por parte del emperador Agustín de Iturbide se le nombró presidente de la Junta Nacional Instituyente.¹⁴ A su muerte, la cabeza del obispado en Durango permaneció vacante por cerca de seis años, lo que generó fricciones entre el poder civil, que reclamó las facultades de proveer las plazas eclesiásticas al cabildo del obispado, tal y como lo había hecho el estado de Jalisco. La ausencia de la importante figura eclesiástica y los cambios en el entramado institucional inherentes al modelo republicano favorecieron a los nuevos actores políticos que emergieron a la vida pública de tendencia federalista para hacerse de las riendas del gobierno del estado durante su primera década.

¹¹ Graziella Altamirano, *et al.*, *Durango*, p. 61.

¹² Mariana Terán, *Combates*, pp. 20-21.

¹³ Catherine Andrews, *El primer*, p. 152.

¹⁴ César Navarro, "El tercer Marqués de Castañiza. Un obispo criollo en la época de la independencia", pp. 11-52.

El Congreso Constituyente promulgó el 1 de septiembre de 1825 la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango*,¹⁵ jurada en nombre de “Dios todo poderoso, autor del universo y supremo legislador de las sociedades”. Los diputados señalaron que sus esfuerzos estuvieron impulsados por “el deseo de corresponder dignamente al grandioso objeto de su misión y afianzar para siempre a sus comitentes y posteridad, los derechos sagrados de libertad e independencia, que harán ciertamente eterna la gloria y prosperidad de la nación”.¹⁶ Desde el proemio se denota una preocupación por engarzar los destinos del estado de Durango con los de la Federación.

Los enunciados más significativos que dieron perfil a esta primera constitución pueden ser sintetizados a través de los siguientes preceptos. El estado de Durango se reconoce desde el artículo 2 como parte integrante de la Confederación Mexicana, independiente y soberano en lo que exclusivamente toca a su administración y gobierno interior. No podemos dejar de señalar que la constitución política de Durango es de la pocas en denominar al gobierno general explícitamente como gobierno de la confederación. Sus redactores complementaron su declaración de soberanía estatal con el entendimiento de una soberanía nacional en términos de representación de las soberanías estatales (federalistas), complementada con el artículo 3, el estado sólo delega a sus representantes en el soberano congreso general, la facultad necesaria para el desempeño de sus augustas funciones que prescriben y designa la constitución federal y el acta constitutiva.

Su gobierno sería popular y representativo dividido para su ejercicio en tres poderes, los cuales debían garantizar los derechos que la constitución reconoció a los ciudadanos, derechos naturales e imprescindibles, entre estos derechos se reconocía la igualdad ante la ley, los de libertad, seguridad y propiedad, y cito “los demás inalienables que por naturaleza les competan, aunque no se especifiquen, ni enumeren (por ejemplo, la libertad de imprenta protegido por la constitución federal)”. Sobre la libertad política de imprenta, aunque la omitieron en este primer capítulo, la retomaron y enunciaron más adelante como una de las facultades del

¹⁵ *Constitución*, 2014, p. 18.

¹⁶ *Colección*, 2006, p. 130. Consúltese en este libro el capítulo dedicado a los proemios en la tradición legal elaborado por José Enciso.



congreso, así como la de proteger los otros derechos imprescindibles a todo ciudadano.¹⁷ “Todos los duranguenses son iguales ante la ley y están bajo su amparo y protección, aun los que, en clase de transeúntes, pisen el territorio del estado”. Las constituciones de Yucatán, Michoacán y Guajuato por ejemplo si marcan diferencias legales con el transeúnte.¹⁸ Así el reconocimiento de ciudadanía fue mucho más abierto. Se reconocía como ciudadanos, a los nacidos en el estado, a los legalmente avecindados y a los extranjeros residentes que obtengan su condición de vecindad o que dispusiera de carta de naturalización.¹⁹

Eran ciudadanos duranguenses los que gozando de la cualidad de ciudadanos en los demás estados se avecindaran en el estado o inclusive los de Repúblicas Independientes de América que se avecindaran en el territorio. Un espíritu muy bolivariano o continental, por parte de los legisladores duranguenses; ya sea que pensarán en inmigrantes estadounidenses o en los de las nuevas repúblicas de la antigua América española, los ciudadanos pergeñados por los constituyentes en un optimismo al precepto liberal y republicano. No se tenían por duranguenses los que al proclamarse la libertad emigraron país extranjero o siguieron las banderas de este, o extranjeros avecindados en el territorio que no se solicitaron su naturalización.²⁰

Es de resaltarse lo detallado y explícito del artículo 14 que decretó la abolición de la esclavitud, “ningún duranguense quedara sujeta a esta miserable condición, y los que actualmente existe quedaran libre desde la publicación de la constitución, se prohíbe el comercio y el tráfico de esclavos” amen de la extinción de los títulos de nobleza y los mayorazgos. Aun con su posición de avanzada, mantuvo los fueros para las corporaciones, y preservó privilegios católicos como religión de estado “La religión será la católica a perpetuidad”, acotando “por ser la adoptada por la federación”, pero suprime el renglón de la intolerancia de cualquier otras, que se mantuvo en la constitución federal. Los constituyentes duranguenses se propusieron no contravenir o ir más allá de la constitución federal y evitar las polémicas en que se vio envuelto el congreso jalisciense que la acarreo

¹⁷ Colección, 2006, p. 132.

¹⁸ Catherine Andrews, *op. cit.*, p. 156.

¹⁹ Colección, 2006, p. 132.

²⁰ *Idem.*

una reconvencción del congreso general, por excederse en sus facultades para legislar sobre el tema.²¹

Los ciudadanos, sobra decir que varones, tenían derecho al sufragio y a ser postulados y elegidos para los cargos de representación popular, debe desatacarse que se eliminó los impedimentos de origen étnico para el ejercicio de los derechos ciudadanos, excluyó a quienes no poseían empleo, oficio o modo honesto de vivir conocido, y a los sirvientes domésticos, por consideres lo subordinados a la voluntad del patrón, no obstante, fue menos restrictiva en comparación con otras constituciones estatales, por ejemplo, la del estado de México publicada un par de años después que pida un peculio bastante alto para el desempeño de los cargos.²² La restricción de saber leer y escribir se pospuso hasta 1835, pues el espíritu era ampliar la base de participación política en el legislativo, en este espíritu liberal de todos iguales ante la ley no puso restricciones a los eclesiásticos y militares para ser diputado y senador local, siempre y cuando no fueran de la curia, solamente no podían ser electos; el gobernador, vicegobernador, el muy reverendo señor obispo, el vicario o el encargado del gobierno de la diócesis, el comandante general, los diputados y senadores al congreso general, (después se ajustarían restricciones a los eclesiásticos conforme liberalismo entró en conflicto con los cuerpos eclesiásticos y militares sus posturas más acendrada de antiguo régimen).²³ En diferencia en el diseño de los distintos poderes para ser gobernador lo impedimentos si eran mucho más restrictivo, nos podía serlo ni eclesiástico, funcionario de la federación, (que incluyó a los militares) diputado o senador al congreso general o del estado. Se reconoce que la Constitución de 1825 representó un gran paso en la construcción del sistema representativo y la ampliación de la participación ciudadana en la vida política de la entidad.²⁴

Como particularidad se perdían los derechos ciudadanos en Durango por la condición de deudor fallido o a los fondos públicos de plazo cumplido. La preocupación por la salud de la hacienda pública, en esta primera etapa desde Durango es de destacarse, fue de los estados más cumplidos y responsables en su aportación del contingente para la federación, según

²¹ *Ibid.*, p. 130.

²² Charles Hale, *El liberalismo*, p. 99.

²³ *Colección*, 2006, p. 134.

²⁴ Manuel González Oropeza, "La evolución constitucional en Durango", p. 22.



los cálculos estimados por Jorge Castañeda Zavala y más recientemente por Jesús Hernández Jaimes y Edgar Bueno.²⁵

APORTACIONES Y REINTERPRETACIONES DEL FEDERALISMO EN DURANGO

El congreso cesó sus funciones y convocó a las elecciones para el Primer Congreso Constitucional de Durango, que se instaló el 10 de mayo de 1826.²⁶ El congreso aceptó la renuncia del gobernador Rafael Bracho y su consejo de gobierno, y en uso de sus atribuciones eligió y designó primer gobernador del estado a Santiago Baca Ortiz (1826-1828). Baca Ortiz fue diputado por Durango al congreso Imperial constituyente al igual que Castañiza, en que la convocatoria basada en representación municipal y provincial dio un sobre representación de legisladores como nunca más volvería a tener el estado. Baca Ortiz fue arrestado después del 26 de agosto de 1822, con lo que consolidó su liderazgo entre los federalistas duranguenses.²⁷ La designación expresa con nitidez la presencia de una nueva generación política dentro del escenario duranguense, la de los federalistas o confederalista.²⁸

El gobierno duranguense bajo la conducción del gobernador Baca Ortiz se distinguió por impulsar una política de tendencia liberal, podemos resaltar los esfuerzos por implementar las primeras reformas que transformaran las estructuras y disipaciones corporativas que rigieron a la sociedad duranguense durante largo tiempo, apoyándose en este intento en las leyes y decretos emitidos por el primer congreso durante el tiempo que se mantuvo en funciones. El congreso en reconocimiento al destacado insurgente y primer presidente de la República Guadalupe Victoria, el cual se encontraba desde octubre de 1824 al frente del poder ejecutivo

²⁵ Jesús Hernández Jaimes, *La formación*, pp. 124 y ss. y el capítulo de Edgar Bueno en este volumen.

²⁶ Conformaron la cámara de senadores: Antonio Alcalde, Jesús María Mena, José Ángel Bernal, José Joaquín Escárcega y Francisco Arreola. Por otra parte, resultaron electos diputados José María Arrieta, Pedro Cano, Vicente Escudero, José María Méndez Escárcega, José Antonio Zubiria e Ignacio Zariñana. *Colección*, 2006, p. 88.

²⁷ Santiago Baca Ortiz nació en Santiago Papasquiario en 1790, se trasladó a la ciudad de Durango para estudiar jurisprudencia y fue empleado del gobierno de la Intendencia en la etapa final del régimen colonial. Manuel Lozoya Cigarroa, *Hombres*, p. 99.

²⁸ Marcello Carmagnani, *Las formas*, pp. 11- 13.

federal;²⁹ designó a la ciudad capital del estado como Victoria de Durango y a la población natal del distinguido duranguense como Villa Félix de Tamazula.³⁰

Desde la época del congreso constituyente, los legisladores manifestaron su preocupación en relación con el problema de la instrucción de la población. En concordancia con ello, el primer congreso emitió el reglamento para la fundación de una escuela Lancasteriana en Durango. La escuela estaría organizada por tres departamentos. El primero brindaría instrucción a los niños en letras, ahí se les enseñaría a escribir en arena, pizarras y papel, ortografía, aritmética y gramática castellana, los cursos comprenderían también el estudio de catecismos de la doctrina cristiana, así como de los preceptos civiles. La colegiatura de los alumnos fue fijada en un peso mensual, excepto para los niños muy pobres, en cuyo caso se les facilitaría educación gratuita. El segundo departamento funcionaría como escuela normal, destinado a formar profesores, instruyéndoles en la teoría y la práctica del sistema de enseñanza. Los aspirantes debían presentar certificado de llevar una vida arreglada y buenas costumbres, contar con una edad mínima de 25 años, buena salud y acreditar instrucción religiosa y civil, saber leer y escribir y contar con principios de aritmética y gramática. En el tercer departamento se enseñaría dibujo, geografía e historia, idioma francés, elementos de latinidad y matemáticas. Aunque a pesar de las buenas intenciones, la difícil situación económica de la entidad impidió que las escuelas operaran y su apertura se pospuso hasta 1834.³¹

El grupo duranguense comulgaba con la idea confederalista de la celebración de un pacto entre los estados y el gobierno nación, como vía de dismantelar el poder centralizador y la supremacía de las regiones en materia económica, política y fiscal.³² El grupo confederalista, dirigió la política estatal en los primeros años de la República Federal, un estado pequeño, pero defensor del sistema confederal, puntual en el pago del contingente para honrar el compromiso con la federación a pesar de los inconvenientes.

En coordinación con los propietarios de fincas rurales se instauró la policía rural para preservar la seguridad en el campo. Los dueños de las haciendas y sus administradores tendrán la jefatura de esos destacamen-

²⁹ Lilian Briseño, *et al.*, *Guadalupe*, p. 88.

³⁰ *Colección de Leyes*, 2006, p. 147.

³¹ *Ibid.*, p. 230.

³² Marcello Carmagnani, *Economía*, p. 46.



tos y estarían facultados para nombrar personas de su confianza como integrantes de la policía, informando de ello al jefe de partido. Una vez que la policía rural hubiese detenido algún delincuente debía entregarla inmediatamente a los alcaldes de los pueblos. Según la legislación aprobada por el propio congreso las poblaciones de más de mil habitantes debían contar con alcalde y procurador de justicia y en las de más de quinientos habitantes cuando menos un alcalde.³³

Debido a los desajustes ocasionados por el proceso de independencia, la vida económica duranguense había decaído. Para tratar de revertir el deterioro, el gobierno y el congreso local pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a impulsar las actividades productivas de la entidad. Para fomentar la producción agropecuaria y a la vez combatir la concentración de tierras en pocas manos, el congreso emitió un decreto señalando la obligación de los dueños de las haciendas y latifundios de arrendar las parcelas excedentes que no pudieran cultivar, conminando a los propietarios a no alterar o elevar bajo ningún pretexto las rentas pactadas, ni forzar a los arrendatarios a cualquier tipo de trabajo o servicio extra, ni a dejar a cuenta el fruto de su trabajo.³⁴ Debo señalar que a este proyecto desamortizador y anti latifundista no prosperó debido a la furiosa oposición de la Iglesia, propietaria de una gran cantidad de tierras y detentadora de una gran influencia política y económica, así como de la oligarquía terrateniente que frustraron la implementación de la novedosa iniciativa,³⁵ que, si bien no logró materializarse, nos da una clara muestra del ideario liberal del gobernador Baca Ortiz y su grupo de legisladores. Una medida más a través de la cual se pretendió distribuir la tierra entre un mayor número de pequeños propietarios fue la continuación del repartimiento individual de las tierras de “los antiguos pueblos de indios” señalado en el artículo 55 del reglamento interior de pueblos, promotor del parvifundio, pero con un ajuste realizado por el congreso que estipuló que a los naturales no se les cobrara derechos y los gastos de ejecución, que ello implicaba serían asumidos por los ayuntamientos.

Con el objetivo de alentar la industria en la entidad, el congreso ordenó la instalación de una fábrica de puros y cigarros por cuenta del gobierno

³³ Justicia y municipalidad son tratados con mayor detalle en el capítulo de Tania Rai-gosa.

³⁴ *Colección*, 2006, pp. 228-235.

³⁵ Graziella Altamirano, “Iglesia y grupos de poder. Una aproximación a la reforma en Durango”, p. 162.

del estado en el viejo obraje de la ciudad, en que la hacienda nacional dejaba de manos del estanco del tabaco a los estados, es decir su manufactura y comercialización.³⁶ En poco tiempo dicho establecimiento se convirtió en el centro manufacturero más pujante de la región y una importante fuente de ingresos para el erario. Además, se autorizaron exenciones fiscales y condonación de alcabalas para atraer inversiones y empresas a la entidad, permisos para importar despepitadoras de algodón e incentivar su cultivo en los campos aledaños al río Nazas.³⁷

Las autoridades estatales conscientes de la precaria situación económica del grueso de la población duranguense liberaron del pago de alcabalas una larga lista de productos, entre ellos carbón, leña, canastos, escobas, petates, sal, maíz, habas, lentejas, chícharos, papas, requesón, frutas, mieles, gallinas, pavos, pescados y varios productos más. Para compensar sus ingresos el estado asumió el impuesto sobre el papel, que hasta ese momento correspondía la federación. Igualmente, para apoyar la minería fueron exentados del pago de alcabalas todos los granos alimentos e insumos destinados a dicha industria durante cinco años. Para desalentar la salida ilegal de plata, aumentar la acuñación en la Casa de La Moneda de Durango y paliar la escasez de circulante fue reducido el impuesto de amonedación de cuatro a dos reales por marco de plata.³⁸

Por otra parte, se aprobó un programa para dotar de infraestructura elemental para el estado y el congreso ordenó la construcción de una serie de caminos, que comunicaran las localidades del interior del estado y lo vincularan con las entidades vecinas, al tiempo que se aprobó la introducción del agua del río Tunal a la ciudad de Durango. Esta medida acarreó un nuevo diferendo entre el clero y el gobierno estatal, pues para tal efecto el gobernador Baca Ortiz autorizó a utilizar y administrar los capitales píos heredados a la Iglesia católica por los sacerdotes duranguenses: Francisco Fernández Valentín, José Díaz de Alcántar y Juan Manuel Esquivel. Incluso los espolios del obispo fueron objeto de pleito legal entre la Iglesia y el estado. Las disputas por el manejo de estos recursos se incrementaron cuando el gobierno del estado extinguió el Tribunal de Hacendaria de la catedral, privando a la Iglesia la jurisdicción sobre los diezmos y colocándolo en manos del gobierno del

³⁶ Jesús Hernández Jaimes, *op. cit.*, pp. 72-78.

³⁷ *Colección*, 2006, pp. 221- 239.

³⁸ *Ibid.*, pp. 223-257.



estado a través de la recién creada junta de diezmos, lo que evidentemente fue rechazado por el cabildo de la diócesis.³⁹

Los conflictos entre el nuevo poder civil que trataba de aplicar las nuevas leyes del naciente estado y la vieja y poderosa institución eclesiástica que se resistía a todo cambio que afectara sus intereses minara sus privilegios continuaron erupcionando frecuentemente, agudizados por la negativa del Vaticano de reconocer la independencia de la nación. Así, cuando la muerte sorprendió a varios obispos, entre ellos el marqués de Castañiza, el Papa evidenció su descontento con la nación mexicana se negó a nombrar sucesores, dejando vacías varias sillas diocesanas.⁴⁰ Ante esta actitud de la Iglesia y tomando en cuenta que la diócesis continuaba sin cabeza, el congreso determinó otorgarle al gobernador el patronazgo eclesiástico, confirmando la autoridad para nombrar plazas eclesiásticas en la entidad. Los gobiernos de los estados que tomaron estas medidas como los de Jalisco y Durango, fueron acusados de tomar “repugnantes y anti-religiosas providencias y de sembrar dañosísimas para sus entidades”, pues argumentaban los proclericales, con ellas suplantaban al papado y excitaban a la violencia.⁴¹

La necesidad de establecer los límites entre la Iglesia y el Estado se convirtió en uno de los asuntos primordiales y siempre presentes en la historia de México durante la primera, mitad del siglo XIX. Así, desde muy temprano los políticos duranguenses tomaron posiciones contrarias en extremo, muy liberales para unos, demasiado conservadoras para otros. La solución al conflicto no se encontraría fácilmente y se prolongaría por buena parte del siglo y como una de las cuestiones pendiente a resolver en la legislación estatal, en este entorno de conflicto en 1827 concluyó actuación del Primer Congreso Constitucional de Durango.

La preponderancia del grupo de tendencia federalistas en Durango fue ratificada con la victoria en los comicios para elegir el segundo congreso constitucional y la designación del segundo gobernador, perteneciente al mismo grupo político, el licenciado Francisco Elorriaga, para el periodo 1829-1833.⁴² Elorriaga era originario de Parral, desde muy temprano se radicó en la ciudad de Durango titulando como abogado, Diputado al Congreso Nacional Constituyente de 1824, ocupó el cargo de magistrado del

³⁹ *Ibid.*, pp. 232, 257, 266.

⁴⁰ Graziella Altamirano, *op. cit.*, p. 162.

⁴¹ César Navarro, *Durango*, p. 103.

⁴² José de la Cruz Pacheco, *Breve*, p. 35.

Supremo Tribunal de Justicia durante el gobierno de Baca Ortiz y luego la jefatura de la milicia cívica Junto al Baca Ortiz fue de los impulsores de la logia yorquina en la ciudad.⁴³

No sobra señalar que de las primeras medidas del gobierno de Elorriaga fue la adquisición de la imprenta del gobierno del estado y los primeros libros publicados en Durango fueron la *Colección de Leyes y Decretos del Congreso Constituyente del Estado de Durango*, publicada en 1828, junto con la *Colección de Leyes y Decretos del Primer Congreso Constitucional*.⁴⁴ La publicación de bandos leyes y decretos forma parte trascendental de la voz del estado, la manera de comunicar sus disposiciones y las del gobierno central sus habitantes y sumado al contexto republicano, una herramienta fundamental para el cabal ejercicio de la soberanía estatal.

Por parte de los grupos de tendencia federalista, se mantuvo y reconoció el liderazgo del licenciado Francisco Elorriaga, tras el fallecimiento de Santiago Baca Ortiz poco después de dejar al cargo de Gobernador. En esta primera etapa de vida independiente las miras políticas estuvieron atentos y cercanos al referente confederalista del vecino estado de Zacatecas y del gobernador Francisco García Salinas.⁴⁵ Además de que los conflictos con las élites duranguenses reacias al reformismo de Elorriaga agitaron el ambiente político duranguense con intentos de asonadas militares, conspiraciones con componentes peninsulares, conflictos electorales y la disolución temprana del Segundo Congreso Constitucional, lo que impidió la participación duranguense en la elección presidencial de 1829.

Elorriaga y el gobernador de Zacatecas Francisco García Salinas compartieron tiempos en el ejercicio de funciones y aventuras políticas, como cuando el gobernador duranguense fue desplazado de su despacho por una asonada en respaldo del plan de Jalapa y a la administración Bustamante y solamente pudo retornar apoyado por las milicias zacatecanas, para sumarse junto con los estados de Jalisco y San Luis Potosí en uno de los episodios más destacados de apoyo confederal de las entidades en el primer federalismo, en que Durango formó parte activa con posiciones definidas desde su entramado legal y su actuación política. Las propuestas legislativas de los congresos duranguenses en ocasiones fueron tachadas de radicales, atentatorias a la propiedad privada e instigadoras de la anarquía y desor-

⁴³ Manuel Lozoya Cigarroa, *op. cit.*, p. 235.

⁴⁴ *Colección*, 1828, p. X. y ss.

⁴⁵ Mariana Terán, *op. cit.*, pp. 29 y 30.



den social. En las primeras facetas del federalismo duranguense destaca su adhesión y apoyo a los proyectos reformadores liberales y a la posición junto a varios estados por la preservación del federalismo contra las intenciones de imposición del centralismo.

FUENTES CONSULTADAS

Bibliográficas

- ALTAMIRANO, Graziella, “Iglesia y grupos de poder. Una aproximación a la reforma en Durango” en Beatriz Rojas, coordinadora, *El poder y el dinero. Grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX*, México, Instituto José María Luis Mora, 1994.
- ALTAMIRANO, Graziella, César Navarro, Guadalupe Villa y Rosa Helia Villa, *Durango. Una Historia Compartida*, México, Instituto José María Luis Mora, (Serie Historias Compartidas, 2 tomos), 1998.
- ANDREWS, Catherine, *El primer constitucionalismo mexicano: Derechos, representación y diseño de poderes en la constitución federal (1824) y las Siete Leyes (1836)*, México, Tirant Lo Blanch, (Colección Historia del Derecho en América Latina), 2024.
- BRISEÑO, Lillian, Laura Solares y Laura Suárez de la Torre, *Guadalupe Victoria, primer presidente de México*, México Instituto José María Luis Mora/Secretaría de Educación Pública, 1986.
- CAMACHO QUIROZ, César y Manuel González Oropeza, *Constitucionalismo mexicano de las entidades federativas, Zinacantepec*, El Colegio Mexiquense, 2022.
- CARMAGNANI, Marcello, *Las formas del federalismo mexicano*, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, (Serie Lecciones sobre federalismo, número 6), 2005.
- CARMAGNANI, Marcello, *Economía y política. México y América Latina en la contemporaneidad*, México, El Colegio de México, 2011.
- Colección de Leyes y Decretos del Primer Congreso Constitucional del Estado de Durango*, Durango, Imprenta del Gobierno del Estado de Durango, 1828.
- Colección de Leyes y Decretos del Congreso Constituyente al Cuarto Congreso Constitucionales del Estado de Durango*, Durango, H. Congreso del Estado de Durango/LXIII legislatura/Instituto José María Luis Mora, 2006.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango*, Durango, Gobierno del estado de Durango, 2014.
- COSTELOE, Michael, *La primera República federal de México (1824-1835)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

- FERRER, Manuel, *La formación de un Estado nacional en México. El imperio y la República federal: 1821-1835*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995.
- GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel “La evolución constitucional en Durango”, en Antonio Arreola, *et al.*, *Historia del Congreso del Estado de Durango*, México, H. Congreso del Estado de Durango/LXIII Legislatura/Editora Laguna, 2005.
- HALE, Charles, *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI, 1995.
- HERNÁNDEZ JAIMES, Jesús, *La formación de la Hacienda pública mexicana y las tensiones centro periferia, 1821-1835*, México, El Colegio de México/Instituto José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
- LOZOYA CIGARROA, Manuel, *Hombres y mujeres de Durango*, Durango, s/e, 1985.
- NAVARRO, César, “El tercer marqués de Castañiza. Un obispo criollo en la época de la independencia” en Beatriz Rojas, *El poder y el dinero. Grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX*, México, Instituto José María Luis Mora, 1994.
- NAVARRO, César, *Durango. Las primeras décadas de vida independiente*, México, Miguel Ángel Porrúa/Universidad Pedagógica Nacional/Instituto José María Luis Mora, 2001.
- NAVARRO, César, *La Diputación Provincial de las Provincias Internas de Occidente, Nueva Vizcaya y Durango, Actas de sesiones 1821-1823*, Instituto José María Luis Mora, 2006.
- PACHECO, José de la Cruz, *Breve historia de Durango*, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, (Colección Breve Historia de los estados), 1997.
- RAMÍREZ, José Fernando, *Noticias históricas y estadísticas de Durango, (1849-1850)*, Coppel, Bibliobazar, 2021.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Historia mínima de las constituciones en México*, México, El Colegio de México, (Colección Historias mínimas), 2013.
- TERÁN, Mariana, *Combates por la soberanía, Zacatecas*, Universidad Autónoma de Zacatecas, (Serie Lecciones sobre federalismo, número 7), 2005.

Archivos

Biblioteca Central del Estado de Durango “José Ignacio Gallegos Caballero”. BCED
Biblioteca del H. Congreso del Estado de Durango. BHCED



El Legislativo bicameral como mecanismo para detener la tiranía

Daniel Guillermo Rodríguez Barragán

Universidad Juárez del Estado de Durango



En el presente capítulo se aborda el tema del congreso bicameral, el que fue establecido por la primera constitución de Durango. Pero no se trata de únicamente señalar qué artículos dicen esto o aquello; sino que una interpretación de por qué se dio tal figura en un lugar como Durango al inicio de su vida independiente, abordando para eso la disputa política y discursiva entre los federalistas y centralistas agrupados en las logias yorkina y escocesa respectivamente, así como en la situación de aislamiento geográfico de Durango que volvía factible la visión del enemigo interno.

DURANGO AL INICIO DE LA VIDA INDEPENDIENTE

Así como México entró a la vida independiente con fronteras políticas poco claras con sus vecinos, al interior del nuevo país hubo estados que se enfrentaron a la misma situación. Durango fue una de esas entidades, debido a que venía de un largo proceso que durante el virreinato llevó a la entonces Nueva Vizcaya a cambiar de límites territoriales, algo que la consumación de la independencia nacional no hizo sino acentuar. El 17 de noviembre de 1821 se promulgó el decreto sobre las Bases de la convocatoria a Cortes en la que se reconoció que la Nueva Vizcaya estaba formada por los actuales estados de Durango y Chihuahua (Art. 8), algo que se confirmó en el artículo quinto del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana del 31 de enero de 1824, al señalar que entre los estados reconocidos de la federación se encontraba el Interno del Norte, formado por las provincias de Durango, Chihuahua y Nuevo México (Art. 7).¹

Las constantes disputas entre las élites políticas de Durango y Chihuahua por quedarse con la capital del enorme estado norteno llegaron a un punto irreconciliable a inicios de 1824, al grado de que ambos grupos buscaron negociar con las autoridades nacionales para dividir el estado. Entre marzo y abril de ese año el Lic. Francisco Elorriaga, diputado cons-

¹ *Decreto sobre Convocatoria a Cortes*, p. 2 y *Acta Constitutiva de la Nación Mexicana*, p. 2.

tituyente originario del actual Durango, solicitó al Congreso general le permitiera a Durango elegir a sus propios diputados locales, ya que consideraba que la escisión con Chihuahua era inminente, por lo que debían estar listos para que cuando esto ocurriera, se tuviera ya un congreso local.²

El artículo quinto de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 estableció que Chihuahua y Durango eran estados separados, mientras que a Nuevo México le dio el carácter de territorio.³ Al parecer entre la promulgación del Acta Constitutiva el 31 de enero de 1824 y la nueva constitución nacional el 04 de octubre de 1824, las negociaciones del Lic. Francisco Elorreaga tuvieron éxito. Durante las sesiones del constituyente dicho representante estableció alianzas con importantes figuras políticas como Fray Servando Teresa de Mier, Pedro Paredes y Pedro de Ahumada, presionando para que el tema de las divisiones territoriales fuera el último a tratarse, además, promovió que se suspendiera la ley de convocatoria de las legislaturas locales y que los territorios que habían formado las Provincias Internas de Occidente durante el virreinato se convirtieran en estados.⁴

Dicha inestabilidad en la delimitación de fronteras, fue acompañada por la formación de grupos políticos locales que representaron tendencias de diversa índole. Al igual que a nivel nacional, en Durango los centralistas se agruparon en la logia escocesa y los federalistas en la yorkina, en la primera estaban los “hombres de bien” del antiguo régimen, terratenientes, peninsulares, el alto clero, monarquistas, etc.; mientras que en la segunda estaban los comerciantes, trabajadores administrativos, el bajo clero y jefes militares, todos de mediana fortuna.⁵

Entre los líderes federalistas se encontraba el ya mencionado Lic. Francisco Elorreaga, así como el también constituyente federal Lic. Santiago Baca Ortiz. Los dos al regresar a Durango después de participar en la redacción de la constitución nacional, trajeron consigo no sólo las ideas federalistas, sino también los contactos con los líderes de la logia yorkina en la Ciudad de México, quienes ayudaron a organizarse a sus pares duranguenses. También fue invaluable el apoyo del general Guadalupe Victoria,

² *Durango. 200 años de historia*, México, Cámara de Diputados LXV Legislatura, p. 19.

³ *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos*, p. 2.

⁴ *Durango. 200...*, p. 19.

⁵ César Navarro Gallegos, “La transición política del régimen provincial al federalismo en Durango 1820-1835”, p. 32.

quien al ser electo presidente de la república mostró atención a los sucesos políticos de su patria chica, respaldando a los federalistas locales.⁶

Los federalistas se mostraron como la mayor fuerza política desde un inicio de la vida independiente, acaparando rápidamente los principales puestos gubernamentales. En 1826 al obtener la mayoría de los lugares en el congreso local, designaron como primer gobernador constitucional al Lic. Santiago Baca Ortiz, a partir de entonces y hasta 1835 casi todos los gobernadores que siguieron fueron federalistas, tales como Francisco Elorreaga, Basilio Mendarózqueta y José María del Regato. Incluso se pudo observar una transformación organizativa, ya que con el paso del tiempo se fue abandonando la logia como aglutinador político para dar paso a otros tipos de instituciones más parecidas a los partidos políticos. En esa nueva etapa destacaron federalistas como Marcelino Castañeda y José Fernando Ramírez.⁷

Por su parte los sectores agrupados en la logia escocesa respondieron a este predominio federalista con una actitud que desafiaba el orden constitucional. La victoria de Baca Ortiz para la gubernatura fue impugnada por los centralistas liderados por el senador Jesús María Mena, quien promovió un juicio político, al no tener éxito, se intentó, sólo tres meses después de ser elegido, que concluyeran las actividades del primero congreso local, medida que tampoco fructificó. Al ver cerradas las posibilidades legales de acabar con el gobierno federalista los de la logia escocesa recurrieron a métodos anticonstitucionales. A principio de 1827 los miembros de la guarnición militar en Durango, con el respaldo de los políticos agrupados en la logia escocesa y con la bendición del alto clero, tomaron el control de la capital del estado y desconocieron al gobernador y al congreso local, manteniendo el poder hasta junio de ese año cuando el orden constitucional fue reinstaurado por tropas federales enviadas desde la Ciudad de México.⁸

Como respuesta a esa intentona golpista los federalistas moderaron sus actitudes, indultaron a los líderes rebeldes y convocaron a elecciones anticipadas para la legislatura local en septiembre de 1827. Esa nueva postura no tuvo la respuesta deseada, ya que los centralistas desconocieron los resultados de esa nueva elección, los que si bien no recurrieron a un

⁶ José de la Cruz Pacheco Rojas, *Breve historia de Durango*, pp. 129-134.

⁷ José Ignacio Gallegos, *Historia de Durango 1563-1910*, pp. 46-50.

⁸ José de la Cruz Pacheco Rojas, *Historia breve de Durango*, pp. 120-126.



nuevo levantamiento militar, sí entorpecieron el funcionamiento del congreso local mediante acciones jurídicas y campañas políticas ante las autoridades nacionales, lo que llevó a que de nuevo se disolviera el congreso local anticipadamente en 1828.⁹

De 1830 a 1832, como consecuencia de los sucesos en la política nacional, los centralistas lograron tomar y mantener el control de Durango, expulsando a las autoridades constitucionales. Y es que la llegada a la presidencia de la república de Anastasio Bustamante, de tendencias centralista, llevó a que la gubernatura fuera ocupada por el Lic. Juan Antonio Pescador, miembro de la logia escocesa. Pero cuando aquel comenzó a tener problemas para mantener el poder en el ámbito nacional, en Durango los federalistas, dirigidos por el general José Urrea, secundaron el levantamiento militar de Antonio López de Santa Anna y recuperaron el control de la entidad en julio de 1832, represando a la gubernatura al Lic. Francisco Elorreaga y a los miembros del congreso local. Episodio que no significó el fin de los enfrentamientos entre yorkinos y escoceses, sino sólo una muestra de la inestabilidad política que vivió Durango en los primeros años de su vida como entidad federativa.¹⁰

Ese convulso escenario local es fundamental para comprender la primera constitución de Durango, especialmente la disposición de que el Poder Legislativo se dividiera en dos cámaras. Se sostiene en este trabajo que dicha medida se explica por la inestabilidad descrita, pero también que dichos disturbios políticos se alimentaban de las disposiciones constitucionales como la antes mencionada. Pero antes de entrar de lleno a ese aspecto, es pertinente mencionar en el siguiente apartado las singularidades más destacables de la Ley de Leyes que los duranguenses se dieron al inicio de su vida como entidad federativa.

PECULIARIDADES DE LA CONSTITUCIÓN

En la primera Ley Suprema de Durango hay determinadas peculiaridades que se mencionan a continuación. El congreso constituyente que le dio origen se reunió por primera vez en junio de 1824 y estuvo integrado por 12 diputados: José Joaquín Escárzega, Vicente Escudero, Francisco Arreola, Vicente Elizalde, Martín Miramontes, Felipe Ramos, Agustín Gámiz,

⁹ Arnulfo Ochoa Reyna, *Historia del Estado de Durango*, pp. 52-57.

¹⁰ *Ibid.*, pp. 63-66.

José María Elías González, Pedro Cano, Miguel Pérez Gavilán, Francisco Robles y José de Jesús Matos, algunos de la logia escocesa, pero la mayoría de la yorkina. Se promulgó el 01 de septiembre de 1825 por el gobernador Rafael Bracho, siendo la onceaba del país. Como intento de reconciliación después de su promulgación se dio a conocer el 15 de octubre del mismo año, por parte del congreso constituyente, el decreto XXIX en que se anunciaba un indulto general, con motivo de la promulgación de la nueva Carta Magna, para todos los presos que no hubieran cometido delitos de lesa majestad divina, de lesa nación, de parricidio y de homicidio alevoso o proditorio.¹¹

Su elaboración fue paralela a los trabajos del constituyente nacional en donde los representantes de Durango pugnaban porque la entidad fuera reconocida como un estado por sí misma. Eso ayuda a explicar la consolidación desde los primeros años de la logia yorkina, ya que, si a nivel nacional el federalismo se había impuesto, el haber conseguido que se reconociera la separación de Durango y Chihuahua sólo fue posible con una coincidencia entre las fuerzas locales y las nacionales.

También hay que mencionar que su promulgación fue tardía si se le compara con la constitución federal, por lo que durante 1824 y parte del año siguiente Durango se organizó a partir de un decreto constitucional que intentaba normar la vida social con lo establecido en la nueva Carta Magna nacional. Algo similar ocurrió respecto al ordenamiento jurídico heredado del virreinato, ya que se estableció que toda norma de aquel tiempo que no contraviniera la constitución nacional seguiría en vigencia, algo que se mantuvo cuando se promulgó la constitución local, seguramente como forma de aprovechar la reglamentación ya existente.¹²

Con sus 12 secciones, 26 capítulos y 140 artículos la Constitución de Durango fue la tercera más breve, superada sólo por las de Chihuahua y Veracruz con 128 y 84 artículos respectivamente.¹³ Al parecer no hubo una correlación entre el tiempo del congreso constituyente y la extensión del documento, seguramente en su labor fue más importante el debate sobre el contenido de los artículos que la idea de que la constitución reglamentara amplios aspectos de la vida en común. Dejando una gran

¹¹ Decreto XXIX. *Del indulto con motivo de la publicación de la constitución*, p. 1.

¹² Emiliano Hernández Camargo, *Nuestras Constituciones*, pp. 471-472.

¹³ Enrique Arrieta Silva, "La constitución de Durango de 1825: matices y peculiaridades", p. 125.



responsabilidad en las leyes emanadas de la Carta Magna que se promulgarían después.

En la constitución se definió al Estado como “la reunión de todos los que pisan su territorio” (Art. 1), cuya organización debía ser “popular y representativa” (Art. 7), además la Carta Magna estableció elecciones indirectas (Art. 67), la igualdad ante la ley (Art. 12) y los derechos de libertad, seguridad y propiedad (Art. 15); aunque también señaló obligaciones, como la obediencia a la constitución nacional y local (Art. 135). En la nueva Ley Suprema estatal se erigió al catolicismo como religión de Estado, pero se omitió la intolerancia a las demás (Art. 9), se definió un nuevo ordenamiento territorial (Art. 4), se abolió la esclavitud (Art. 14) y los títulos de nobleza (Art. 13), se dejó fuera de la ciudadanía a los sirvientes domésticos, a los analfabetos y a quienes no tuvieran modo de vivir conocido (Art. 20). La constitución mantuvo los fueros eclesiásticos y militares (Art. 89) y dividió a los poderes del Estado en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Art. 8), siendo lo más relevante para este texto, que junto con las constituciones de Oaxaca (Art. 35) y Veracruz (Art. 17), estableció un congreso dividido en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Además, creó la figura de vicegobernador para que auxiliara en sus tareas al titular el Ejecutivo, mientras que dejó a la ley secundaria definir el número de miembros del Poder Judicial (Art. 88).¹⁴

La Constitución de Durango de 1825 formó parte de un proceso más amplio de intento de crear un Estado moderno, según los cánones del occidente de inicios del siglo XIX, siendo innegable que dichos Estados requieren de un discurso legitimador que explique su existencia a partir de un entendimiento del pasado y el presente respectivo. Por lo tanto, se trataba de generar una estructura jurídica propia que diera certeza a la convivencia social, pero también, si ampliamos las miras como se propone en este capítulo, podemos entender esta Carta Magna como un valioso documento histórico y sociológico, en donde se observa un intento de ordenar la realidad social más allá de lo estrictamente legal por parte de la élite política que le tocó gobernar durante el cambio del virreinato a la independencia.

¹⁴ *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango*, pp. 1-20; *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oajaca*, p. 9 y *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz*, p. 5.

El establecimiento de un congreso bicameral, obedeció menos a una necesidad administrativa y más a una lucha política y discursiva entre escoceses y yorkinos. Los segundos entendieron que el mayor peligro era el establecimiento de una tiranía por parte de las élites locales, lo que refleja una forma de entender el pasado inmediato que los legitimaba como grupo gobernante, al encontrarse, según su punto de vista, en un permanente estado de emergencia que sólo ellos podían contener, algo que se “naturalizaba” socialmente por el relativo aislamiento geográfico de la entidad, lo que dotaba de “sentido común” a esa visión. Por tanto el que Durango haya tenido un congreso con dos cámaras no es un mero anécdota, sino una peculiaridad que puede servir de pretexto para analizar la relación entre la interpretación política de la realidad y el entorno físico, lo que se hace en los siguientes dos apartados.

EJECUTIVO DÉBIL Y LEGISLATIVO ¿FUERTE?

Para los teóricos de la ciencia política un Poder Ejecutivo que convive con un legislativo dividido en dos cámaras será generalmente fuerte. No sólo las facultades legislativas se dividen mientras que las ejecutivas permanecen en manos de una sola persona, sino que al coexistir con dos cámaras el ejecutivo tiene una mayor capacidad de negociación: si una de ellas se muestra renuente la otra puede ser más propicia, además el hecho de que la legislatura de una de las cámaras dure la mitad que la de la otra, garantiza que la relación entre los dos poderes se modifique parcialmente a mitad de la administración, lo que suele favorecer al ejecutivo.¹⁵

Según esta visión la Constitución de Durango de 1825 puede ser entendida como una anomalía, ya que buscó que el estado tuviera un gobernador débil, por lo menos en sus facultades estrictamente constitucionales y en su relación con el congreso, pero también dividió el legislativo en una cámara de diputados y una cámara de senadores, lo que le entorpecía tener una posición firme y unificada. Según los artículos 24, 34, 80, 81, 134 y 137 el congreso tenía las facultades para nombrar al gobernador y vicegobernador, determinar sobre las excusas para no desempeñar los cargos públicos, ampliar las facultades gubernamentales, participar en el nombramiento del presidente y vicepresidente de la república, autorizar al gobernador a viajar a más de 10 leguas (48 km) de la ciudad de Duran-

¹⁵ GM, Sistema de Información Legislativa. *Bicamarismo o bicamaralismo*, 2024, México.



go, autorizar al gobernador a mandar a la milicia civil, decretar el plan de educación pública, aclarar cualquier duda sobre la constitución y declarar si había lugar o no a la formación de causa contra los diputados, senadores, gobernador, vicegobernador y secretarios de despacho.¹⁶

Además de las atribuciones ya mencionadas ambas cámaras podían formar los códigos de la legislación particular del estado, expedir, interpretar y derogar las leyes y decretos, fijar anualmente a los gastos públicos y determinar las contribuciones (Art. 24). En cualquiera de las dos cámaras podían tener origen las leyes, exceptuando las de impuestos y contribuciones, que debían nacer en la Cámara de Diputados (Art. 50). Se tenía por iniciativas de ley o decreto: primero, las propuestas de los diputados y senadores; segundo, las que dirigían a una de las cámaras las legislaturas de los demás estados y tercero, las del gobierno del estado (Art. 51).¹⁷

Lo que se observa no es el equilibrio de poderes tan relacionado con la ilustración francesa, ya que claramente el ejecutivo se encontraba por debajo del legislativo —se necesita otra interpretación— más bien se trataba del control de uno sobre el otro, algo que intentaba repetirse dentro del mismo congreso. La Cámara de Diputados, se renovaba cada dos años (Art. 28) y sus miembros eran designados según la convocatoria correspondiente (Art. 25). Para ser elegido diputado se requería ser ciudadano en el ejercicio de los derechos, tener 25 años cumplidos al momento de la elección y haber nacido en el estado de Durango o en cualquier otro lugar de la América independiente de España, contando con dos años de vecindad (Art. 26). No podían ser diputados el gobernador, vicegobernador, los oficiales de las secretarías, el obispo, el provisor, el vicario general y los diputados y senadores al congreso general (Art. 27). Mientras que la Cámara de Senadores estaba formada por siete individuos, nombrados según la convocatoria correspondiente (Art. 29). Los tres últimos senadores cesaban al fin del segundo año, y en lo sucesivo cada dos años los cuatro o tres más antiguos (Art. 30). Los senadores debían tener las mismas cualidades que los diputados, y además treinta años de edad (Art. 31). En cuanto a la reelección los diputados podían ser reelectos pasados dos años de su anterior encargo, siendo ese tiempo de cuatro años para los senadores (Art. 40).¹⁸

¹⁶ *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango*, pp. 4-19.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 4-8.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 6-7.

Recapitulando: se podía tener diputados que no fueran de Durango, ni siquiera del país, y se aceptaban como iniciativas de ley lo que propusiera otra legislatura estatal. Dichos elementos, inaceptables según cánones actuales de soberanía nacional, son destacables porque nos hablan de la visión de quiénes redactaron la constitución. Considero que el objetivo central era evitar la tiranía a toda costa, que era como los yorkinos entendían el periodo virreinal que acababa de concluir, y por lo tanto a sí mismos como libertadores; a diferencia de los escoceses que veían la separación de España como parte de una “mayoría de edad” a la que se llega naturalmente. Si el gobernador era controlado por el congreso, éste al ser bicameral también se debilitaba, la cámara de diputados era la única con facultades exclusivas, pero eso se compensaba al ser sus integrantes los que duraban menos en el ejercicio de sus funciones, además de que al haber la posibilidad de diputados foráneos no era tan fácil la consolidación de grupos de poder que rotaran en los cargos públicos. Mientras que la relación con los legislativos de otros estados a través de las iniciativas le ley los ponía en contacto con otros actores sociales fuera del ámbito local.

Se trataba de un peculiar y delicado juego de equilibrios y controles, en donde el congreso estaba sobre el gobernador (lo que evitaba la tiranía de un solo hombre), pero a la vez el mismo funcionamiento del legislativo evitaba que una cámara se impusiera sobre otra, o que en su conjunto pudieran generar sectores de poder que tomaran su control definitivo (lo que evitaba la tiranía de un grupo). Al mismo tiempo su papel en la designación del presidente y vicepresidente, la relación con las otras legislaturas estatales y su control de la milicia civil se volvían obstáculos a posibles intentos de tiranía que llegaran desde el gobierno nacional para imponerse en los ámbitos locales.

La idea de dividir el congreso en dos cámaras con un funcionamiento tan intrincado, que llegó a ser inoperante, puede entenderse y justificarse a partir de una situación de emergencia perene. El discurso político que señalaba que el país se había liberado de una tiranía y que estaba en peligro permanente de caer en otra, buscaba justificar y consolidar al grupo en el poder en ese momento (yorkinos), lo que volvía necesaria esa estructura parlamentaria. Pero a la vez, dicho discurso ayudaba a generar y justificar la permanente actitud violenta de los centralistas, al sentirse excluidos de la dinámica política al ser catalogados como un peligro para el nuevo Estado, generando de esa forma intentos armados de tomar el poder, como se mostró en el primer apartado, lo que justificaba la visión de los



federalistas. Generando de esta forma un círculo interpretativo en donde los federalistas acusaban a los centralistas de posibles tiranos, ellos a su vez no desarrollaban un sentimiento de lealtad con el nuevo Estado y acusaban a los yorkinos de ser ellos los tiranos, lo que legitimaba sus intentos de obtener el poder por la fuerza, lo que terminaba dando la razón a los federalistas. Por lo tanto, a pesar de tener un funcionamiento deficiente, el congreso bicameral se volvía necesario al ser una materialización de dicha contradicción discursiva y política, al ser una manera de evitar la llegada de la tiranía que la misma lógica política había colocado como un peligro permanente y como una forma de legitimación de las facciones.

LA POSICIÓN DE DURANGO QUE AYUDA A ENTENDER LA CONTRADICCIÓN

¿Por qué ese discurso del peligro de la tiranía interna tuvo éxito en Durango? Parte de la explicación tiene que ver con la situación política. La irrupción de los federalistas una vez establecida la república a nivel nacional obedeció a una realidad local inmediata, debido a que, durante la época del virreinato, amplios sectores de la población habían quedado excluidos de la dinámica política, los que se sumaron a la nueva corriente federal al ser la única que les garantizaba una mayor visibilidad social, lo que también explica el rechazo a los centralistas. Esto también permite comprender mejor la virulenta resistencia de los sectores más privilegiados de la sociedad duranguense que se habían organizado en la logia escocesa, ya que no se trataba de una mera disputa política, sino que lo que estaba en juego era una forma de comprender el orden social, en donde la división que hasta ese momento se había “naturalizado” entre diversos grupos sociales, ahora estaba siendo cuestionada.

Basta con mencionar que los centralistas duranguenses calificaron a sus contrincantes políticos como los “sancoulotistas”, en referencia a los radicales de la revolución francesa, para comprender la visión que tenían sobre el proceso de transformación que se estaba viviendo.¹⁹ Si bien las medidas de los federalistas estaban dirigidas a abrir el escenario de la participación política, así como evitar que el poder económico monopolizara el político, se les asumió, por parte de los sectores reaccionarios, como

¹⁹ César Navarro Gallegos y Pavel Leonardo Navarro Valdez, *Los Congresos Federalistas de Durango 1824-1835*, p. 29.

desestabilizadoras, propicios a generar la anarquía en el estado, igual a como había sucedido en la Francia de Robespierre. No se trataba por lo tanto de la mera lucha por el poder, sino por la forma de comprender la realidad y el lugar que cada grupo ocupaba en ella.

Junto con las causas de las luchas de facciones por la realidad inmediata que ya se señalaron, es importante indicar otro fenómeno que generalmente no se menciona en este tipo de textos: el geográfico. Parece que la geografía queda reducida a señalar dónde está un lugar, cuando en realidad, especialmente la geografía política, puede darnos pistas para explicar los fenómenos sociales. La consolidación del discurso federalista respecto al peligro permanente de la tiranía y por lo tanto de la necesidad de un congreso bicameral, puede abordarse desde la peculiaridad de México y Durango, respecto a términos geográficos y políticos.

A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, el que obtuvo un reconocimiento rápido de su independencia por parte de su antigua metrópoli, en nuestro caso la monarquía española y la Iglesia Católica se resistieron por décadas a aceptar que el antiguo orden virreinal se había roto.²⁰ Esto quedó claro con el proyecto dirigido por el brigadier Isidro Barradas para reconquistar México en 1829,²¹ así como con la participación de los ibéricos, junto con Gran Bretaña y Francia en la ocupación de Veracruz durante el gobierno juarista.²² Peligro que de hecho era continental, como lo demuestran la campaña del comandante José de Arizábalo para reconquistar Venezuela en 1826 y que sólo pudo ser definitivamente derrotada en 1829,²³ así como el caso de la reconquista española de República Dominicana de 1861 a 1865.²⁴

Por lo tanto, en los años 1825-1826 la amenaza de una reconquista por parte de España era creíble. No sólo la nación ibérica no había reconocido nuestra independencia, sino que la isla de Cuba seguía siendo una posesión de ultramar de ese decadente imperio, lo seguiría siendo durante la mayor parte del siglo XIX, constituyendo una permanente amenaza, una

²⁰ Josefina Zoraida Vázquez, “Los primeros tropiezos”, p. 543.

²¹ Jesús Ruiz de Gordejuela Uriquijo, *Barradas: el último conquistador español. La invasión a México de 1829*, pp. 9-16.

²² Lilia Díaz, “El liberalismo militante”, pp. 608-612.

²³ MCE, *Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas*, 2010, Madrid.

²⁴ Mario J. Gallego Cosme, “contexto histórico e internacional de las relaciones diplomáticas de la República Dominicana con España durante la segunda mitad del siglo XIX”, *Revista Electrónica Iberoamericana*, p. 3.



base de avanzada en el Atlántico desde donde podía partir en cualquier momento una campaña militar sobre la costa del Golfo de México.

Eso ayuda a explicar, por ejemplo, por qué la constitución veracruzana, si bien también tenía un congreso bicameral, no le otorgó a éste tantas y tan importantes facultades como la de Durango, en aquel estado la milicia civil estaba en control del gobernador. Y es que en Veracruz se impuso la idea de un ejecutivo fuerte porque la realidad internacional así lo demandaba. En caso de una invasión la toma de decisiones debía ser rápida, estar concentrada en una sola persona hubiera dado mayores posibilidades de éxito ante tal situación.²⁵ Algo parecido se puede mencionar de Oaxaca, después de todo el fin del imperio de Iturbide también marcó la separación de la antigua Capitanía de Guatemala del territorio nacional, derivando en un conflicto con la nueva República del Centro de América por partes del estado de Chiapas que podía derivar en un conflicto bélico que involucrara directamente a Oaxaca.²⁶

Mientras que, en Durango, por estar tan alejado física y simbólicamente de aquel peligro exterior, el imaginario político estuvo dominado por la idea del peligro interior, por un lado, la lucha permanente contra los “indios bárbaros” que marcaba una división entre la “civilización” y la “barbarie” y daba una normalidad a la visión del peligro interno,²⁷ y por otro, dentro de la llamada “civilización” la lucha de los federalistas y los centralistas. El gran temor era el surgimiento de la tiranía local que los federalistas consideraban que sólo podía venir de los escoceses, lo cual hace cuestionar el carácter conciliador que se les ha atribuido a los de la logia yorkina, ya que si bien nunca rompieron el orden constitucional, como sí lo hicieron los escoceses, además de que mostraron señales de concordia como la declaración de amnistías; también es cierto que al identificar a los centralistas con la amenaza de una tiranía colocaban una frontera simbólica que dificultaba su incorporación a un orden jurídico y político más estable del que se tuvo. De esta forma el lugar geográfico que ocupa Durango, se volvió un catalizador para que determinadas interpretaciones políticas fueran más afortunadas que otras, al momento de convertirse en herramienta legitimadora de los grupos enfrentados.

²⁵ Carmen Blázquez Domínguez, Yovana Celaya Nández y José Manuel Velasco Toro, *Historia breve de Veracruz*, pp. 158-167.

²⁶ Mario Vázquez Olivera, *El imperio mexicano y el Reino de Guatemala*, pp. 283-296.

²⁷ Antonio Arreola Valenzuela, “Apaches y comanches en Durango”, *Transición*, pp. 35-36.

La Constitución de Durango de 1825 es de fuertes matices parlamentarios, lo que se manifiesta en las facultades otorgadas al Poder Legislativo, como la elección del gobernador y vicegobernador, exigir responsabilidad a los infractores de la Carta Magna o aclarar cualquier duda sobre la misma. Facultades que colocan al Poder Legislativo con preponderancia sobre el Ejecutivo y el Judicial. Pero no se puede entender dicha situación como una deficiente apropiación de ideas y sistemas políticos europeos o estadounidenses, sino como el resultado de una mutua configuración entre las relaciones de poder locales (materiales y simbólicas) y la situación en que se encontraba el país y el estado en cuanto a la geografía política.

Un congreso dividido en dos cámaras pareció un buen mecanismo para garantizar el equilibrio. Mientras el Legislativo controlaba al Ejecutivo, dentro del primero una cámara podía mantener a raya a la otra, estableciendo un control en su interior que evitaría los intentos autoritarios. Pero su funcionamiento hay que observarlo en el contexto de la lucha entre federalistas y centralistas en un estado alejado de la amenaza extranjera y acostumbrada a ver al enemigo como un factor interno. Los yorkinos justificaron discursivamente su llegada al poder al mostrarse como los partidarios del cambio social y como los que podían evitar el regreso de la tiranía, la que desde su visión sólo podía venir del interior de la sociedad, estableciendo una división con los escoceses, los que no dudaron en recurrir a los levantamientos armados para llegar al poder al considerar a los yorkinos como los verdaderos tiranos, lo que al final terminaba por consolidar esa visión federalista en la que los centralistas representaban el mayor peligro. En ese escenario de inestabilidad el congreso bicameral demostró sus deficiencias, al evitar una administración eficaz, así como una reacción rápida frente a las situaciones de emergencia. Siendo por lo tanto necesario seguir profundizando en los elementos de la normatividad constitucional de las entidades federativas, pero yendo más allá de una mera enumeración de artículos o leyes, intentando explicar desde diferentes perspectivas por qué dicha disposición se dio en un lugar y momento determinado.



- Acta Constitutiva de la Nación Mexicana* [edición facsimilar, Gobierno del Estado de Durango, 1990].
- ARREOLA VALENZUELA, Antonio, "Apaches y comanches en Durango", *Transición*, Durango, núm. 23, Septiembre de 1999, pp. 33-46.
- ARRIETA SILVA, Enrique, "La constitución de Durango de 1825: matices y peculiaridades", en Francisco José de Andrea Sánchez (coord.), *Derechos Constitucional Estatal. Estudios históricos, legislativos y teórico-prácticos de los estados de la República mexicana*, UNAM, pp. 121-138.
- BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, Carmen, Yovana Celaya Nández y José Manuel Velasco Toro, *Historia breve de Veracruz*, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2012.
- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos* [edición facsimilar, Gobierno del Estado de Durango, 1999].
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango* [edición facsimilar, Gobierno del Estado de Durango, 2002].
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oajaca* [edición facsimilar, Gobierno del Estado de Oaxaca, 1997].
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz* [edición facsimilar, Gobierno del Estado de Oaxaca, 1993].
- Decreto sobre Convocatoria a Cortes* [edición facsimilar, Gobierno del Estado de Durango, 1987].
- Decreto XXIX. *Del indulto con motivo de la publicación de la constitución* [edición facsimilar, Gobierno del Estado de Durango, 1987].
- DÍAZ, Lilia, "El liberalismo militante", en Centro de Estudios Históricos (coord.), *Historia General de México Versión 2000*, México, El Colegio de México, pp. 583-632.
- GALLEGOS COSME, Mario, "contexto histórico e internacional de las relaciones diplomáticas de la República Dominicana con España durante la segunda mitad del siglo XIX", *Revista Electrónica Iberoamericana*, Madrid, vol. 8, núm. 02, julio de 2014, pp. 1-18.
- GALLEGOS, José Ignacio, *Historia de Durango 1563-1910*, México, Impresiones Gráficas México, 1984.

- GORDEJUELA URIQUIJO, Jesús Ruiz de, *Barradas: el último conquistador español. La invasión a México de 1829*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2019.
- HERNÁNDEZ CAMARGO, Emiliano, *Nuestras Constituciones*, Durango, Gobierno del Estado de Durango, 1995.
- NAVARRO GALLEGOS, César y Pavel Leonardo Navarro Valdez, *Los Congresos Federalistas de Durango 1824-1835*, México, Congreso del Estado de Durango/ Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2004.
- NAVARRO GALLEGOS, César, “La transición política del régimen provincial al federalismo en Durango 1820-1835”, en María Guadalupe Rodríguez López (coord.), *Historia de Durango Tomo III: Siglo XIX*, UJED, pp. 16-51.
- OCHOA REYNA, Arnulfo, *Historia del Estado de Durango*, México, Editorial del magisterio, 1958.
- PACHECO ROJAS, José de la Cruz, *Breve historia de Durango*, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2001.
- , *Historia breve de Durango*, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2011.
- VÁZQUEZ OLIVERA, Mario, *El imperio mexicano y el Reino de Guatemala*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.
- VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, en Centro de Estudios Históricos (coord.), *Historia General de México Versión 2000*, México, El Colegio de México, pp. 525-582.

Electrónicas

- GM. Gobierno de México, *Sistema de Información Legislativa. Bicameralismo o bicameralismo*, 2024, México, disponible en: <<http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=21>>.
- MCE. Ministerio de Cultura de España, *Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas*, 2010, Madrid, disponible en: <<https://www.cultura.gob.es/cultura/archivos/difusion/mc-difusion/bicentenarios/contexto-historico/las-independencias-iberoamericanas/cuarta-fase-1820-1830/resistencias-intentos-reconquista.html#:~:text=Las%20%C3%BAnicas%20tentativas%20que%20se,Barradas%20que%20embarca%20en%20Cuba>>.



El Poder Judicial de Durango durante la Primera República Federal, 1824-1835

Tania Celiset Raigosa Gómez

Universidad Juárez del Estado de Durango/
Instituto de Investigaciones Históricas



INTRODUCCIÓN

La construcción de la nación mexicana y el derrumbe del antiguo régimen, fue un proceso histórico que llevo tiempo, y que implicó inestabilidad institucional a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. La consolidación de lo que fue un nuevo sistema tuvo que vivir dificultades a lo largo de todo el siglo, pues las leyes españolas y algunos elementos propios del régimen anterior, tales como el arbitrio judicial, los alcaldes-jueces, continuaron vigentes durante mucho tiempo, aun y con las constituciones, además de los complejos problemas políticos existentes. Es decir, si bien la Constitución fue la nueva cabeza, eje principal o columna vertebral, que modificó el sistema para organizar y dar buen gobierno; hacían falta las leyes secundarias tales como los códigos penales o civiles, y a nivel local, jueces letrados o personas formadas en el derecho, que permitieran el buen funcionamiento de la nueva organización. Pues si bien existieron las reglamentaciones para las constituciones y sus distintos poderes, que permitieron vivir una vida política y jurídica organizada, se necesitaba consolidar los nuevos aspectos.

Por ejemplo, en Durango, y algunos otros estados, el Poder Judicial seguía dependiendo de los ayuntamientos con los alcaldes constitucionales, como jueces de primera instancia, antiguamente alcaldes ordinarios. Sin embargo, como lo mencionamos arriba, era un proceso, mismo que se fue consolidando y que fue dando fuerza a las propias instituciones.

Ese proceso, con la Constitución de Cádiz, marcó un antes y un después, con la división de poderes, pues la soberanía ya no recaía solamente en el rey. Sin embargo, si bien es cierto que se fueron delineando y consolidando los diferentes poderes del Estado, estos vivieron contantes cambios debido a las modificaciones de la época, por lo menos así lo deja ver el poder judicial. Pero mantuvieron la esencia del liberalismo. Es así como fue evolucionando el sistema, comenzando por Cádiz y continuando con Apatzingán 1814, el Reglamento del Imperio Mexicano de 1822, el Acta Constitutiva de 1824, la Constitución de 1824, las Siete Leyes 1836 y

la Constitución de 1857, entre otros documentos más que ayudaron a la formación y consolidación de la nación mexicana.

De tal manera fueron tomando vigencia el concepto de igualdad ante la ley, la libertad, y la eliminación de los fueros, etc. Y con ello el reclamo de estos derechos y la importancia de integrarlos a la Constitución. Mismos que aparecieron en algunos artículos de las legislaciones de los estados. Pues si bien la carta magna de 1824, no estableció un capítulo exclusivo a los derechos del “hombre y del ciudadano”, si aparecieron algunos de estos derechos fundamentales en diversos artículos de la Constitución.¹ Además el Acta Constitutiva de 1824 (Art. 30), estableció que los derechos de los ciudadanos serían protegidos por la leyes sabias y justas,² con lo cual se trazaba el camino hacia la protección de estos derechos. Sin embargo, antes de ello la Constitución de Cádiz ya habían garantizado algunos de ellos, mismos que mencionaremos más adelante.³

En el caso de la Constitución de Durango si se establecieron dos capítulos referentes a los derechos del hombre y del ciudadano, uno denominado *De los Duranguenses y sus Derechos en general* y otro denominado *Del Derecho del ciudadano, y causas por que se pierde o suspende*,⁴ con lo cual se dio un paso muy importante referente a los derechos en general, al establecer por primera vez la igualdad ante la ley (Art. 12).⁵ Sin embargo, al no existir una codificación y la eliminación del fuero militar y eclesiástico, a nivel superior, esta igualdad quedaba, en cierto sentido, solamente en buenas intenciones. Pues si bien se abonó con ello y con la eliminación de la mayoría de los tribunales especiales, al camino que conducía a la igualdad ante la ley, todavía faltaba mucho por hacer.

Igualdad que, según los legisladores decimonónicos, solamente se lograría al terminar completamente con el arbitrio de los jueces, los tribunales especiales y el pluralismo jurídico.⁶ Pues según Elisa Speckman, con

¹ Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, *Durango, Historia de las Instituciones Jurídicas*, p. 29; Elisa Speckman, “La justicia penal en la época de Juárez”, p. 143.

² Dublán y Lozano, “Acta Constitutiva de la Federación”, p. 696.

³ Elisa Speckman, *Del tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos XIX y XX)*, p. 9.

⁴ César Navarro y Pavel Navarro (eds.), “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, pp. 132-133.

⁵ Velia Barragán, *La constitución política del estado de Durango, notas históricas*, pp. 10 y 12.

⁶ Elisa Speckman, “La justicia penal en la época de Juárez”, p. 147.

la Constitución de 1824, se logró la igualdad por nacimiento, más no la igualdad ante la ley.⁷

Sin embargo, según palabras de Catherine Andrews, la definición de “igualdad ante la ley” en el contexto de la primera república era o significaba la desaparición de leyes y tribunales particulares para los indígenas, por lo cual, para esta autora tanto el Acta Constitutiva como la Constitución de 1824, abonaban a esta definición, aunque subsistieran los tribunales eclesiásticos y militares.⁸

En este sentido la Constitución de Durango aportó al desconocimiento de los títulos de nobleza, la prohibición y abolición de la esclavitud, y una serie de derechos, entre los que destacan los mencionados en el artículo 15 que estipulaba: “El mismo estado garantiza a sus habitantes el tranquilo goce de sus naturales e imprescindibles derechos, los que ya tienen consignados en el código fundamental de la nación; los de libertad, seguridad y prosperidad, y los demás inalienables que por naturaleza les competan, aunque aquí no se especifiquen ni enumeren”.⁹

Y así como se establecieron los anteriores derechos, también existieron los relacionados a la justicia criminal, mencionados en el apartado relacionado al Poder Judicial y los cuales mencionaremos más adelante. Pero eso no fue todo, la soberanía, la división de poderes, el federalismo, entre otras cosas, fueron el eje y los principales cambios que transformarían y construirían la nueva nación mexicana.

De tal forma, con la emancipación de la nación, la justicia vivió modificaciones, las Reales Audiencias se eliminaron y surgió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a nivel estatal, los Supremos Tribunales de Jus-

⁷ Hay que señalar que no es la misma la “igualdad ante la ley” o “igualdad jurídica”, que la “igualdad por nacimiento” o “igualdad social”, pues la primera quedó completamente establecida en la Constitución de 1857, en *ibid*, pp. 145-147; y la segunda se estableció por vez primera en Constitución de Apatzingán, Arts. 24 y 25 en Elisa Speckman, *Del tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos XIX y XX)*, p. 8. Por tanto, esta autora nos habla de que en la primera república teníamos una igualdad por nacimiento mas no una igualdad ante la ley, sin embargo, Catherine Andrews, sí habla de una igualdad ante la ley según un contexto político de la época en Andrews Catherine, “Pautas “para el acierto a los gobiernos. Los derechos en el primer constitucionalismo mexicano (1821-1836)”, pp. 59-60.

⁸ Andrews Catherine, “Pautas “para el acierto a los gobiernos. Los derechos en el primer constitucionalismo mexicano (1821-1836)”, pp. 59-60.

⁹ Barragán, *op. cit.*, p. 10 y 15, “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, *op. cit.*, p. 132



ticia. A nivel federal el Poder Judicial quedó establecido en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824. Y en el estado de Durango, fue establecido formalmente en la Constitución Política del estado, promulgada en 1ro de septiembre de 1825. Todo esto relacionado con el quiebre que se dio en el pensamiento jurídico occidental, que trasfirió la potestad de administrar justicia del rey a un poder judicial autónomo.¹⁰ Aunque dependiente todavía de los ayuntamientos y sus alcaldes, por lo que era una “autonomía” relativa. Sin embargo, se había dado un cambio importante en la conformación de la estructura de esta institución.

Algunas de estas modificaciones, constantes y rompimientos, son las que analizaremos en el presente artículo, todo ello para el territorio de Durango. Las fuentes estudiadas para ello son: la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la Constitución de Durango de 1825, algunos reglamentos y leyes relacionadas al Poder Judicial, tanto a nivel estatal como federal, bibliografía, y dos informes de gobierno del primer federalismo en Durango, uno de 1827 y uno de 1830. Lamentablemente no se puede relacionar esta información con expedientes del Tribunal, pues no existen documentos tales de la época. O por lo menos hasta el momento los desconozco.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CÁDIZ 1812 A LA CONSTITUCIÓN DE DURANGO DE 1825. UN BREVE ACERCAMIENTO

Se habla de varias coincidencias entre la Constitución Gaditana y la Constitución Mexicana de 1824. Sin embargo, “en lo que no podían coincidir, era en la adopción de la forma federal del Estado, pues la gaditana estableció un régimen centralizado y la mexicana reconocía a sus partes integrantes como estados independientes, libres y soberanos en su gobierno y administración interiores”.¹¹

La primera en mención señalaba la creación de tribunales y la existencia de alcaldes, con funciones de justicia.¹² Sin embargo, estos últimos

¹⁰ Elizabeth Martínez, “Administración de justicia y derechos constitucionales en el Michoacán decimonónico”, pp. 23-24.

¹¹ David Pantoja, *El supremo poder conservado. El diseño institucional de las primeras constituciones mexicanas*, p. 19.

¹² Dublán y Lozano, “Constitución Política de la Monarquía Española”, pp. 369-371.

desaparecieron en la Constitución Federal de 1824 pero continuaron vigentes en algunas constituciones locales, tal como la de Durango de 1825. Respecto a la creación de tribunales, la Constitución Mexicana estipuló que se establecieran en los estados sus propios tribunales, y eso consintió la pervivencia de los llamados alcaldes constitucionales que fungían como alcaldes de primera instancia y como miembros del Poder Judicial. Ello de acuerdo al artículo 160 que estipuló que:

El poder judicial de cada Estado, se ejercerá por los tribunales que establece o designe la constitución; y todas las causas civiles o criminales que pertenecen al conocimiento de estos tribunales, serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia.¹³

Esto permitió la continuidad de algunas figuras jurídicas del antiguo régimen y la existencia de un Poder Judicial sin autonomía de los ayuntamientos, puesto que, si bien no se mencionan en la constitución federal de manera explícita, deja espacio abierto para que los tribunales estén integrados por las autoridades designadas por ellos, en cada uno de los estados. Pero esto lo iremos explicando en el trascurso del artículo, poniendo énfasis en el cambio o situación que se generó a nivel local en Durango.

Es importante subrayar esto, pues en la Constitución Federal desapareció lo relativo a los ayuntamientos, mientras que en la Constitución estatal de Durango continuaron vigentes, en sus artículos 128 a 133. Sin embargo, en ésta no se menciona nada respecto a sus funciones judiciales, es en el Reglamento para la Administración de justicia, en donde encontramos la referencia a éstos.

Además de esta importante continuidad y herencia de Cádiz y del antiguo régimen, tenemos la relacionada a los *derechos hombre*, respecto a los cuales los legisladores gaditanos dieron avances importantes. Misma que se reflejaron después en la Constitución Mexicana de 1824 y en la de Durango. Gran parte de ellos iban relacionados a la defensa de los inculcados y procesados. Estos se observan en varios artículos de la Constitución de Cádiz, que se contemplan en el capítulo III del título V, en los arts. que van del 286 al 308.¹⁴ Las principales disposiciones relativas a esto

¹³ *Ibid.*, “Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, p. 735.

¹⁴ “Constitución Política de la Monarquía Española”, en *op. cit.*, pp. 372-373.



mencionan que: las aprehensiones si no eran en fraganti, debían estar asentadas en averiguaciones y ser ordenadas por un juez en forma escrita; los procesados solamente podían ser aprehendidos por actos que ameritaban pena corporal; debían ser presentados ante un juez para su declaración durante las primeras 24 horas después de su arresto; tenían el derecho de conocer quien los acusó, el motivo, las pruebas en su contra y las declaraciones de los testigos; no podían declarar bajo juramento sobre hechos propios, ni aplicar tormento; y se determinó que el proceso debía ser público;¹⁵ entre otras cosas más.

Se puede observar que esto fue llevado a la práctica en los expedientes judiciales. Tales como los del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en donde se argumenta a favor de la aplicación de la Constitución de Cádiz y sus garantías o derechos para los acusados. Tal como el caso o procedimiento criminal en el cual se cita la Constitución Gaditana para garantizar el debido proceso. Pues tres meses después de ser jurada ésta en Michoacán, el abogado Miguel Palacios, defensor de Juana María Benítez, presentó al juez de primera instancia un alegato en el que mencionaba que su defendida no merecía pena corporal, por lo cual solicitaba la dejaran en libertad bajo fianza, puesto que “conforme a lo prevenido en la Constitución Política de la Monarquía, sobre que en cualquier estado de la causa se ponga en libertad al reo, cuyo delito no sea grave y digno de pena corporal”.¹⁶ Esto deja en evidencia que la constitución era citada y puesta en práctica, es decir no quedó en letra muerta. Pues la misma autora cita otro caso en el que el defensor usó el mismo argumento. Por lo que ambos defensores lograron que, de acuerdo con la Constitución de 1812, capítulo v referente a la administración de justicia en lo criminal, los inculpados salieran libres bajo fianza.¹⁷

Estos derechos de Cádiz se basaban en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, según afirmación de Cruz Parceró, y en cierto sentido, años después fueron reproducidas en la Constitución Federal de 1824,¹⁸ que en su sección séptima, dentro de los artículos 145 a 156, estableció varios de estos derechos procesales. Entre los cuales podemos men-

¹⁵ Elisa Speckman, *Del tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos XIX y XX)*, p. 9.

¹⁶ Elizabeth Martínez Chávez, “Derechos procesales en materia criminal. De Cádiz a la primera República federal”, pp. 40-41.

¹⁷ *Ibid.*, p. 41.

¹⁸ *Ibid.*, p. 38.

cionar: la prohibición del tormento, del juramento sobre hechos propios al declarar en materias criminales, del juicio por comisión y de toda ley retroactiva, y de librar órdenes para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República, pues solamente se podría hacer esto en casos específicos y previstos por la ley; y de la misma forma se especificó que nadie podía ser detenido sin que hubiera pruebas o indicios de que el inculpado era el delincuente pues ninguno que fuera detenido solamente por indicios podía estarlo por más de 60 horas.¹⁹

Y tal como mencionamos, Durango no sería la excepción, pues en su Constitución, Capítulo III denominado *De la administración de justicia en lo criminal*, se establecieron varios de estos derechos. Dentro de los artículos que van del 100 al 116. Los más importantes que podemos mencionar y que se relacionan tanto con la Constitución de Cádiz como con la Carta Magna de 1824, son los siguientes: “el proceso debía ser público”, después de la confesión, sin embargo, existían ciertas restricciones para causas que demandaban secreto, esto en acuerdo al artículo 112, que al igual que la constitución gaditana lo establecía en su artículo 302, y respecto a lo cual la constitución federal de 1824 mantuvo silencio. Respecto a la “declaración”, se estipuló en el artículo 105 que se tomaría en las primeras 48 horas, sin juramento en causas propias, esto a diferencia de la de Cádiz que establecía que debía ser durante las primeras 24 horas, al igual sin juramento. En relación al “tiempo para tomar la declaración”, la federal no estipuló cosa alguna, pero si estableció que no debía tomarse juramento sobre hechos propios al declarar en materia criminal (Art. 153), en lo cual coincidían las tres. Otros aspectos importantes en los que coincidieron la de Cádiz, la de México y la de Durango, fueron los asuntos relacionados con la prohibición de librar orden para el registro de las casas, a no ser por los casos que preveía la ley; la prohibición para detener sin la existencia de semipruebas o indicios, aspecto que la constitución local amplió al mencionar que solamente podían ser detenidos los que merecían pena corporal, en lo cual coincidió con la gaditana. Y aunque la federal no señalo esto último si fue más allá al señalar que nadie podía ser detenido por más de 60 horas por solamente indicios.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, pp. 10 y 300.

²⁰ “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, en *op. cit.*, pp. 146-147; “Constitución Política de la Monarquía Española”, en *op. cit.*, pp. 372-373; “Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, en *op. cit.*, pp. 734-735.



Empero no debemos olvidar otros aspectos que tal vez la Constitución Federal de 1824 no mencionó, pero si lo hizo la de Cádiz y la de Durango, tales aspectos son: el acusado debía conocer quien lo estaba acusando, en caso de que lo hubiera, y la causa, esto dentro de las primeras 48 horas según la Constitución de Durango, y dentro de las primeras 24 horas según la gaditana. Lo que iba relacionado con la intención de hacer un proceso público y más claro. Y un aspecto en el que coincidieron la gaditana y la mexicana, pero no la de Durango, fue la eliminación de los juicios por comisión.²¹

En general, después de conocer algunas de las coincidencias relativas a la administración de justicia, entre la Constitución española de 1812, la mexicana de 1824, y la de Durango de 1825, podemos hacer un análisis de lo que fue el Poder Judicial en la Constitución de Durango, en sus reglamentos y en la vida diaria de la localidad.

EL PODER JUDICIAL EN DURANGO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1825

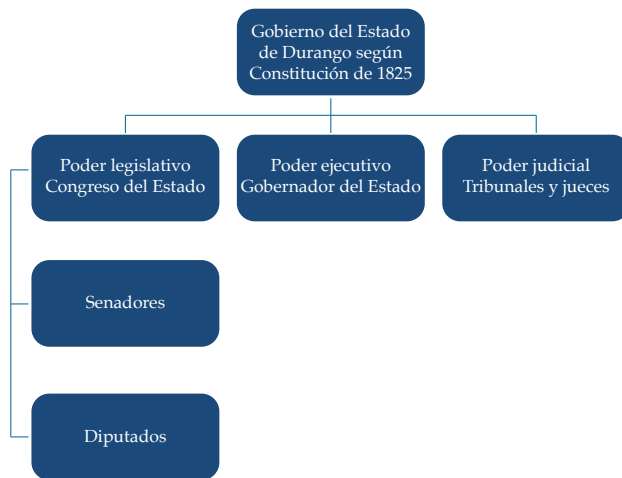
Como ya se mencionó, con la Constitución de 1824 se modificó la forma de gobierno y con ello la forma de administrar la justicia. Y esto fue un cambio revolucionario, pues aún y con las continuidades que pudieron existir, se hicieron modificaciones en muchos sentidos, pues como bien dice Emilio O. Rabasa, la Constitución de 1824 fue una verdadera obra revolucionaria dentro del campo político, porque estableció una nueva forma de gobernar.²² Pues, aunque en sus postulados continuaba la vigencia de un orden católico como religión de estado, dio un cambio radical de una monarquía a una república federal. Con el otorgamiento de la soberanía a la nación, la división de poderes, el principio de representación y la concesión de derechos en favor del ciudadano, se revolucionó todo lo que anteriormente había regido. Pero todo esto fue un proceso lento que implicó tiempo y experimentos políticos. Ejemplo de ello fue lo que sucedió con el Poder Judicial; que, al romper con una tradición de siglos, mantuvo ciertas supervivencias o herencias del antiguo régimen, tales como los alcaldes-jueces que después se transformaron a jueces de letras. Sin embargo, todo ello implicó un gran esfuerzo por todos aquellos que pugnaban para poder llevar a cabo las transformaciones necesarias.

²¹ *Idem.*

²² Emilio Rabasa, *El pensamiento político del constituyente de 1824*, pp. 82-83.

Una de las principales modificaciones al decretarse la Constitución Política de 1824, fue la forma de gobierno en una República Representativa, Popular y Federal, reconociendo tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.²³ Visión de organización que se implementó a un nivel estatal, al prever dentro de las constituciones de los estados una organización similar. Tal como es el caso de la Constitución Estatal de Durango de 1825, que estableció un régimen de gobierno Popular y Representativo, dividido para su ejercicio en tres poderes: el ejecutivo que residiría en el gobernador nombrado cada cuatro años por mayoría absoluta de los miembros del Congreso; el legislativo, depositado en un Congreso compuesto de dos Cámaras: la de senadores y diputados, en donde la primera se integraría por siete representantes;²⁴ y el Judicial, del cual la Constitución Estatal se encarga en su sección VIII, Capítulo I, y que en su artículo 88 señala: “Ejercerán el poder judicial los jueces, y los tribunales establecidos, o que se establecieren en lo sucesivo. Una ley fijará su número, y el orden de los trámites y procedimientos judiciales”.²⁵

Organización del Estado según la Constitución de Durango de 1825



Fuente: Organigrama según la Constitución de Durango de 1825.

²³ "Constitución de los Estados Unidos Mexicanos", en *op. cit.*, p. 720.

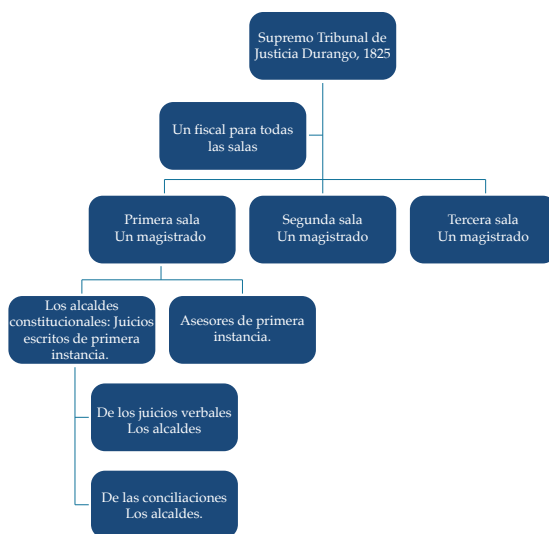
²⁴ "Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango", en *op. cit.*, pp. 135-136.

²⁵ *Ibid.*, p. 145.



Por lo anterior, fue publicado el 21 de octubre de 1825, el “Reglamento para la administración de Justicia del estado”, a través del cual se organizó el Supremo Tribunal de Justicia, integrado por tres magistrados, que respectivamente iban a presidir tres salas. El tribunal, además de atender las causas civiles y criminales, se iba a encargar de practicar los exámenes para el ejercicio de la abogacía. De acuerdo con esta reglamentación, se determinó que el primer alcalde de cada ayuntamiento o los llamados alcaldes constitucionales iban a ejercer el papel de juez de primera instancia, actuando bajo la orientación de los asesores letrados que iba a designar el gobierno.²⁶ Asimismo, se estableció en el artículo 93 del citado reglamento, la vigencia de las leyes reglamentarias de los juicios y la de tribunales de España, en lo que no se opusiera al reglamento en mención y la Constitución del estado de Durango.²⁷

Poder Judicial de Durango 1825



Fuente: Organigrama judicial según Reglamento para la administración de justicia en Durango de 1825.²⁸

²⁶ Tania Raigosa, “El poder judicial en Durango, 1910-1924”, *Revista Historia*, pp. 182-183 y “Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825”, pp. 68-80.

²⁷ “Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825”, Art. 93, p. 79.

²⁸ Tania Raigosa Gómez, “Cultura jurídica: administración de justicia en Durango. 1825-1867”, p. 64.

En razón a lo anterior se estableció un Supremo Tribunal de Justicia con tres salas y sus respectivos magistrados, que conocerían en segunda y tercera instancia y en algunos casos en primera; pues los alcaldes constitucionales, conocerían, en su generalidad, de los juicios en primera instancia, de los juicios verbales y de las conciliaciones.²⁹ Esto en acuerdo a la Constitución local que en su artículo 95 estipuló que: “Ningún negocio tendrá más de tres instancias, las leyes determinaran cual causa ejecutoria, según su naturaleza y después queda el recurso de nulidad”.³⁰ Esto iba relacionado a la herencia y tradición española que de manera tradicional tenía tres instancias y que a nivel federal también se estableció.³¹

Pero además de esto, la Constitución de 1825 también contemplo otros aspectos relacionados con el Poder Judicial, contemplados en su sección VIII denominada *Del poder judicial, tribunales, administración de justicia en general, en lo civil y en lo criminal* y subdivida en tres capítulos, los cuales eran los siguientes:

Capítulo I Del poder judicial, tribunales y de la administración de justicia en general. En esta sección está integrada por diez artículos que van desde el artículo 88 al 99.

Cap. II De la administración de justicia en lo civil. Integrado por dos artículos.

Cap. III De la administración de justicia en lo criminal. Integrado por diecisiete artículos.³²

Por ahora basta con saber de la existencia de estos artículos referentes a la administración de justicia, pues por la extensión del capítulo solamente mencionamos algunos de ellos. Los más importantes, a nuestro parecer, para el entendimiento de lo que fue el nuevo sistema judicial de la primera época federal.

²⁹ *Ibid.*, pp. 60-80.

³⁰ “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, en *op. cit.*, p. 145.

³¹ Juzgados de Distrito, p. 7; Carlos Garriga, “El federalismo judicial mexicano (1824-1835)”, pp. 158 y 203-204.

³² “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, en *op. cit.*, pp. 145-147.



Para los juicios escritos de primera instancia, como ya mencionamos, existían los alcaldes constitucionales, llamados así a partir de la Constitución de Cádiz y que anteriormente eran los llamados alcaldes ordinarios, sobrevivencia del antiguo régimen. Pues aún la justicia no hacía el cambio a jueces letrados y seguía con la misma tradición de poner en manos de estos funcionarios la justicia de primer nivel. Por lo tanto, estos estaban facultados a ejercer la jurisdicción contenciosa en todo género de asuntos, hasta sentenciar en definitiva (Art. 17); preparaban juicios en los asuntos civiles que pasaran de 200 pesos; y en lo criminal, que fueren de mayor entidad que las injurias leves y faltas livianas (Art. 18); para este tipo de juicio, los alcaldes tenían que consultar con asesores letrados (Art. 20) y, para dar paso al juicio escrito, se tenía que recurrir primero a la conciliación (Art. 19). Estos juicios podían ser apelados ante la primera sala del Tribunal Superior (Art. 67).³³

Los mencionados alcaldes eran funcionarios políticos, pues en el citado reglamento no se les exigía ser letrados y, por ello, contaban con asesores; además en el reglamento para el régimen de gobierno político interior de los pueblos del estado de Durango se estipulaba que los individuos del Ayuntamiento requerían ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, (Art. 5),³⁴ respecto a ello abundaremos más adelante, mas no demandaban que fueran formados en el derecho; por lo tanto era una justicia de legos, figura jurídica heredada del antiguo régimen, en el cual existían dos modelos de justicia, una representada por la justicia oficial, letrada de jueces y tribunales y otra de alcaldes, jurados y arbitrios.³⁵ De tal forma, tal como mencionamos, los alcaldes desempeñaron funciones contenciosas, al conciliar, llevar juicios verbales y administrar justicia en primera instancia, además de funciones de gobierno.³⁶

Es importante mencionar que, en el Reglamento para la administración de justicia, de 1825, los juicios verbales fueron descritos como juicios que son de palabra, sentenciados por los alcaldes, en las causas de injurias

³³ “Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825”, pp. 76-71 y 76.

³⁴ César Navarro y Pavel Navarro (eds.), “Reglamento para el gobierno interior de los ayuntamientos y pueblos del estado de Durango, 1825”, p. 169.

³⁵ Fernando Martínez, “La constitucionalización de la justicia 1810-1823”, p. 194.

³⁶ Tania Raigosa, “Cultura jurídica: administración de justicia en Durango. 1825-1867”, p. 63.

y faltas livianas, que sólo merecen pena correccional, y en los civiles que no pasan de 200 pesos (Art. 9). Las resoluciones eran tomadas por el alcalde y un colega (Art. 13), a diferencia de las conciliaciones donde las partes tenían la libertad de conformarse o no con las providencias, en los juicios verbales se decidía previa y sumariamente sin recurso alguno (Art. 10).³⁷

Es importante señalar que las conciliaciones eran necesarias y un requisito obligatorio para que se pudiera dar paso a un juicio por injurias. Pues primero se debía intentar conciliar antes de admitir una demanda por ello. Además, hay que mencionar que después de escuchar los alegatos de las dos partes y el dictamen de dos hombres buenos, el alcalde tenía tres días como máximo, para dictar su providencia conciliatoria.³⁸

Este tipo de justicia en manos de los alcaldes-juez, subsistió por un buen tiempo, y era uno de los problemas principales que asolaban a la justicia y esto se deja ver en el Informe de Gobierno de Santiago Baca Ortiz en 1827; en el que se menciona que la falta de asesores letrados establecidos por ley, agravaban el problema de administración de justicia, pues la ignorancia de los alcaldes constitucionales, encargados de la justicia en primera instancia, quienes no tenían entre sus facultades la obligación de saber el derecho y las contradicciones que existían por las leyes existentes creadas para una monarquía despótica; influyeron para que se avanzara con pasos muy lentos y nada firmes, en ese ramo de la administración pública. Por lo que se generaban bastantes problemas de bandolerismo y ladrones en la región. De tal forma el legislativo tuvo que expedir un decreto de policía rural, en el cual se facultaba a los jueces de primera instancia a sentenciar sin esperar la aprobación del Tribunal Supremo, tal como estaba establecido.³⁹ Pues en el mencionado Reglamento de administración de justicia se estipulaba que:

³⁷ "Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825", pp. 69-70; Tania Raigosa, "Cultura jurídica: administración de justicia en Durango. 1825-1867", p. 64.

³⁸ "Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825", pp. 68-69.

³⁹ Memoria de los ramos que son a cargo del gobierno del estado libre de Durango, leída al segundo Congreso constitucional en sesión de 5 de septiembre de 1827, por Santiago Baca Ortiz, 1827, p. 11.



Art. 31.- La sentencia en causas criminales en que se imponga pena corporal, ya se interponga apelación de ella o no, siempre se remitirá al juez de segunda instancia para su aprobación, modificación o reforma.⁴⁰

De tal forma la falta de asesores letrados provocó que los jueces inferiores quedaran abandonados a su impericia, y las causas o se sentenciaban ilegalmente o se retardaban con detrimento de las partes interesadas, esto de acuerdo con las palabras del gobernador en el mencionado informe. Por tal razón, el gobierno encargado, interpelo a los jueces para que respondieran y cumplieran sus deberes y asimismo formó expedientes de los procedimientos ilegales de algunos, para dar informe al tribunal supremo. Y para solucionar el problema de los asesores letrados, nombró tres, uno para cada uno de los siguientes partidos, Durango, Nombre de Dios y Guarisamey, y se esperaba nombrar más.⁴¹

Para finalizar lo concerniente al ramo de justicia, el gobernador Baca Ortiz, informó que para llevar a cabo las reformas planteadas por el reglamento y hacer valer la Constitución de 1825, era necesario establecer jueces letrados, dejando solo a los alcaldes el oficio de conciliadores.⁴²

Sin embargo, el cambio de los alcaldes a jueces de letras se dio teóricamente hasta tiempo después, en 2 de diciembre de 1829, con el decreto 231 denominado “Establecimiento y atribuciones de los jueces letrados en los partidos que se expresan”.⁴³ Pero este cambio solo fue en la ley, pues en la práctica podemos observar que no fue así, puesto que, en el informe del gobernador Pescador de 1831, éste informa que si bien no hay quien dude que la administración de justicia es el ramo más interesante para la conservación de una sociedad, pues de ella dependen el buen orden, los bienes y la vida de la sociedad, entre otras cosas más. Es difícil poder aplicarla o que funcione en su mejor forma debido a que los tribunales se encontraban servidos en primera instancia, por sujetos concejiles, sin conocimiento del derecho. A pesar de que tenían tres asesores con quien consultar. De tal forma los asuntos no se resolvían con brevedad, se aumentaban las costas procesales que debían satisfacer a los interesados, y a

⁴⁰ “Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825”, p. 72.

⁴¹ Memoria de los ramos que son a cargo del gobierno del estado libre de Durango, 1827, *op. cit.*, p. 12.

⁴² *Idem.*

⁴³ Pavel Navarro y César Navarro, Los congresos federalistas de Durango, p. 336.

mayor número de casos civiles y criminales resultaba un nuevo problema que paralizaba los asuntos o los complicaba, dando como resultado que después de tiempo se podía ver a un inocente que ha padecido castigo y a un criminal libre de culpa, debido a que se practican mal las diligencias.⁴⁴

Por tal objeto el gobierno proponía a la deliberación de las cámaras, que se aceptara la adopción y aplicación del Código criminal de 1822, mientras se tenía un código propio. Y además se solicitaba que se establecieran dos jueces de letras en la capital. Y pedía que los alcaldes constitucionales, cobrarán con arreglo a sus aranceles antiguos, lo que les correspondía; pues el empleo que servían era por carga concejil y no se les pasa cantidad alguna por parte del gobierno del estado para gastos de alguacil, escribiente, archivero, ni para cosa alguna, siendo que son muchos los casos criminales que despachan.⁴⁵

La elección de estos iba en acuerdo al “Reglamento para el gobierno interior de los ayuntamientos y pueblos del estado de Durango”, de fecha 25 de octubre de 1825. Principalmente este señalaba que se elegirían alcaldes para cada partido cabecera, en los que hubiera más de 5000 almas, no más de tres y no menos de uno. Y para los pueblos que no fueran cabecera de partido cuyo número fuera de 5000 almas, un alcalde. Y para los que tuvieran más de 3000 sin llegar a 5000, tendrán también uno. La elección de estos sería igual que para aquellos lugares en donde se nombraba formal ayuntamiento, es decir los compuestos por alcaldes, regidores y síndicos procuradores con 5000 almas o más.⁴⁶

La elección era realizada por los vecinos del lugar. Todos los años el primer domingo de diciembre se reunirían los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos en las casas consistoriales o el lugar que designara el jefe de partido para nombrar a pluralidad de votos los lectores que debían elegir los empleos concejiles. Se nombraría un elector por cada 500 almas. El domingo siguiente los elegidos se encargarían de elegir a los nuevos miembros del ayuntamiento. En estas juntas no podían ser electores los que no fueran ciudadanos o estuvieran suspensos de sus derechos de ciudada-

⁴⁴ Memoria que el Excmo. Sr. Gobernador del estado de Durango, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo ochenta, fracción séptima de la constitución, presentó al honorable congreso el día 2 de agosto de 1831, el gobernador Juan Antonio Pescador, 1831, pp. 5-6.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 7.

⁴⁶ “Reglamento para el gobierno interior de los ayuntamientos y pueblos del estado de Durango, 1825”, en *op. cit.*, p. 169, Arts. 2, 3 y 4.



nía.⁴⁷ Los requisitos para ser ciudadano se establecieron en el Art. 17 de la Constitución del estado de Durango, y un requisito indispensable haber nacido o estar avecindado en cualquier lugar del estado, entre otros.⁴⁸

Pero además de este requisito de ciudadanía los alcaldes deberían ser mayores de 25 años, con vecindad de dos años antes de su elección, con un claro concepto de probidad y amor al sistema.⁴⁹

MAGISTRADOS Y SALAS DEL PODER JUDICIAL

Respecto a las salas que integraba el Supremo Tribunal de Justicia, cada una estaba compuesta por un magistrado, y un fiscal para todas ellas. Estos magistrados debían de ser letrados, de buena opinión, acreditar literatura y honradez; ser ciudadano en ejercicio de sus derecho y mayor de 25 años; y ser elegidos por el Congreso.⁵⁰ Respecto a esto, la Constitución estipulaba en su artículo 90 que:

Los jueces y magistrados se dotarán competentemente por el Congreso, ya sean temporales, o perpetuos, no podrán ser depuestos sino por causa legalmente aprobada, y sentenciada, ni supuestos sino por acusación intentada legalmente.⁵¹

Respecto a sus funciones, como ya mencionamos, existían tres salas con sus respetivos magistrados cada una. La primera sala de vistas estaba integrada por un ministro, que tenía conocimiento de todas las causas civi-

⁴⁷ *Ibid.*, Arts. 13-28.

⁴⁸ “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, en *op. cit.*, p. 133. Art. 17. Son ciudadanos Duranguenses: 1ero. Los nacidos o avecindados según la ley en cualquier lugar del estado. 2do. Los que, gozando de la cualidad mencionada en alguno otro de los estados de México o república independiente de América, se avecinara en Durango 3ero. -Los nacidos en países extranjeros de padres mexicanos... y fijan su domicilio en el estado. 4to. Los extranjeros radicados en el estado con vecindad, siempre y cuando hayan sido fieles a la causa de la independencia; y los que en sucesivo obtengan carta de ciudadanía: las leyes prescribirán el mérito y circunstancias indispensables para que se les conceda.

⁴⁹ “Reglamento para el gobierno interior de los ayuntamientos y pueblos del estado de Durango, 1825”, Art. 5. en *op. cit.*, p. 169.

⁵⁰ “Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825”, p. 75.

⁵¹ “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, en *op. cit.*, p. 145.

les y criminales en que se hubieren interpuesto los recurso de apelación o nulidad de las sentencias en primera instancia (Art. 67); y de las sentencias criminales en que se impusiera pena corporal, con o sin apelación (Art. 31); la segunda sala, por un ministro que tenía comprensión de la tercera instancia en toda causas civil o criminal y del recurso de súplica, así como del conocimiento de la segunda instancia de las causas de diputados y senadores, de las del gobernador, vicegobernador, su secretario y los ministros del tribunal, previa declaración del Congreso de haber formación de la causa, sobre estos casos conocería en primera instancia la primera sala. Y la tercera sala tenía competencia de la tercera instancia de las causas mencionadas contra las autoridades en mención, que en segunda instancia conoció la segunda sala.⁵²

Además, como ya mencionamos, estos magistrados además de atender las causas civiles y criminales, debían practicar los exámenes para la aprobación de los abogados para el ejercicio de la abogacía (Art. 63).⁵³ En 1827 el gobernador José Baca Ortiz, ponía su esperanza en esto, pues consideraba que los graves problemas de justicia que existían, cesarían luego de que el Supremo Tribunal de Justicia, examinara a los abogados.⁵⁴

La diferencia entre los personajes expuestos radica principalmente en la forma de elección y en las funciones y facultades, de tal manera, se puede observar claramente que entre magistratura y jueces legos había mucha distancia, puesto que los primeros eran jueces letrados, mientras que los conciliadores o alcaldes eran meros funcionarios legos con funciones contenciosas. Además, la magistratura implicaba los juicios de cuantía superior.

Sin embargo, en ambos cargos de justicia existían problemas, pues el informe del gobernador Pescador, de 1831, lo reitera al mencionar que, así como era un grave problema el que asolaba a los jueces de primera instancia, también existía el problema de la impunidad con que obraba el poder judicial, tanto en jueces superiores como inferiores. Faltándole a los jueces la virtud que asegura el célebre Montesquieu, “de ser el alma del sistema republicano”.⁵⁵

⁵² “Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825”, pp. 76-79.

⁵³ *Ibid.* p. 75.5

⁵⁴ Memoria de los ramos que son a cargo del gobierno del estado libre de Durango, 1827, *op. cit.*, p. 12.

⁵⁵ Memoria que el Excmo. Sr. Gobernador del estado de Durango, Juan Antonio Pescador, 1831, p. 6.



Respecto al salario de estos tenemos que para este mismo año en mención se pagaba 4000 pesos anuales a cada uno de los tres magistrados, al igual que al fiscal. Lo que era un salario bastante decoroso al compararlo con el del gobernador que percibía 6000 al año. Además de esto podemos observar el pago de los asesores letrados por 1200 a cada uno de los dos que existían y 500 a cada uno de los dos abogados de pobres. Con esto queda claro que aún y con los problemas para la organización y reestructuración del Poder Judicial, se estaba cumpliendo con los aspectos básicos que ello implicaba.⁵⁶

CONCLUSIONES

En conclusión, no puede desconocerse que existió una continuidad en la *cultura jurídica*, esto es en las actitudes profesionales de los juristas, en sus formas de tratar las fuentes, así como en sus *tradiciones*.⁵⁷ Pero además hubo una fuerte ruptura que permitió ir delimitando la justicia en manos de los magistrados, e ir pugnando cada vez más por la transformación de una justicia letrada de primera instancia en manos de jueces letrados. Por lo cual la Constitución de 1824 y la estatal de Durango de 1825, permitieron que este proceso fuera iniciando al transformar algunas de las antiguas instituciones de justicia y aunque mantuvo la pervivencia en algunas otras, dio pauta para que se generaran los discursos y propuestas suficientes para la transformación de éstas.

Sin embargo, si es importante mencionar la fuerza que continuaban teniendo los alcaldes de los ayuntamientos, puesto que, aunque la Constitución Mexicana no los menciona de manera explícita, si deja abierto el espacio para que el Poder Judicial se integrara de la manera más conveniente. Y es en este sentido que pueden accederse para aplicar este tipo de justicia. Lo que nos muestra una división de poderes un tanto frágil, tanto a nivel estatal como federal. Resultado de un proceso de transformación en que cada uno de estos poderes se va fortaleciendo en base a los diversos disturbios de la época. De tal forma, si bien la constitución fue clave para la transformación y consolidación del México independiente, también lo fueron los reglamentos adyacentes y los diversos debates al respecto de

⁵⁶ Memoria que el Excmo. Sr. Gobernador del estado de Durango, Juan Antonio Pescador, 1831, anexo 21.

⁵⁷ Tania Raigosa, "Cultura jurídica: administración de justicia en Durango. 1825-1867", p. 53.

la aplicación de estos, puesto que en los informes de gobierno podemos ver cómo se ejerció la práctica de estos dispositivos y los problemas reales para aplicar la ley y organizar el poder judicial en la vida diaria.

Además, hay que señalar que, al eliminarse la mayoría de los tribunales especiales dentro de la constitución federal, se estaba dando paso a la igualdad jurídica, puesto que los indígenas y más, tendrían que ser juzgados en los tribunales que estableció la constitución. Por lo cual, podemos decir que se abonó en favor de la igualdad ante la ley, pues si bien la constitución no lo estableció de manera explícita, mediante algún artículo en concreto, si lo hizo de manera tacita mediante la formación de sus tribunales. Pues si bien es cierto que no podemos hablar de una igualdad jurídica total y completa, por la falta de códigos legales y la existencia de los fueros eclesiástico y militar, si podemos hablar de un comienzo en la homogenización de la igualdad. Misma que comenzó a vislumbrarse con la eliminación de los tribunales especiales en la Constitución de 1824, influenciada en esto por la Constitución de Cádiz de 1812. Y que asimismo se vio reflejada en las constituciones de los estados, concretamente en la de Durango, en este caso. Sin embargo, eso era apenas un primer paso en el largo camino por recorrer para lograr la igualdad y la conformación y consolidación de los tribunales.

FUENTES CONSULTADAS

Bibliográficas

ANDREWS, Catherine, “Pautas para el acierto a los gobiernos. Los derechos en el primer constitucionalismo mexicano (1821-1836)”, en *Estudios de Historia Moderna y contemporánea de México*, México, 2019, disponible en:

<<https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/68451/63754>>. (Consultado: 05/10/2024).

BARRAGÁN CISNEROS, Velia Patricia, *La constitución política del estado de Durango, notas históricas*, Durango, México, Universidad Juárez del Estado de Durango, 1998.

GARRIGA, Carlos, “El federalismo judicial mexicano (1824-1835)”, en Beatriz Rojas (coord.), *Procesos constitucionales mexicanos: La constitución de 1824 y la antigua constitución*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2017.

Juzgados de Distrito, México, Poder Judicial de la Federación, 2003.

MARTÍNEZ CHÁVEZ, Eva Elizabeth y MANZANERO TREJO, María de Lourdes, “Administración de justicia y derechos constitucionales en el Michoacán decimonónico”, en Efraín de Jesús Gutiérrez y Jorge Alfredo Jiménez (coords.),



- Derechos Constitucionales y Derechos Humanos*, México, Universidad de Guadalajara/Centro Universitario de Ciénega, Tirant lo Blanch, 2023.
- MARTÍNEZ CHÁVEZ, Eva Elizabeth, “Derechos procesales en materia criminal. De Cádiz a la primera República federal”, en José Luis Fernández (coord.), *Derechos y libertades entre cartas magnas y océanos: experiencias constitucionales en México y España (1808-2018)*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2021, pp. 40-41.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Fernando, “La constitucionalización de la justicia 1810-1823”, en Martha Lorente Sariñana (coord.) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid. Consejo General del Poder Judicial, 2007.
- PANTOJA MORÁN, David, *El supremo poder conservador. El diseño institucional de las primeras constituciones mexicanas*, México, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, 2005.
- RABASA, Emilio O., *El pensamiento político del constituyente de 1824*, México, UNAM, 1986.
- RAIGOSA GÓMEZ, Tania Celiset, “Cultura jurídica: administración de justicia en Durango. 1825-1867” en Gloria Estela Cano (coord.), *Historia de Durango, tomo III, siglo XIX*, México, Instituto de Inv. Históricas de Universidad Juárez del Estado de Durango, 2013.
- (2019), “El poder judicial en Durango, 1910-1924”, *Historia*, (11), Durango, México, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pp. 179-199, disponible en: <<http://revistahistoria.ujed.mx/index.php/revistahistoria/issue/view/5,07/10/2023>>.
- RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel Ángel, *Durango, Historia de las Instituciones Jurídicas*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Senado de la República, 2010.
- SPECKMAN GUERRA, Elisa, “La justicia penal en la época de Juárez”, en *Memoria del Coloquio, Benito Juárez, estadista y hombre de leyes y la exposición Vida, ley y justicia en su época*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.
- *Del tigre de Santa Julia, la princesa Italia y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos XIX y XX)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, Inacipe, 2015.

Fuentes de la época

- (1876) “Constitución Política de la Monarquía Española”, en *Legislación Mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, México, Imprenta del Comercio a cargo de Manuel Dublán y José María Lozano, pp. 349-379.

- (1876) "Constitución de los Estados Unidos Mexicanos", en *Legislación Mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, Tomo I, México, Imprenta del Comercio, a cargo de Manuel Dublán y José María Lozano, pp. 719-737.
- (1828) "Constitución Política de Durango, 1825", en *Colección de las Leyes y Ordenes del Honorable Congreso Constituyente del Estado libre de Durango, desde su instalación el 30 de junio de 1824 hasta el 26 de octubre de 1825 en que cesó*, Victoria de Durango, Imprenta a cargo de Manuel González, pp. 46-64.
- (1827) Memoria de los ramos que son a cargo del gobierno del estado libre de Durango, leída al segundo Congreso constitucional en sesión de 5 de septiembre de 1827, Durango, México, Imprenta liberal a cargo de M. González.
- (1831) Memoria que el Excmo. Sr. Gobernador del estado de Durango, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo ochenta, fracción séptima de la constitución, presentó al honorable congreso el día 2 de agosto de 1831, Durango, México, Imprenta del Estado a cargo de Manuel González.
- (1828) "Reglamento para la administración de justicia en el estado, 21 de octubre de 1825", en *Colección de las Leyes y Ordenes del Honorable Congreso Constituyente del Estado libre de Durango, desde su instalación el 30 de junio de 1824 hasta el 26 de octubre de 1825 en que cesó*, Victoria de Durango, Imprenta a cargo de Manuel González, pp. 68-80.
- (1825) "Reglamento para el gobierno interior de los ayuntamientos y pueblos del estado de Durango, 1825", en César Navarro y Pavel Navarro (eds.), *Los Congresos Federalistas de Durango, 1824-1835. Colección de las Leyes y Órdenes del Honorable Congreso Constituyente del Estado libre de Durango*, México, Instituto Mora, Congreso de Estado de Durango, 2006, pp. 168-177.
- (1825) "Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango", en César Navarro y Pavel Navarro (eds.), *Los Congresos Federalistas de Durango, 1824-1835. Colección de las Leyes y Ordenes del Honorable Congreso Constituyente del Estado libre de Durango*, México, Instituto Mora, Congreso de Estado de Durango, 2006, pp. 130-150.



La construcción del estado de Durango: El Poder Ejecutivo Estatal en la Primera República Federal, 1825-1835

Citlali Rodríguez González

Universidad Juárez del Estado de Durango/
Maestría en Ciencias y Humanidades



SURGIMIENTO DEL ESTADO: UN BREVE RELATO

Con la consumación de la lucha armada por la independencia de México, hubo regocijo y gran entusiasmo por la construcción de una nueva patria, pero al mismo tiempo se suscitaron conflictos y desavenencias entre los grupos políticos que pretendían dirigir el rumbo de este naciente país. Los principales conflictos políticos giraban en torno a las discusiones sobre la forma de gobierno.

Además, las provincias comenzaban a declararse “estados libres y soberanos” y las diputaciones provinciales publicaban sus decisiones. Estas ideas empezaron a esparcirse, promoviendo y fortaleciendo el autonomismo.¹ En este contexto, la Diputación Provincial de Durango buscaba avanzar en esa línea y presentó, el 30 de junio de 1823, su “Plan de Unión de las Provincias Internas de Occidente y Principios Generales para su Federación”. Su objetivo era formar un solo departamento denominado “Estado Interno Occidental de la Federación Mexicana” compuesto por las provincias de Nueva Vizcaya, Sinaloa y Nuevo México, el cual sería libre, independiente y soberano. Sin embargo, no fue aceptado por Sinaloa y Nuevo México.² Se infiere que esta decisión obedeció, en gran medida, a que la iniciativa llegó de manera tardía y cada provincia contaba ya con sus propios proyectos políticos. Aun así, es evidente que la intención autonomista también estuvo presente en la Diputación Provincial de Durango.

Frente a la situación que vivía el país, la convocatoria para elegir al nuevo congreso no podía postergarse más tiempo y finalmente fue decretada el 17 de junio de 1823. En su Artículo 86 se estableció la división del territorio de Durango en dos fracciones: la primera, que abarcaba desde el Paso del Norte hasta el río Florido, con capital en Chihuahua; y la segunda, integrada por el resto del territorio, cuya capital sería Durango.

¹ Josefina Zoraida Vázquez, “Los primeros tropiezos”, p. 530.

² Plan de Unión de las Provincias Internas de Occidente y Principios Generales para su Federación en José Ignacio Gallegos Caballero, *Compendio de historia de Durango, 1821-1910*, pp. 31-34.

Esta división se estableció para facilitar las elecciones; además, cada una nombraría a sus diputados correspondientes.³ Ya desde entonces se vislumbraba la posible separación de Chihuahua y Durango motivada por la vastedad y complejidad de sus territorios.

El Congreso Constituyente aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de enero de 1824, que se convirtió en el estatuto provisional del nuevo gobierno. En este documento se estableció que la nación era libre e independiente, y se adoptó una forma de gobierno republicana, representativa, popular y federal.⁴ El *Acta Constitutiva* dictaminó que las partes integrantes de la federación mexicana serían estados independientes, libres y soberanos.⁵ También estableció una división territorial del país, en la que Durango formaba parte del Estado Interno del Norte junto con las provincias de Chihuahua y Nuevo México.⁶ Esta disposición fue cuestionada y no fue aceptada en la Diputación Provincial de Durango, por lo que elaboraron un manifiesto para desconocer e impugnar tal precepto.⁷

En tal documento se alegó la gran extensión territorial del estado, así como la necesidad de un gobierno vigilante, activo e interior, cercano y de pronto remedio; argumentaron que en su distrito había haciendas más florecientes y muchos sujetos acaudalados con diferentes giros que reanimaban el comercio, pedían que por lo menos a esta ciudad se le considerara la capital del llamado Estado Interno del Norte, ostentaron ser una provincia más antigua que Chihuahua, decían tener un Obispado, entre otros argumentos que buscaban probar que la provincia de Durango podía formarse en un estado.⁸

También, con gran audacia legal, la Diputación invocó la aplicación del Artículo 8o. del *Acta Constitutiva* que dictaba: “En la constitución se podrá aumentar el número de los estados comprendidos en el artículo anterior, y modificarlos según se conozca ser más conforme a la felicidad

³ Ley electoral muy detallada para los comicios de diputados al Segundo Congreso Constituyente de la Nación en Obra Colectiva, *Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones*, p. 368.

⁴ Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, 1824, disponible en: <www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1824A.pdf>. (Consultado: 30/04/2022).

⁵ Art. 2 en Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, 1824.

⁶ Art. 7 en Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, 1824.

⁷ Manifiesto de la Diputación Provincial de Durango, en José Ignacio Gallegos Caballero, *op. cit.*, pp. 24-28.

⁸ *Idem*.

de los pueblos”.⁹ Así pues, para evitar que los conflictos entre Chihuahua y Durango se agravaran, el Congreso Constituyente determinó dividir al Estado Interno del Norte, para ello se elaboró el decreto del 22 de mayo de 1824 que declaró: “Durango formará un Estado de la Federación Mexicana”¹⁰ y luego fue ratificado por la *Constitución de 1824* en su Artículo 5o.¹¹

La *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos* fue promulgada el día 4 de octubre de 1824, se ratificaron los principios básicos del *Acta Constitutiva de la Federación Mexicana*. Se mandató que los estados que componían la República Mexicana organizaran y administraran sus gobiernos, realizaran sus propias constituciones, leyes y decretos sin contradecir la Constitución Federal.¹²

Con ello, se iniciaron los primeros ejercicios legislativos con el propósito de elaborar la primera constitución del estado de Durango. El gobernador interino, Juan Navarro del Rey, convocó al primer congreso constituyente, que comenzó a sesionar el 30 de junio de 1824. En sus primeras sesiones, se promulgó la Ley Orgánica del Estado, que se convirtió en el primer estatuto provisional de gobierno y sirvió como base para la creación de la primera constitución de Durango.¹³ Este proceso marcó un hito en la construcción institucional del estado, estableciendo las pautas para su organización política y jurídica.

Fue hasta el 1 de septiembre de 1825 que Rafael Bracho, gobernador de Durango, publicó la primera *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango*, la undécima constitución promulgada entre los diecinueve estados de la República Mexicana.¹⁴ Este documento constitucional marcó el nacimiento formal de Durango como entidad política.

⁹ Art. 8 en Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.

¹⁰ Decreto de 22 de mayo de 1824, en Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, *Durango. Historia de las instituciones jurídicas*, p. 223, disponible en: <<http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/11682>>.

¹¹ Art. 5 en Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (en adelante CEUM 1824), disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf>. (Consultado: 30/04/2022).

¹² Véase CEUM 1824, Art. 161.

¹³ César Navarro Gallegos, “Durango en la primera república federal”, pp. 60-61.

¹⁴ Léase Enrique Arrieta Silva, “La Constitución de Durango de 1825: matices y peculiaridades”, disponible en: <<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/id/8>>, pp. 121-138.



A partir de la promulgación de la *Constitución Federal de 1824*, se eliminó la figura del jefe superior de las provincias; los estados integrantes de la federación podrían confiar en una o varias personas su Poder Ejecutivo, según el Artículo 159 que dictaba: “La persona o personas a quien los Estados confiaren su poder ejecutivo, no podrá ejercerlo sino por determinado tiempo, que fijará su constitución respectiva”.¹⁵

En esta disposición no se especifica el nombramiento de “un” gobernador, la *Ley* les otorgó facultad a los estados para nombrar de forma independiente y autónoma al o los encargados del Ejecutivo. En Durango se determinó, en el Artículo 65 de su *constitución* lo siguiente: “la suprema potestad ejecutiva del Estado, reside en una sola persona, que se denominará gobernador del Estado de Durango”.¹⁶ El gobernador era el jefe de la administración del estado, promulgaba las leyes y los decretos, atendía la recaudación de todos los fondos públicos y municipales, entre otras facultades descritas en la sección VI titulada “Del poder ejecutivo, su naturaleza, duración, prerrogativas, facultades, deberes, y restricciones”.¹⁷

El primer requisito para ser gobernador era “ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos”.¹⁸ La *Constitución de 1825* no enumeró todos los requisitos para ser ciudadano, centrándose únicamente en explicar el requisito de vecindad. Fue en la *Ley de convocatoria para elegir diputados al Congreso General de la Unión y del Estado* donde se especificó que los ciudadanos duranguenses debían ser mayores de veinte años si eran solteros, o de cualquier edad si eran casados, y podían votar en el ayuntamiento donde estuvieran avocados.¹⁹ Como puede observarse, el derecho a la ciudadanía pertenecía exclusivamente a los hombres, excluyendo por completo a las mujeres de toda participación política.

El segundo requisito era haber nacido en el estado o en otra parte de América emancipada de España, con vecindad y una residencia no interrumpida de siete años en el distrito de Durango. El tercer requisito exigía

¹⁵ Art. 159 en CEUM 1824.

¹⁶ CPELD 1825, Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado, *Digesto Constitucional Mexicano, Durango*, p. 102.

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ *Idem.*

¹⁹ Ley de convocatoria para elegir diputados al Congreso General de la Unión y del Estado en César Navarro Valdez y Pavel Navarro Valdez, *Los Congresos Federalistas de Durango 1824-1835*, p. 126.

una edad mínima de treinta y cinco años. Estos mismos requisitos también aplicaban para el cargo de vicegobernador.²⁰ El mandato de ambos sería de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. Además, no podían ocupar el cargo de gobernador los eclesiásticos, los empleados de la Federación ni los diputados o senadores en funciones.²¹

De acuerdo con la Ley XXVIII del 17 de agosto de 1825, se convocó a la elección de diputados al Congreso General de la Unión y del Estado el primer domingo de septiembre del año 1825.²² Para realizar las votaciones se debería determinar el número de electores que le tocaría a cada distrito, para ello se siguió lo siguiente: por cada quinientas almas en los ayuntamientos se nombraría a un elector; en los pueblos con ayuntamiento que no se cumpliera el requisito de número de almas se asignaba un elector; y en los casos en los que los ayuntamientos tuviesen un resto mayor a la mitad de almas necesarias para un elector, es decir, un resto mayor de más de doscientas cincuenta almas, se les asignaba otro elector, en caso contrario, que el resto fuese menor de la mitad, no se les otorgaba.²³

En las juntas primarias se votaba por los electores de partido, los ciudadanos acudían al lugar designado y entre los primeros veinte asistentes se elegían dos escrutadores y dos secretarios; el presidente de la mesa era la primera autoridad local. Posteriormente, los ciudadanos se acercaban a la mesa para ejercer su voto en voz alta; la votación se efectuaba durante tres días, la mesa receptora se encontraba abierta por cinco horas distribuidas en el transcurso de la mañana y tarde.²⁴ Podemos inferir que la idea de mantener abierta la mesa por tres días, tanto en la mañana como en la tarde, fue para otorgarles a todos los ciudadanos del ayuntamiento la posibilidad de participar y emitir su voto en dicha elección.

Los electores de partido nombrados en este primer ejercicio acudirían a la cabecera de partido, el segundo domingo de septiembre, para votar en las juntas secundarias por los diputados y senadores que integrarían el Congreso del Estado. Luego de la instalación formal del congreso, éstos elegirían al gobernador y vicegobernador. En caso de no obtener en una primera votación la mayoría absoluta a favor de un candidato, se realiza-

²⁰ CPELD 1825, Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado, *op. cit.*, pp. 102-103.

²¹ *Idem.*

²² Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, *op. cit.*, p. 77.

²³ *Idem.*

²⁴ *Idem.*



ría una segunda vuelta o las necesarias hasta que se cumpliera la pluralidad absoluta.²⁵

El gobernador del estado era elegido de forma directa por el congreso. Este hecho podría considerarse uno de los motivos por los cuales se ha pensado que el Poder Legislativo mantenía cierta preeminencia sobre el Ejecutivo, al ser el órgano encargado de designar a su titular. No obstante, la *Constitución de 1825* le otorgó al gobernador un tratamiento de distinción al ser llamado “excelencia”, así como facultades que le proporcionaban una notable protección política.

Entre estas atribuciones destacaba la capacidad de disponer de la milicia cívica y el auxilio inmediato del comandante general. Además, se le confería el poder de remover a los jefes de partido, e incluso destituir a uno o a todos los miembros del ayuntamiento en casos de abuso de poder.²⁶ Estas disposiciones sugieren un intento de mantener un equilibrio entre los poderes del estado; sin embargo, también dejan entrever una tendencia hacia el fortalecimiento del Poder Ejecutivo.

LOS GOBERNADORES DURANTE LA PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL

El Primer Congreso Constitucional de Durango se instaló el 10 de mayo de 1826, posteriormente hicieron la designación del primer gobernador constitucional Santiago Baca Ortiz²⁷ y como vicegobernador a José Joaquín de Escobar.²⁸ Baca Ortiz era un firme defensor del federalismo. Sufrió persecución y fue encarcelado durante el gobierno tiránico de Iturbide debido a su postura antiimperialista.²⁹

A Baca Ortiz se le atribuyó la aparición de la logia yorkina en la entidad duranguense, integrada por los “cuchas” y por algunos jóvenes que provenían de los “chirrines”.³⁰ En los primeros meses del gobierno de Baca

²⁵ CPELD 1825, Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado, *op. cit.*, p. 102.

²⁶ *Ibid.*, pp. 103-105.

²⁷ Originario de Santiago Papasquiaro, Durango. Nació en 1790, gobernador electo a la edad de 35 años, estudió jurisprudencia en el Seminario de Durango. José de la Cruz Pacheco Rojas, *Breve historia de Durango*, p. 135.

²⁸ José Ignacio Gallegos Caballero, *op. cit.*, p. 36.

²⁹ José de la Cruz Pacheco Rojas, “Primer ensayo republicano en Durango, 1823-1827”, *Transición*, p. 115.

³⁰ En Durango, la clase política se dividió en dos bandos para disputarse el poder, en “los chirrines” y en “los cuchas”. Según Ramírez, el apodo “chirrín” se refiere a un

Ortiz, sus adversarios políticos intentaron darle un golpe político, someterlo a juicio para poder destituirlo. Este movimiento estuvo encabezado por el senador Jesús María Mena, perteneciente a la logia escocesa y vicegobernador en el periodo anterior de gobierno de Baca Ortiz.³¹

Los opositores al gobernador cuestionaban la legitimidad de su ascenso al poder, argumentando que las elecciones de diputados al Congreso General y al Congreso del Estado debieron haberse realizado de manera simultánea; sin embargo, sólo se llevó a cabo la elección de los miembros del Congreso del Estado, quienes posteriormente eligieron al gobernador. En consecuencia, los detractores de Baca Ortiz alegaban que los resultados de dicha votación carecían de validez. No obstante, la realización o no de las elecciones para los diputados del Congreso de la Unión no habría afectado los resultados de la elección local, ya que ambos procesos eran independientes.

Baca Ortiz se distinguió como un hombre progresista, de ideas liberales y profundas convicciones.³² Promovió acciones para mejorar la economía del estado. Asimismo, consideraba urgente organizar, equipar y mantener a la milicia con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Se establecieron los primeros marcos legales que regularon el funcionamiento de las nascentes instituciones políticas, tales como la Ley de la Policía Rural, el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Secretaría de Gobierno y las normativas para los servidores públicos, entre otros. Estas acciones evidenciaban la preocupación del gobierno por desarrollar políticas públicas que no sólo atendieran los problemas económicos, sino que también aportaran estabilidad política al estado.

El primer gobernador constitucional se distinguió por su rechazo al régimen monárquico, calificó al rey de España, Fernando de Borbón, como un opresor, arbitrario, déspota soberbio y caprichoso. Se declaró a favor de la libertad, la independencia nacional y la federación e invitaba a los

hombre pacífico y sin letras, pero con pretensiones de gran señor y literato. Y el apodo "cucha" se refiere a un mendigo crapuloso, entre simple y bellaco, que ganaba su vida haciendo reír con su llanto y lágrimas fingidas, siendo por lo mismo el ludibrio y desprecio del pueblo. José Fernando Ramírez, *Noticias históricas y estadísticas de Durango 1849-1850*, pp. 62-65.

³¹ Decreto XX, en César Navarro Gallegos y Pavel Navarro Valdez, *op. cit.*, p. 118.

³² Carlos Hernández, *Durango gráfico*, p. 63.



simpatizantes de la Corona a recapacitar por el bien y la salvación de la patria.³³

Santiago Baca Ortiz gobernó desde mayo de 1826 hasta noviembre de 1829. No concluyó el periodo de cuatro años establecido en la *constitución*. Se considera que uno de los motivos más fuertes fue la falta de un Poder Legislativo local que lo respaldara. Según Navarro, la gestión de Baca Ortiz se vio limitada por la disolución del Segundo Congreso local el 20 de agosto de 1828, por lo tanto, no tuvo la posibilidad de emitir leyes y decretos.³⁴

El 1o. de agosto de 1829 se instaló el Tercer Congreso Constitucional del Estado,³⁵ y acto seguido se nombró a Francisco Elorriaga como el segundo gobernador y a Juan Manuel Asúnsolo como vicegobernador de Durango.³⁶ Pocos días después, Baca Ortiz intentó renunciar a su cargo, pero su renuncia fue rechazada por el Congreso del Estado.³⁷ Se infiere que dicha acción fue una reacción al nombramiento adelantado del nuevo gobernador. Elorriaga fue designado titular del Poder Ejecutivo estatal mucho antes de que Baca Ortiz concluyera su periodo conforme a lo estipulado por la ley. Para evitar impugnaciones, el congreso emitió su segundo decreto dos días después de su instalación, estableciendo lo siguiente: la duración de cuatro años para el gobernador y vicegobernador, fijada por la *constitución*, terminaría el 2 de noviembre del presente año, y en lo sucesivo en la misma fecha de forma periódica.³⁸

Ante esta situación, Francisco Elorriaga intentó declinar a su encargo de gobernador después de ser designado; sin embargo, su renuncia no fue aceptada por el congreso.³⁹ Podemos intuir que no estuvo de acuerdo con la forma en que se realizó su nombramiento y seguramente por su afinidad con Baca Ortiz. Asimismo, el 4 de agosto, tres días después de

³³ AHAD, El gobernador de Durango a los habitantes del estado, varios, caja 39, sección 4, legajo 161.

³⁴ César Navarro Gallegos, *op. cit.*, p. 72.

³⁵ Las elecciones para elegir el Tercer Congreso Constitucional se efectuaron el 3 de julio de 1929, véase lista de sus integrantes en AHAD, Regulación de votos para la tercera legislatura, varios, caja 39, sección 4, legajo 161.

³⁶ Decreto 195 en César Navarro Gallegos y Pavel Navarro Valdez, *op. cit.*, p. 301.

³⁷ AHAD, No se admite renuncia del gobernador Santiago Baca Ortiz, 11 de agosto de 1829, varios, caja 39, sección 4, legajo 161.

³⁸ Decreto 196 en César Navarro Gallegos y Pavel Navarro Valdez, *op. cit.*, p. 301.

³⁹ AHAD, No se admite renuncia del nombramiento de gobernador, varios, caja 39, sección 4, legajo 161.

haber nombrado a Juan Manuel Asúnsolo como vicegobernador, el congreso derogó esa parte del decreto para luego nombrar al mismo cargo a Victorino Alcalde.⁴⁰

Mientras tanto, Vicente Guerrero fue declarado presidente de México en medio de una profunda crisis política. Su elección provocó la división entre los yorkinos. Por un lado, estaban aquellos que temían las medidas radicales impulsadas por Lorenzo de Zavala, considerado cercano a Guerrero;⁴¹ por otro, quienes, desilusionados con el sistema federal, se convirtieron en opositores al gobierno de Guerrero. Esta fragmentación reflejaba las tensiones internas dentro del grupo dominante y evidenciaba el creciente desencanto por el federalismo.

En los primeros días de diciembre de 1829, el vicepresidente Anastasio Bustamante promulgó el *Plan de Jalapa* en el que se declaraba el restablecimiento del orden constitucional y del libre ejercicio de la soberanía de los estados; por tanto, era necesario renovar el juramento de sostener la Constitución Federal y las leyes existentes. También se estipuló que el Consejo de Gobierno llamaría al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que se encargara del Supremo Poder Ejecutivo.⁴²

El estado de Durango, al igual que otros estados de la federación, rechazaron el *Plan de Jalapa*; consideraban que se avecinaba una dictadura militar, convocaron a una coalición de estados a favor del federalismo y movilizaron las milicias estatales, las cuales fueron declaradas protectoras de la soberanía política y administrativa de los estados. La coalición no se llevó a cabo, el general Bustamante movilizó tropas contra los estados opositores.⁴³

Al final, el gobierno de Durango se adhirió al plan proclamado en Jalapa el 30 de enero de 1830,⁴⁴ intentando conservar y mantener el control. Sin embargo, Francisco Elorriaga fue neutralizado y destituido en los primeros meses de 1830. La dirección del estado fue tomada por el Consejo de Gobierno, que de forma inmediata convocó al Segundo Congreso Constitucional el 8 de marzo de 1830, para que continuara con sus

⁴⁰ Decreto 197 en César Navarro Gallegos y Pavel Navarro Valdez, *op. cit.*, p. 301.

⁴¹ José Antonio Serrano, "Rumbo al fracaso del primer federalismo, 1829-1835", pp. 161-163.

⁴² Plan de Jalapa, 4 de diciembre de 1829 en Berta Ulloa y Joel Hernández Santiago, *Planes en la nación mexicana, Libro uno: 1808-1830*, p. 227.

⁴³ José Antonio Serrano, *op. cit.*, pp. 167 y 168.

⁴⁴ Decreto 233 en César Navarro Gallegos y Pavel Navarro Valdez, *op. cit.*, pp. 341-342.



sesiones. Según documento, las sesiones del Segundo Congreso habían sido interrumpidas el 12 de junio de 1829.⁴⁵ Desconocieron al Tercer Congreso Constitucional instalado en agosto, el mismo que había nombrado a Elorriaga como gobernador de Durango.⁴⁶

El Consejo de Gobierno nombró titular del Poder Ejecutivo a Juan Antonio Pescador, más tarde el congreso local ratificó dicho nombramiento y lo designó como el segundo gobernador constitucional. La duración de su cargo empezaría a contarse a partir del día 4 de marzo de 1830, fecha en que el gobernador prestó juramento ante el Consejo de Gobierno.⁴⁷ Asimismo, se nombró a Mariano Herrera como segundo vicegobernador constitucional.⁴⁸ La elección de Juan Antonio Pescador como gobernador no siguió el procedimiento indicado por la *Ley de Elecciones*, aunque fue legal, justificado en las facultades otorgadas al Consejo de Gobierno, y para legitimar su designación se realizó el nombramiento oficial realizado por el Congreso del Estado.

El gobernador Pescador contaba con el apoyo del presidente Anastasio Bustamante, “los hombres de bien” de la localidad y del partido “chirrín”.⁴⁹ Juan Antonio Pescador rechazaba a todas las logias, especialmente sentía un fuerte desagrado por los yorkinos. Propuso prohibir las sociedades secretas en el estado, cualquiera que fuera su rito o denominación; creía que perjudicaban a la sociedad, a la religión, a la libertad y a la seguridad individual.⁵⁰

El 20 de julio de 1832 fue destituido Juan Antonio Pescador del gobierno del estado y restituido en el cargo de gobernador Francisco de Elorriaga,⁵¹ gracias a la sublevación del teniente coronel José Urrea y de sus oficiales en favor del retorno de Gómez Pedraza como presidente de México y del orden constitucional en el estado. El comandante José Urrea tomó el palacio de gobierno donde se encontraba Juan Antonio Pescador, que fue obligado a entregar el gobierno.

⁴⁵ AGN, Convocatoria al Segundo Congreso Constitucional, sección gobernación, s/s, 1830, caja 134, exp. 18. p. 1.

⁴⁶ El tercer constituyente se instaló el 1o. de agosto de 1829 y dejó de existir el 4 de marzo de 1830, en César Navarro Gallegos y Pavel Navarro Valdez, *op. cit.*, p. 299.

⁴⁷ AGN, sección gobernación, s/s, 1830, caja 134, exp. 18, p. 4.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 3.

⁴⁹ José de la Cruz Pacheco Rojas, *Breve historia de...*, p. 142.

⁵⁰ AHMR-UJED, Iniciativas de ley presentadas por el gobernador Juan Antonio Pescador, 1831.

⁵¹ José de la Cruz Pacheco Rojas, *Breve historia de...*, p. 143.

El 29 de julio de 1832 se confirmó el regreso de Francisco Elorriaga al Ejecutivo estatal.⁵² Elorriaga decía que, para volver a la senda constitucional, se requería dar algunos pasos fuera de ella y tomar medidas extraordinarias, por lo que se acordó instalar el Cuarto Congreso Constitucional el 1o. de septiembre de 1832, y terminaría sus funciones en julio de 1833.⁵³

En la República Mexicana continuaba el descontento contra Bustamante, lo cual era aprovechado por Antonio López de Santa Anna para ganar adeptos y el apoyo de varias autoridades de los estados del país, entre ellos el gobernador Elorriaga, quien en esa época se refería a Santa Anna como el “general libertador de la República, el inmortal”.⁵⁴

A finales de diciembre de 1832 se llegó a una negociación mediante los llamados *Convenios de Zavaleta* entre Bustamante, Santa Anna y Gómez Pedraza. Entre los puntos a destacar en los *Convenios* estaba la autorización a los gobernadores de los estados para adoptar las providencias que creyeran conducentes para su pueblo, se les otorgó soberanía y se les pidió que realizaran todos los actos electorales y leyes para renovar sus gobiernos y congresos locales.⁵⁵

El 12 de enero de 1833, el gobierno del estado de Durango reconoció y adoptó los *Convenios de Zavaleta*; en consecuencia, se renovaría por completo la IV Legislatura local. Se convocó a la celebración de las elecciones primarias el domingo 27 de enero y las elecciones secundarias el día 3 de febrero. Una vez electo el Quinto Congreso, abriría sesiones el 15 de febrero y duraría en funciones hasta julio de 1835. Este nuevo congreso nombraría a los diputados integrantes del Congreso General y además tendría la potestad para elegir al nuevo gobernador y vicegobernador, quienes tomarían el cargo hasta el día 2 de noviembre de 1833.⁵⁶

⁵² AHMR-UJED, El ciudadano Francisco Elorriaga gobernador del estado libre y soberano de Durango en *Gaceta del Supremo Gobierno de Durango*, domingo 12 de agosto de 1832, año 1, núm. 1, p. 2.

⁵³ *Idem*.

⁵⁴ AHMR-UJED, *Gaceta del Supremo Gobierno de Durango*, jueves 18 de octubre de 1832, año 1, núm. 20, p. 80.

⁵⁵ *Convenios de Zavaleta*, 23 de diciembre de 1832 en Berta Ulloa y Joel Hernández Santiago, *Planes en la nación mexicana, Libro dos: 1831-1834*, p. 169.

⁵⁶ AHMR-UJED, *Gaceta del Supremo Gobierno de Durango*, jueves 17 de enero de 1833, año 2, núm. 46, p. 184.



Fue el 15 de febrero de 1833 que se eligió a Basilio Mendarozqueta como gobernador y a Francisco Elorriaga como vicegobernador.⁵⁷ Ambos personajes eran conocidos por su amistad y su tendencia federalista; por lo tanto, reinaba un ambiente de unión y de conformidad. Basilio Mendarozqueta⁵⁸ era nombrado por los federalistas como el “tercer” gobernador constitucional, con ello ratificaban el rechazo y desconocimiento de Juan Antonio Pescador como gobernador de Durango.

Al tomar posesión del cargo de gobernador, Mendarozqueta señaló que en la *Constitución de 1824* había defectos sustanciales, artículos incongruentes o inconvenientes, pero aun así era un pacto legal que garantizaba los derechos de los mexicanos y que estaba en vía de perfeccionarse. Manifestó que era el momento adecuado para proponer reformas a la *Constitución Federal*; por tanto, le pidió al congreso local que realizara las propuestas o iniciativas convenientes para lograr tal objetivo.⁵⁹

El gobernador Mendarozqueta fue optimista, pensaba que con prudencia y sabiduría se produciría el nacimiento de la riqueza y la abundancia en el estado. Sus propósitos eran bien intencionados, quería organizar y dotar a la milicia cívica de buenos equipos, fomentar la educación primaria, evitar la corrupción en la recaudación, mejorar los salarios y estaba convencido de que lo más importante para la felicidad de la sociedad era “la ilustración del pueblo”, por lo tanto la prioridad en su gobierno sería proporcionar profesores, academias e institutos.⁶⁰

Mientras tanto, el país seguía sumido en la inestabilidad política. Antonio López de Santa Anna dejó la presidencia en manos del vicepresidente

⁵⁷ AHMR-UJED, *Gaceta del Supremo Gobierno de Durango*, domingo 17 de febrero de 1833, año 2, núm. 55, p. 224.

⁵⁸ Nació en Sombrerete, Zacatecas, en 1791. Junto con su hermano Domingo, fue cabeza de una importante familia de comerciantes que se estableció en Durango en la década de 1820. Participó muy activamente en la vida política de la entidad, fue gobernador, diputado local, presidente del Ayuntamiento de la ciudad de Durango y miembro de la Junta Departamental durante los gobiernos centralistas, además de miembro imprescindible de todas las reuniones en las que se trataban asuntos importantes para el estado. Sus ideas políticas se inclinaron hacia el liberalismo moderado, aunque hacia el final de su vida comulgaba mucho más con el partido conservador. Murió en la ciudad de Durango en 1856. En Ana Lilia Nieto Camacho, “La imposible negación: la relación entre poderes en Durango en los años de la posguerra”, *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, p. 121.

⁵⁹ AHAD, Discurso del 2 de enero de 1834, en la apertura de las sesiones extraordinarias del H. Congreso, varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁶⁰ *Idem*.

te Valentín Gómez Farías, quien no cedía a sus propuestas de reformas constitucionales contra la Iglesia y el Ejército, pero su posición fue más radical. Santa Anna volvió para asumir la presidencia y trató de calmar la situación ocasionada por las reformas de Gómez Farías, aseguraba que su intención era proteger la religión y los derechos constitucionales.⁶¹

La mayoría de los integrantes del Congreso General eran federalistas radicales, y decidieron continuar con sus sesiones sin tomar en cuenta la postura del presidente; en respuesta a este desaire, el general Santa Anna cerró el congreso el 14 de mayo de 1834.⁶² Once días después se lanzó el *Plan de Cuernavaca*, que expresaba “la repugnancia por las leyes de proscripción y reforma religiosa; declaró que el Congreso Nacional al hacerlas defraudó la confianza que se le depositó y pide la protección del presidente”.⁶³

Basilio Mendarozqueta en un inicio no estuvo de acuerdo con el *Plan de Cuernavaca*, argumentó que la situación del país no era sólo culpa del Congreso Nacional y que el presidente no estaba exento de lo que ocurría en el país.⁶⁴ Según Sordo Cedeño, “Durango se encontraba al límite de la rebeldía y pensaba en la posibilidad de que Santa Anna se convirtiera en dictador y destruyera el sistema federal”.⁶⁵

La insubordinación del estado de Durango al *Plan de Cuernavaca* fue por poco tiempo; dos meses después, el congreso local y el gobernador decidieron reconocer a Santa Anna como el tercer presidente constitucional.⁶⁶ Según Sordo Cedeño, aceptaron el *plan* por los triunfos del gobierno central sobre los estados rebeldes, la posición de Santa Anna de mantener el sistema federal y por la posición neutral que mantuvo Zacatecas.⁶⁷

⁶¹ Josefina Zoraida Vázquez, *Dos décadas de desilusiones: en busca de una fórmula adecuada de gobierno 1832-1854*, p. 49.

⁶² Reynaldo Sordo Cedeño, “La Primera República Centralista 1835-1841”, p. 182.

⁶³ Acta del Pronunciamiento de Cuernavaca, 25 de mayo de 1834 en Berta Ulloa y Joel Hernández Santiago, *Planes en la nación mexicana, Libro dos: 1831-1834*, p. 214.

⁶⁴ José de la Cruz Pacheco Rojas, “El régimen central-federalista en Durango, 1835-1846”, p. 349.

⁶⁵ Reynaldo Sordo Cedeño, “El congreso en la Primera República Centralista”, p. 54.

⁶⁶ AHAD, Decreto del 29 de julio de 1834, varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁶⁷ Durango y Zacatecas fueron estados que decidieron coaligarse para defender al federalismo y a sus instituciones. Zacatecas era considerado bastión federalista y del movimiento liberal, además contaba con la milicia cívica más numerosa y disciplinada; sin embargo, en esta ocasión el gobierno zacatecano no estaba dispuesto en amparar al grupo de liberales, pero sí a defender el sistema federal. En Reynaldo Sordo Cedeño, “El congreso en la Primera República...”, p. 55.



Un grupo de ciudadanos se manifestó en contra del gobernador y del Congreso local, acusándolos de no cumplir el *Plan de Cuernavaca*. Esos ciudadanos denunciaron a Basilio Mendarozqueta por mantener al pueblo oprimido, abusar de su poder, intimidarlos y mostrar insensibilidad ante los graves problemas de la República. Señalaban al gobernador como responsable de la situación en la que se encontraba el estado y lo acusaban de rechazar el nuevo nombramiento del comandante general Rafael Andrade.⁶⁸ Éste no fue ratificado como comandante general, Santa Anna designó en su lugar a José Ignacio Gutiérrez.⁶⁹

Tras su llegada a Durango, el comandante Gutiérrez convocó a la guarnición militar del estado para decretar la remoción de los poderes Legislativo y Ejecutivo, justificando su acción en el *Plan de Cuernavaca*.⁷⁰ Lo mismo estaba sucediendo en otros estados de la República que rechazaban el *plan*.⁷¹ Posteriormente, Gutiérrez seleccionó a algunos vecinos de la capital para conformar una “junta popular” encargada de designar a un gobernador interino, quien a su vez tendría la responsabilidad de emitir la convocatoria para constituir un nuevo congreso.

Así, el 3 de septiembre de 1834 se estaba gestando un golpe de Estado del ejército contra el gobierno de Durango. Dos días después, la guarnición militar y la “junta popular” se reunieron en la casa de gobierno e iniciaron los actos protocolarios para darle apariencia de legitimidad a la elección del Ejecutivo estatal.⁷² Resultaron electos gobernador el mismo comandante general José Ignacio Gutiérrez y vicegobernador Pedro José Escalante.⁷³

El presidente de la República no estuvo de acuerdo con la destitución de Mendarozqueta, y expresó el siguiente reclamo al comandante general Gutiérrez: “en su acción usted incita sin necesidad a un desorden, se ataca a las autoridades, se sorprende al cuartel y se completan otra clase de

⁶⁸ Pronunciamiento de los ciudadanos de Durango, 30 de julio de 1834, Berta Ulloa y Joel Hernández Santiago, *Planes en la nación mexicana, Libro dos: 1831-1834*, p. 421.

⁶⁹ AHAD, Discurso del Comandante General de las armas en el estado, varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁷⁰ AHAD, Pronunciamiento de la Guarnición Militar del estado de Durango, varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁷¹ Reynaldo Sordo Cedeño, “El congreso en la Primera República...”, pp. 60-77.

⁷² AHAD, Acta celebrada por la junta instalada en esta capital, haciendo la elección de gobernador y vice interinos del estado, renovando también a los individuos del ayuntamiento. Varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁷³ *Idem*.

hechos, todos igualmente ilegales, inútiles y de pernicioso ejemplo para la causa pública”.⁷⁴

Tras la desaprobación de lo ocurrido en la ciudad, Santa Anna decidió nombrar a Gaspar Ochoa como comandante general de Durango y destituyó a Ignacio Gutiérrez. Antes de marcharse, Gutiérrez exhortó a los ciudadanos a no caer nuevamente en las manos de los “demagogos”, refiriéndose a Mendarozqueta y a los federalistas, y les pidió que “disfruten con moderación el triunfo”.⁷⁵ A pesar de los reproches recibidos por parte del supremo poder, Gutiérrez se mostraba satisfecho con los resultados de sus acciones, evidenciando convicción en su proceder.

El vicegobernador Escalante asumió las funciones de gobernador e intentó darle legitimidad a su gobierno convocando a elecciones para nombrar a los nuevos integrantes del Poder Legislativo.⁷⁶ Estos comicios no se realizaron debido a la resistencia de los federalistas y de los simpatizantes de Mendarozqueta, quienes no estaban dispuestos a permitirlo.

El presidente de la República, en su esfuerzo por estabilizar la situación política del país, emitió una circular nacional con el objetivo de calmar los ánimos en los estados. En dicho documento se establecía que ninguna autoridad podía ser removida de manera violenta, incluso si el gobernador había perdido la confianza pública. Santa Anna ordenó que las tropas se mantuvieran neutrales, limitándose a preservar el orden y respetando sus atribuciones. Además, el presidente proponía que los gobiernos estatales no debían estar controlados por un solo partido político, abogando por el equilibrio de las fuerzas políticas y el respeto a la constitucionalidad en su discurso.⁷⁷

El “vicegobernador” Escalante se negó a recibir a Gaspar Ochoa, quien intentó reinstaurar el gobierno anterior sin éxito. Ochoa fue enviado a Durango sin efectivos militares,⁷⁸ lo que facilitó que fuera ignorado y burlado, obligándolo a replegarse en Zacatecas. Desde allí, solicitó a la Comandancia de Zacatecas una fuerza de quinientos o seiscientos soldados para

⁷⁴ Secretaría de Guerra y Marina al coronel D. José Ignacio Gutiérrez, AGN, FG 1834 s/c en Reynaldo Sordo Cedeño, “El congreso en la Primera República...”, p. 74.

⁷⁵ AHAD, Discurso de José Ignacio Gutiérrez a sus conciudadanos, 29 de septiembre de 1834. Varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁷⁶ AHAD, Convocatoria de elecciones, 3 de octubre 1834. Varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁷⁷ AHAD, *Gaceta del Supremo Gobierno de Durango*, domingo 5 de octubre de 1834, año 3, núm. 223, p. 913.

⁷⁸ Reynaldo Sordo Cedeño, “El congreso en la Primera República...”, p. 75.



restablecer el orden constitucional en Durango. Sin embargo, Zacatecas respondió que no contaba con tropas del ejército, sólo con milicias cuya competencia se limitaba a su propio estado. No obstante, añadieron que, si el presidente de la República lo ordenaba, marcharían de inmediato hacia Durango.⁷⁹

La llegada del comandante Gaspar Ochoa, sumada al rumor del regreso de José Urrea, comandante general de Sonora y del próximo envío de las milicias de Zacatecas, pusieron en jaque a Pedro Escalante, lo que ocasionó su nerviosismo y, en un arranque de desesperación, comenzó a emitir una serie de discursos contra la falta de patriotismo y contra la manipulación de Mendarozqueta, acusándolo de todas las calamidades sucedidas en Durango, mientras que trataba de enaltecer los actos del 3 de septiembre, describiéndolos como heroicos y libertarios.

La orden de Santa Anna llegó⁸⁰ y las milicias zacatecanas prepararon su avance hacia Durango. A mediados de octubre de 1834 llegaron al partido de Nombre de Dios, donde se libró una batalla en la que ambos bandos sufrieron pérdidas y heridos. Finalmente, la victoria fue para las milicias zacatecanas, lideradas por el comandante José Antonio Heredia.⁸¹ Ante estos hechos, Escalante y sus aliados se refugiaron en el palacio de gobierno. Mientras tanto, Basilio Mendarozqueta convocó al Quinto Congreso del Estado en la hacienda de Navacoyán. Esta legislatura declaró el restablecimiento del orden constitucional, lo que implicó la ratificación de Basilio Mendarozqueta como gobernador de Durango.⁸²

El gobernador Mendarozqueta y el Congreso, con la idea de evitar más confrontaciones y lograr la reconciliación, decretaron el olvido perpetuo de los acontecimientos del día 3 de septiembre, siempre y cuando los adversarios depusieran las armas.⁸³ Pedro Escalante y sus seguidores disolvieron su gobierno, según Navarro, abandonaron la capital y se disgregaron hacia

⁷⁹ AHAD, *Gaceta del Supremo Gobierno de Durango*, jueves 30 de octubre de 1834, año 3, núm. 228, p. 935.

⁸⁰ AHAD, Secretaría de Guerra y Marina, 14 de octubre 1834, Varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁸¹ AHAD, *Gaceta del Supremo Gobierno de Durango*, jueves 23 de octubre de 1834, año 3, núm. 227, p. 927.

⁸² AHAD, Instalación del 5to. Congreso del Estado de Durango, 1 de noviembre 1834. Varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

⁸³ AHAD, Decreto sobre el perpetuo olvido, 1 de noviembre 1834. Varios, serie 4, caja 47, legajo 191.

otros puntos del estado.⁸⁴ Sin embargo, tiempo después Escalante seguía figurando en cargos políticos, incluso años más tarde llegó a convertirse en presidente del Superior Tribunal de Justicia del Estado.⁸⁵

Una vez restablecido el gobierno de Basilio Mendarozqueta se reanudó la organización y el fortalecimiento de las milicias cívicas; para recuperar sus armas y municiones se elaboró una serie de medidas que ayudaran para que la población las devolviera, tales como el pago de tres pesos por cada fusil, dos por carabina, etcétera.⁸⁶ Tales acciones, además de recuperar las armas, tenían el fin de desarmar a los habitantes y evitar nuevas asonadas.

REFLEXIONES FINALES

La promulgación de la *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824* consolidó la división de poderes; con ello, se estableció la figura del gobernador como titular del Poder Ejecutivo en los estados de la República Mexicana. Esta constitución otorgó a los congresos estatales la facultad de legislar sus propias constituciones, cediéndoles además la autoridad para establecer los preceptos que regularían la conducta y elección de los gobernadores.

Según la *Constitución del Estado de Durango de 1825*, el gobernador era elegido directamente por el Congreso del Estado, y éste era nombrado por las juntas secundarias. Las juntas se integraban por electores de partido designados en las juntas primarias. Durante esta década, algunas veces hubo ejercicios electorales, aunque los plazos y tiempos en que se debían celebrar las elecciones fueron varias veces alterados.

En estos primeros años del México independiente, los problemas giraban en torno a la forma en que se debería de gobernar, lo que promovió divisiones y luchas; incluso entre los mismos federalistas había quienes se pronunciaban por un federalismo moderado, mientras que otros lo hacían por un confederalismo y algunos más por un federalismo radical. Esta situación ocasionó desacuerdos y desavenencias entre la clase gobernante, lo que llevó a que el país viviera una crisis política, económica y social.

⁸⁴ César Navarro Gallegos, *op. cit.*, p. 88.

⁸⁵ Hemeroteca Pública del Estado de Durango (HPED), *Registro Oficial, Periódico del Gobierno del Departamento de Durango*, núm. 97, domingo 15 de enero de 1843, p. 1.

⁸⁶ AHAD, Previsiones para la recuperación de armas y municiones, 19 de noviembre de 1834. Varios, serie 4, caja 47, legajo 191.



En aquel entonces, los federalistas de Durango reconocieron únicamente a Santiago Baca Ortiz, Francisco Elorriaga y Basilio Mendarozqueta como legítimos gobernadores. Aunque Juan Antonio Pescador ejerció el cargo durante casi dos años, su llegada al gobierno no se debió a elecciones populares, sino a estrategias legales respaldadas por el Consejo de Gobierno. Por otro lado, Ignacio Gutiérrez accedió al puesto mediante un golpe militar y luego transfirió el gobierno a José Pedro Escalante, quien ocupó el cargo sólo durante dos meses.

Las principales acciones de los gobiernos federalistas eran dirigidas a la organización y al fortalecimiento de las milicias cívicas, mientras que Juan Antonio Pescador emprendió medidas para mantenerlas a raya y disminuir su campo de acción, las señalaba de ser utilizadas por los yorkinos. Situación similar ocurrió durante los meses que duró la asonada de 1834, Gutiérrez y Escalante eliminaron el impuesto destinado al funcionamiento de la milicia cívica del estado e intentaron desarmarla.

Durante esta época, los gobernadores no lograron terminar su periodo establecido por la *constitución*. Sus gobiernos fueron breves; la mayoría de las veces los acontecimientos nacionales, los levantamientos y los planes impactaron en la sucesión de gobernadores, ya que las posturas de éstos frente a los eventos a nivel nacional determinaban si se mantenían en el cargo o no.

FUENTES CONSULTADAS

Bibliográficas

ARROYO GARCÍA, Israel, *La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857*, México, Instituto Mora/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2011.

GALLEGOS CABALLERO, J. Ignacio, *Compendio de historia de Durango, 1821-1910*, México, JUS, 1955.

GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel y David Cienfuegos Salgado, *Digesto Constitucional Mexicano, Durango*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación/TEPJF, 2012.

HERNÁNDEZ, Carlos, *Durango gráfico*, Durango, Talleres de J. S. Rocha, 1903.

NAVARRO GALLEGOS, César, "Durango en la primera república federal", en Graziella Altamirano C., et al., *Durango, una historia compartida 1821-1920*, Tomo

- I, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1997, pp. 52-102.
- NAVARRO GALLEGOS, César y Pavel Navarro Valdez, *Los Congresos Federalistas de Durango 1824-1835*, Durango, Instituto Mora, 2006.
- OBRA COLECTIVA, *Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones*, vol. I, México, UNAM-IIIJ, 2019.
- PACHECO ROJAS, José de la Cruz, *Breve historia de Durango*, México, El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas, 2001.
- , “Primer ensayo republicano en Durango, 1823-1827”, *Transición*, Durango, núm. 32, 2005, pp. 104-129.
- , “El régimen central-federalista en Durango, 1835-1846”, Josefina Zoraida Vázquez y Vera (coord.), *Los centralismos mexicanos, 1835-1846*, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos/El Colegio de Michoacán, 2021, pp. 347-367.
- RAMÍREZ, José Fernando, *Noticias históricas y estadísticas de Durango (1849-1850)*, México, Impr. de Ignacio Cumplido, 1851.
- RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel Ángel, *Durango: historia de las instituciones jurídicas*, México, UNAM, 2010.
- SERRANO, José Antonio, “Rumbo al fracaso del primer federalismo, 1829-1835”, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *Gran historia de México Ilustrada*, tomo V, México, Planeta /Conaculta/INAH, 2002, pp. 161-180.
- SHERIDAN PRIETO, Cecilia, “La construcción de una nueva nación 1823-1828”, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *Gran historia de México Ilustrada*, tomo V, México, Planeta /Conaculta/INAH, 2002, pp. 147-160.
- SORDO CEDEÑO, Reynaldo, “La Primera República Centralista 1835-1841”, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *Gran historia de México Ilustrada*, tomo V, México, Planeta /Conaculta/INAH, 2002, pp. 181-199.
- ULLOA, Berta y Joel Hernández Santiago, *Planes en la nación mexicana, Libro uno: 1808-1830*, México, Senado de la República, 1987.
- , *Planes en la nación mexicana. Libro dos: 1831-1834*, México, Senado de la República, 1987.
- VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, “Los primeros tropiezos”, en Centros de Estudios Históricos, *Historia general de México, versión 2000*, México, El Colegio de México, 2008, pp. 525-577.
- , *Dos décadas de desilusiones: en busca de una fórmula adecuada de gobierno 1832-1854*, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009.



Gaceta del Supremo Gobierno de Durango, 1832-1835

Registro Oficial, Periódico del Gobierno del Departamento de Durango de 1843

Electrónicas

Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, 1824, disponible en: <www.orden-juridico.gob.mx/Constitucion/1824A.pdf>. (Consultado: 30/04/2022).

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf>. (Consultado: 30/04/2022).

ARRIETA SILVA, Enrique, “La Constitución de Durango de 1825: matices y peculiaridades”, en Francisco José de Andrea Sánchez (coord.), *Derecho constitucional estatal Estudios históricos, legislativos y teórico-prácticos de los estados de la República mexicana*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, pp. 121-138, disponible en: <<https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/id/8>>. (Consultado: 20/06/2024).

NIETO CAMACHO, Ana Lilia, “La imposible negación: la relación entre poderes en Durango en los años de la posguerra”, *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, Ciudad de México, núm. 38, jul/dic, 2009, disponible en: <<https://repositorio.unam.mx/contenidos/30734>>. (Consultado: 20/06/2024).

SORDO CEDEÑO, Reynaldo, “El congreso en la Primera República Centralista”, [tesis doctoral], El Colegio de México, 1989, disponible en: <<https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10004851>>. (Consultado: 20/06/2024).

Archivos

AGN, Archivo General de la Nación

AHAD, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango

AHMR-UJED, Archivo Histórico del Museo Regional-Universidad Juárez del Estado de Durango

HPED, Hemeroteca Pública del Estado de Durango



El pacto fiscal y la administración del erario federal en el estado de Durango, 1824-1835

Edgar Bueno Hurtado

Universidad Juárez del Estado de Durango/
Instituto de Investigaciones Históricas



Aunque el Plan de Casa Mata no atacaba al emperador, finalmente una de las consecuencias que trajo consigo la expedición del documento fue la abdicación de Agustín de Iturbide. Su salida dejó en la nación un vacío de poder que el restablecido congreso, electo desde 1822, intentó llenar con la creación de un Supremo Poder Ejecutivo; esto sin tomar en cuenta a las provincias, por lo cual autoridades de algunas regiones se negaban a obedecer. A su vez, la resistencia al congreso hizo temer una fragmentación nacional.¹

Esta situación permite entender porque para 1824 un gobierno republicano y federal parecía ser la mejor opción para la recién independizada nación; finalmente la idea se vio materializada en la Constitución de 1824. En ella se determinó que la federación estaría conformada por los estados y territorios y que “para su ejercicio” el “poder de la federación” se dividiría en legislativo, ejecutivo y judicial.² El sistema de gobierno estableció, pues, que tanto la esfera federal como las estatales contarían con los tres poderes, de tal manera que el poder federal y los estatales coexistirían. Así, por ejemplo, los estados estaban facultados para emitir su propia legislación, siempre y cuando no se contrapusiera al máximo ordenamiento de la nación.

El presente estudio pretende abonar a la comprensión del primer federalismo mexicano (1824-1835). Esto, analizado a través del arreglo fiscal de la joven nación y visto mediante el estudio del caso del estado de Durango. Específicamente, se tratará de ver cómo la federación mantuvo presencia en el estado, en lo que se refiere a la administración de los impuestos y rentas. El estado de Durango se erigió como tal desde 1824, además en la entidad prontamente se establecieron las instancias a cargo de la recaudación y administración, tanto en el ámbito estatal como en el federal. Por

¹ Josefina Zoraida Vázquez y José Antonio Serrano, *Práctica y fracaso de primer federalismo mexicano 1824-1835*, pp. 16-17.

² Tal y como se establecía en el artículo 6 de la *Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos* de 1824 [Recurso en línea].

todo esto, el estado de Durango permite observar con detalle la estrecha relación entre ambas esferas durante el periodo referido.

Este trabajo se divide en tres apartados. En el primero se explica qué fue bajo qué términos se estableció el reparto de rentas entre la federación y los estados. En ese mismo espacio se explica también cómo se organizó la administración de rentas del estado de Durango, ya que, como se verá, ambas esferas estuvieron estrechamente relacionados al punto de que no es posible analizarlas como compartimentos estancos. En el siguiente apartado, se describe el funcionamiento y conformación de las comisarías, es decir, las instancias a cargo de la recaudación y administración de los impuestos y rentas en los estados. Por último, se analiza la Comisaría de Durango y su funcionamiento.

EL REPARTO DE RENTAS Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO

Una parte esencial de todo Estado son sus finanzas, por ello el arreglo del nuevo gobierno debía también abarcar el aspecto fiscal. Acorde al republicanismo federal se diseñó un sistema fiscal dividido en dos soberanías, la federal y la estatal. Específicamente fue en el decreto del 4 de agosto de 1824 donde expresamente se estipularon los impuestos y rentas que pertenecerían a la federación, para esta quedaron reservados los derechos de importación y exportación, el derecho de internación en los puertos, la renta del tabaco (fase agrícola), pólvora, alcabala del tabaco en los “países de cosecha”, la renta de correos, lotería, las salinas y los impuestos y rentas de los territorios federales.³ Respecto a los estados sólo se determinó que las rentas que no habían quedado a cargo de la federación podrían ser administradas para sustentar a los erarios en las entidades. Dicho de otra manera, no hubo una definición expresa que determinara cuales serían las rentas e impuestos en los estados. Así, los alcances y limitaciones de la fiscalidad estatal sólo fueron determinados de una manera tácita, lo cual creó una zona de indefinición que acabó generando graves conflictos entre los diversos niveles de soberanía fiscal.⁴

³ Decreto del 4 de agosto de 1824 clasificación de rentas generales y particulares en Manuel Dublán y José María Lozano, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia*, vol. 2, p. 710.

⁴ Ernest Sánchez, *Las alcabalas mexicanas (1821-1857)*, p. 85.

Para que la soberanía territorial y económica de los estados no derivara en una desintegración nacional, los legisladores federalistas idearon el pago del “contingente”,⁵ una cantidad proporcional al ingreso de las entidades que estas debían entregar a la federación. Esta medida consolidó el pacto fiscal federal, pues los estados recibieron una soberanía fiscal a cambio de pagar a la federación una cantidad determinada. El contingente fue un elemento muy presente en la negociación política entre los estados y la federación, ya que cada entidad federativa tuvo distintas dificultades para dar cumplimiento a los pagos establecidos.

De manera implícita, la repartición de rentas generó en los estados la coexistencia de la soberanía fiscal federal con la estatal. Es decir, dentro de los territorios estatales existieron algunos impuestos y rentas a cargo de la federación y otros a cargo de los estados. Así, por una parte, las entidades, ejerciendo sus funciones legislativas, estaban facultados para diseñar su Hacienda Pública Estatal. De manera general, las entidades, para hacer frente a sus gastos, se reservaron los reales novenos, los derechos sobre la producción minera y su circulación, los derechos de las casas de moneda, los derechos sobre el pulque, el mezcal y el aguardiente, la capitación, las ventas del tabaco labrado y las alcabalas.⁶ Por otro lado, la repartición también implicaba que la autoridad nacional contara con la prerrogativa de intervenir en las entidades para reclamar los gravámenes que a esta le correspondía ejercer según el pacto fiscal acordado con los estados. Para esto se crearon las comisarías, que se encargarían no sólo de recaudar, sino también de administrar los caudales pertenecientes a la federación en los estados.

En el caso particular del estado de Durango toda esta normativa se vio aplicada en la Dirección General de Rentas, la instancia a cargo del erario estatal y en la comisaría de Durango, a cargo de lo referente al erario federal en el estado. Debido a la estrecha relación de ambas esferas, antes de explicar la presencia de la federación en el estado, lo que será tratado en los siguientes apartados, es necesario explicar brevemente cómo se conformó la Hacienda Pública en el estado de Durango.

En enero de 1824 se expidió el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, en esta se ordenó la creación del estado Interno del Norte, que se conforma-

⁵ Jorge Castañeda, “El contingente fiscal en la nueva nación mexicana, 1824-1861”, p. 136.

⁶ Sánchez, *Las alcabalas mexicanas*, p. 85.



ría por Durango, Chihuahua y Nuevo México, la capital se ubicaría en la ciudad de Chihuahua. La articulación político territorial del nuevo estado, decretada por el gobierno nacional, fue objeto de desencuentros entre los principales ayuntamientos de la región: Durango y Chihuahua. La resolución de este conflicto derivó finalmente en la separación de las entidades y por ende con la creación del estado de Durango en mayo de 1824.

Fue a partir de la inauguración del estado de Durango cuando la entidad como tal pudo ejercer facultades legislativas, pues así lo permitía el régimen federal. El constituyente de Durango, establecido en junio de 1824, y los cuatro congresos que le sucedieron marcaron la pauta de la organización institucional del estado durante el periodo federalista. El marco jurídico de la Hacienda pública fue diseñado por este órgano legislativo. El congreso de Durango se conformó de manera bicameral, es decir por una cámara de diputados y una de senadores. Cualquier ley o decreto de la materia que fuera debía ser discutido y aprobado por ambas cámaras, pero sólo los diputados podían formular iniciativas en materia hacendaria.⁷

Además de expedir y derogar leyes y decretos, el congreso tenía también facultades específicas en materia hacendaria: fijar anualmente los gastos públicos, determinar las contribuciones, arreglar el ingreso y el egreso del estado, como también su manejo, y aprobar las cuentas de todos los caudales públicos del estado.⁸ Las mencionadas atribuciones muestran la relevancia que tuvo el congreso en el devenir de la Hacienda estatal, pues no sólo se encargó de diseñar el marco jurídico sino que también cumplía con la tarea de organizar y dar seguimiento a todo lo relativo a los ingresos y egresos.

Bajo la limitante del pacto fiscal de 1824, el congreso constituyente estableció un plan de Hacienda en 1824. En este se estipuló de manera general cómo se organizaría la hacienda estatal y desde el 26 de octubre del año mencionado se nombró a la planta a cargo de la administración de rentas del estado.⁹ Fue hasta el 24 de octubre de 1825 cuando las gene-

⁷ Art. 138, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en César Navarro y Pavel Navarro, *Los Congresos Federalistas de Durango, 1824-1835: Colección de leyes y decretos del Congreso Constituyente al Cuarto Congreso Constitucional del Estado de Durango*, p. 138.

⁸ Capítulo II de las facultades del congreso, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en *ibid.*, pp. 134-135.

⁹ Decreto XIV, nombramiento de empleados en la administración y tesorería general del estado, 26 de octubre de 1824, en *ibid.*, p. 113.

ralidades establecidas en 1824 quedaron asentadas con más detalle en el reglamento para el manejo y administración del ramo de Hacienda.¹⁰ El plan de Hacienda describió lo que los legisladores de Durango querían lograr con la Hacienda estatal, según este el sistema de rentas se debía caracterizar por “la reunión de todas en una sola administración, sin las separaciones de jefes y oficinas que en la actualidad se hallan establecidas, proporciona que las rentas giren bajo un mismo impulso, como dirigidas por una sola mano; y este sistema que no ofrece inconvenientes en su ejecución, por los reducidos límites del estado, presenta las ventajas de disminuir gastos y evitar dilapidaciones difíciles de calcular”.¹¹ Es decir que una “sola oficina bien planteada” era suficiente para “llenar el desempeño de la administración estatal”.¹² Este principio también se vio reflejado en el reglamento de Hacienda.

A la “oficina” encargada de administrar las rentas del estado se le denominó administración general de rentas. A la cabeza de esta se encontraría un administrador general, el cual era propuesto por el gobernador y ratificado por el congreso; el gobernador podía también destituirlo bajo causa justificada. El administrador general fue quien asumió el gobierno económico y directivo de todas las rentas. Este funcionario era auxiliado por un tesorero general que estaba al mando de la tesorería general y era al mismo tiempo el “sustituto natural” del administrador, ya que podría remplazarlo en caso de enfermedad, ausencia u ocupación sin necesidad de habilitación.¹³ El administrador debía supervisar a todos sus empleados y también tenía la facultad para suspenderlos en caso de que incurrieran en irregularidades, esto con la autorización del ejecutivo.

En la figura 1 se muestra a los funcionarios que quedaron a cargo de la administración de las rentas en el estado. Además del administrador y el tesorero general, la planta de Hacienda se conformaría por un oficial primero, un oficial segundo, un oficial tercero, un portero escribiente, un fiel de almacenes y tercena, un guarda mayor y cuatro guardias de garita.¹⁴ A

¹⁰ Reglamento para el manejo y administración del ramo de Hacienda del estado, 24 de octubre de 1825 en *ibid.*, p. 162.

¹¹ Decreto XIV, nombramiento de empleados en la administración y tesorería general del estado, 26 de octubre de 1824, en *ibid.*, p. 114.

¹² *Idem.*

¹³ Art. 36, reglamento para el manejo y administración del ramo de Hacienda del estado, 24 de octubre de 1825 en *ibid.*, p. 166.

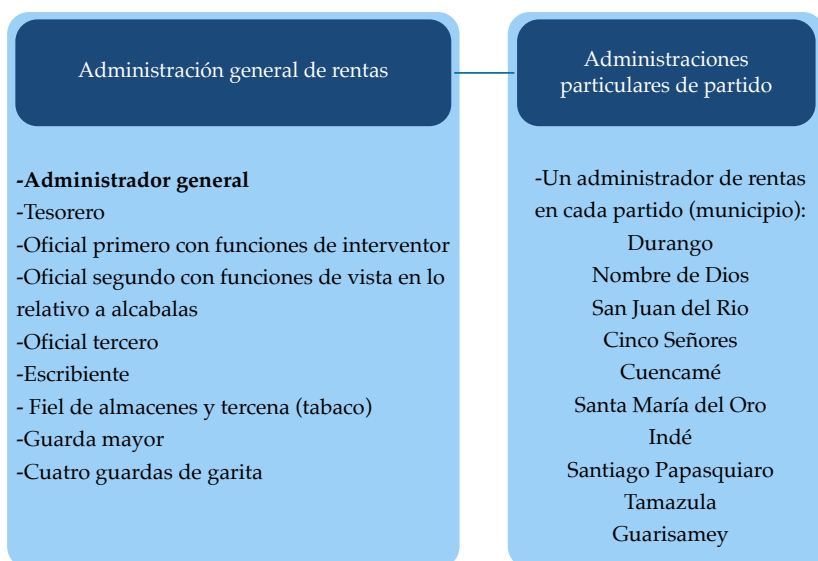
¹⁴ Decreto XIV, nombramiento de empleados en la administración y tesorería general del estado, 26 de octubre de 1824, en *ibid.*, p. 115.



estos funcionarios se irían agregando paulatinamente los administradores particulares en los partidos, también llamados municipios en la legislación. La administración tenía la denominación de “general” por estar a cargo de todas las rentas y en todo el estado,¹⁵ es decir que también quedó a cargo administrar los impuestos y rentas en los municipios.

FIGURA 1.

Funcionarios a cargo de la administración
general de rentas del estado de Durango



Fuente: Elaboración propia a partir del decreto XIV, nombramiento de empleados de la administración y tesorería general del estado, 26 de octubre de 1824, en Navarro, *Los Congresos Federalistas de Durango, 1824-1835: Colección de leyes y decretos del Congreso Constituyente al Cuarto Congreso Constitucional del Estado de Durango*, p. 115 y reglamento para el manejo y administración del ramo de Hacienda del estado, 24 de octubre de 1825 en *ibid.*, pp. 162-168.

¹⁵ Art. 17, reglamento para el manejo y administración del ramo de Hacienda del estado, 24 de octubre de 1825 en *ibid.*, p. 163.

Para que la administración general, ubicada en la ciudad de Durango, pudiera tener presencia en los partidos del estado se colocaría en cada uno de estos a un administrador que estaría al frente de una oficina foránea de Hacienda,¹⁶ la cual quedaría subordinada a la administración general, como se ve en el mapa 1. Para que el sistema de rentas pudiera estar centralizado en una administración general de rentas era necesario que los fondos municipales fueran administrados desde la oficina ubicada en la ciudad de Durango. Por tal motivo, desde poco antes de publicada la constitución del estado se expidió un decreto “para que los ayuntamientos cesen en la administración de sus fondos municipales y queden a cargo de la administración general”.¹⁷ En este se normó que la recaudación de los fondos municipales estaría a cargo de la administración general y foráneas “en los mismos términos que se hace de las rentas del estado, sujetándose a al plan de derechos municipales establecidos, o que en adelante se estableciere”.

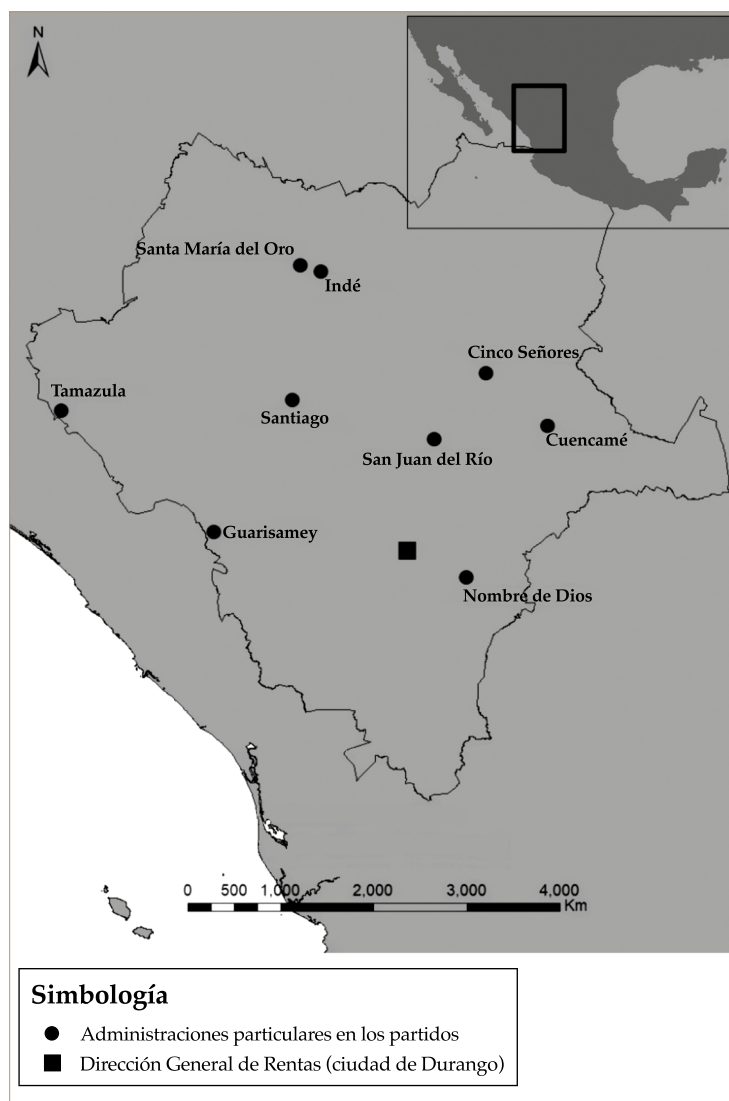
¹⁶ El artículo cuarto de la Constitución señaló que el estado se conformaría de diez partidos: Durango, Nombre de Dios, San Juan del Río, Villa de Cinco Señores, Cuencamé, Santa María del Oro, Indé, Santiago Papasquiaro, Tamazula y Guarisamey. La organización territorial de los municipios del estado trajo dificultades para poder establecer una administración foránea en cada partido. Por ejemplo, en el territorio abarcado por el municipio de Tamazula jamás había existido una receptoría de alcabalas, de ahí el problema para colocar una administración de la Hacienda Pública. Este tipo de situaciones provocó que las administraciones de los partidos se fueran agregando de forma paulatina. En 1825 se mandaron a establecer las de los municipios de Nombre de Dios, San Juan del Río, Villa de Cinco Señores, Santa María del Oro, Santiago Papasquiaro y Guarisamey. Fue hasta 1833 cuando existió un administrador particular en cada uno de los mencionados partidos. Actas de sesiones consejo de gobierno, en AHED, fondo reservado, 1830.

¹⁷ Decreto para que los ayuntamientos cesen en la administración de sus fondos municipales y queden a cargo de la administración general, 13 de agosto de 1825, en Navarro, *Colección de leyes*, 2006, p. 124.



MAPA 1.

Administración General de rentas del estado de Durango 1825-1835



Fuente: Elaboración cartográfica propia con base en Decreto para que los ayuntamientos cesen en la administración de sus fondos municipales y queden a cargo de la administración general, 13 de agosto de 1825, en Navarro, *Los Congresos Federalistas de Durango, 1824-1835: Colección de leyes y decretos del Congreso Constituyente al Cuarto Congreso Constitucional del Estado de Durango*, p. 124.

Las reglas para la administración de los impuestos y rentas de la federación en los estados, en las cuales se regulaba por primera vez las atribuciones de los comisarios, quedaron plasmadas en un decreto de septiembre de 1824.¹⁸ Según estas reglas, los comisarios serían los jefes superiores de los ramos de Hacienda correspondientes a la federación en el estado a su cargo. Sus principales obligaciones fueron cobrar y distribuir los productos de las rentas federales y el contingente de los estados. Al comisario también se le otorgaron facultades relativas al suministro de las tropas. Según esta regulación, el funcionario de la federación debía pasar revista a las tropas, suministrarles sueldos e insumos, proporcionarles alojamiento, pasar revista y vigilar los almacenes militares y las fábricas de armas. El decreto de septiembre hacía notar que el manejo de los egresos federales estaba ligado al ramo de guerra. Con estas atribuciones, se comprende porque se había estipulado que los comisarios generales lo serían de los ramos de Hacienda, crédito público y guerra.¹⁹

En noviembre de 1824, el Congreso de la Unión estableció que “el secretario de estado y del despacho de hacienda dirigirá por sí mismo todas las rentas pertenecientes a la federación”. A consecuencia de esta determinación, todo lo relacionado a las rentas federales quedó centralizado en la figura del secretario de Hacienda.²⁰ Con esto, el Ministerio de Hacienda, máxima autoridad hacendaria de la república, quedó a cargo de la oficina de rezagos, la administración de correos, la supervisión de la Casa de Moneda de México, de la Comisaría General de Guerra y Marina y de las comisarías en los estados.

Para que, al interior de las entidades, las comisarías pudieran cumplir con sus funciones se contempló, además de establecer una comisaría general en cada estado y territorio, formar dentro de las entidades una

¹⁸ Decreto del 21 de septiembre de 1824, Reglas para la administración de la hacienda pública de la federación en los estados, en Manuel Dublán y José María Lozano, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia*, 1876, vol. 2, p. 716.

¹⁹ Luis Jáuregui, “Una nueva perspectiva sobre la fiscalidad de la primera república federal mexicana: el caso de la comisaría de Nuevo León, 1824-1835”, *Historia Mexicana*, p. 517.

²⁰ Luis Jáuregui, “La primera organización de la Hacienda pública federal en México”, pp. 234-235.



red de subcomisaría, las cuales quedarían subordinadas a su respectiva comisaría general. Cabe aclarar que no se crearía el puesto de subcomisario, sino que los encargados de esta tarea serían los administradores subalternos de correos,²¹ es decir además de que los administradores de correos continuaran con la labor que venían realizando se les agregaba la tarea de cumplir con las obligaciones de subcomisario. Las subcomisaría quedarían distribuidas dentro del territorio de cada estado y territorio, el número de estas sería variable en cada entidad y deberían cumplir las mismas tareas que la comisaría general.

Las comisaría se inauguraron en 1824 y fueron suprimidas en 1837.²² Durante ese periodo hubo cambios administrativos importantes. La circunstancia por la que atravesaba el erario en la nación provocó que se intentaran reducir los gastos de administración. En octubre de 1833, se emitió la reforma de las comisaría generales;²³ en esta se argumentó que las comisaría estaban dotadas con mayor número de empleados del que necesitaban para el desempeño de sus funciones, que los fondos que recaudaban apenas alcanzaban para el pago de estos funcionarios y que sus atribuciones habían quedado casi reducidas al ramo militar.

Si algo dejaba claro la legislación de finales de 1833 era que buscaba disminuir el gasto y no modificaciones de fondo. No es para sorprender que los legisladores hayan sustentado los cambios administrativos en las dificultades derivadas de los apuros financieros, pues, como es bien conocido, las finanzas federales no pasaron por buen momento durante buena parte del siglo XIX. Además, por supuesto, era mucho más complejo organizar una Hacienda federal que las estatales.

Si bien era cierto que los problemas financieros fueron el argumento para la reforma de las comisaría, estrechamente ligado a ellos estaba también el complejo escenario político nacional, específicamente la crisis del propio sistema federal. La salida de Valentín Gómez Farías del ejecutivo federal en abril de 1834 allanó el camino para quienes cuestionaban la república federal. En ese contexto, las voces a favor de derogar la constitución federal fueron escuchadas cada vez más seriamente. Hasta el 23

²¹ Luis Jáuregui, "Los comisarios generales como fuente para el estudio de la Hacienda Pública del México independiente", *América Latina en la Historia Económica*, p. 26.

²² *Ibid.*, p. 30.

²³ Reforma de las comisaría generales, 26 de octubre de 1833, en Manuel Dublán y José María Lozano, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia*, 1876, vol. 2, p. 566.

de octubre de 1835 el congreso que se había asumido como constituyente aprobó suspender la vigencia de la Constitución de 1824.²⁴ Con esto oficialmente se clausuraban las soberanías estatales y se inauguraban los gobiernos departamentales que estarían sujetos al ejecutivo supremo de la nación. Pero desde el 3 de octubre del mismo año ya se había decretado disolver las legislaturas de los estados y establecer las juntas departamentales. Desde ese entonces las soberanías estatales habían ya quedado clausuradas, por lo que el pacto fiscal federal de 1824 también quedó sin efectos. Además de lo relativo a los poderes legislativos estatales, en el decreto del 3 de octubre se incluyó el reglamento de la administración de rentas en los estados.²⁵ Las nuevas reglas tenían por objetivo encaminar a las Haciendas regionales hacia una administración centralista. Sin la limitante del pacto fiscal, los estados, llamados poco después departamentos, debían rendir cuentas al Supremo Gobierno, desde ese entonces este indicaría la manera en que se organizarían los erarios regionales. Esta organización es conocida como la república centralista.

Como puede notarse desde finales de 1835 las administraciones federales en los estados ya no operaban dentro del mismo marco institucional en el que fueron creados, sino dentro de nuevos parámetros proyectados a nivel nacional que pretendían una organización controlada desde el ejecutivo nacional y por el mismo ministro de Hacienda de manera vertical y supervisada para evitar errores en las cuentas y en la información recopilada.²⁶ Por esa razón, los últimos años de la comisaría no serán analizados en el presente estudio.

LA COMISARÍA DE DURANGO

En 1824, la instrucción de comisarios ordenó que se establecieran las comisarías en todos los estados y territorios de la república, con excepción de Tlaxcala que dependería de la comisaría de Puebla y la de Colima que

²⁴ Bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente, 23 de octubre de 1835, disponible en: <<https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2019/02/Bases-constitucionales-expedidas-por-el-congreso-constituyente-1835.pdf>>. (Consultado: 01/06/2022.)

²⁵ Ley sobre gobernadores de los estados, jueces, de tribunales y empleados de ellos, cesación de sus legislaturas y establecimiento juntas departamentales 3 de octubre de 1835 en Dublán y Lozano, *Legislación mexicana*, 1876, vol. 3, pp. 75-79.

²⁶ Javier Torres, *Centralismo y reorganización. La Hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842*, p. 79.



dependería de la comisaría general de Michoacán.²⁷ Las comisarías comenzaron a ejercer sus funciones a inicios de octubre de 1824²⁸ o al menos eso determinó la legislación. Para ese entonces ya se había decretado el estado de Durango, por lo que se instaló la correspondiente comisaría general en la entidad. Desde ese entonces, los administradores subalternos de correos hicieron también la función de subcomisarios. Así, hasta 1833, la Comisaría general se ubicó en la ciudad de Durango y a su mando quedaron las subcomisarias de Nombre de Dios, Guarisamey, Gavilanes, San Dimas, el Oro, Papasquiario, Refugio, San Juan del Río, Mapimí, Cuencamé, Nazas y San Miguel.²⁹ De tal manera que al interior de los estados existió una red de subcomisarias y el cargo de subcomisario fue asumido por los administradores de correos. Con estas administraciones distribuidas dentro del estado se formaba una cadena de mando en la cual la subcomisaría debía rendir cuentas a la comisaría, a su vez la comisaría debía hacer lo propio con el Ministerio de Hacienda. De todo esto surge una importante cuestión: ¿por qué los administradores de correos asumieron la función de subcomisarios y que implicaba esta situación? La respuesta a esta pregunta es pertinente para entender de mejor manera la administración de rentas federales al interior del estado y la relación entre la esfera fiscal federal con la estatal.

Durante la mayor parte de la existencia del virreinato de la Nueva España el correo fue administrado por particulares. Hasta mediados del siglo XVIII, en el marco del reformismo borbónico, la corona terminó con los arrendamientos y creó la Real Renta de Correos.³⁰ El interés de la monarquía por controlar el correo trajo consecuencias para el septentrión novohispano. Hasta la época en la que se inauguró la Comandancia de Provincias Internas, en la década de 1770, el correo semanal sólo llegaba hasta Durango.³¹ El primer comandante de Provincias Internas, Teodoro

²⁷ Reforma de las comisarías generales, 26 de octubre de 1833, en Manuel Dublán y José María Lozano, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia*, 1876, vol. 2, p. 566.

²⁸ Luis Jáuregui, "Los comisarios generales como fuente para el estudio de la Hacienda Pública del México independiente", *América Latina en la Historia Económica*, p. 29.

²⁹ Lista de los administradores subalternos que tiene esta administración general de correos de Durango, en AHED, 1824, casillero 12, exp. 67. Debido a la imposibilidad de localizar el lugar actual de algunas subcomisarias no se elaboró un mapa de toda esta red de administraciones.

³⁰ Al respecto véase Walter Bose, "Orígenes del correo terrestre en México, los correos mayores (1579-1765)", *Revista de Historia de América*, pp. 55-103.

³¹ *Ibid.* pp. 98-103.

de Croix, hizo notar a la autoridad virreinal la importancia de que se estableciera un correo mensual dentro de las provincias:

bien reconocidos en mi tránsito por las provincias de Tejas, Coahuila y Nueva Vizcaya, los notables prejuicios que infiere a su buen gobierno, a la pronta administración de justicia, al fomento del comercio y los ramos de Real Hacienda, la ninguna correspondencia que tienen entre sí, y examinando por mí mismo que las partes que me llegan por línea de presidios exponen algunas veces sin fruto la tropa que los conduce, que por lo regular se retardan los avisos inutilizando en mucha parte mis providencias...³²

Finalmente, en 1776 se emitió un bando que ordenó instaurar el correo mensual desde la Bahía del Espíritu Santo en Tejas hasta Arizpe en Sonora, con esto se inauguraron una serie de administraciones principales y subalternas para el gobierno y dirección del correo. Lo que destaca de toda esta situación es que el interés mostrado en su momento por la autoridad virreinal en la creación de un correo coincidía en gran medida con lo que la autoridad federal buscaba con la instauración de las comisarías. Como el mismo Teodoro de Croix lo mencionó, el establecimiento del correo era fundamental para que la Comandancia de Provincias Internas pudiera llevar un “buen gobierno” y sólo mediante una adecuada comunicación podrían gestionarse los ramos de Real Hacienda. Con ese antecedente, la autoridad federal no hizo más que sacar provecho de la estructura que desde tiempos virreinales se había construido. No en vano la Renta de Correos quedó reservada para federación.

En 1824 se estableció el sistema federal. Por un lado, se instituyó una inédita organización a cargo de la administración del erario estatal, que centralizó todos sus impuestos y rentas en una dirección general ubicada en la ciudad de Durango, la capital de la entidad. Por otra parte, se organizó la Hacienda federal. En noviembre de 1824 el Congreso de la Unión estableció “el secretario de estado y del despacho de hacienda dirigirá por sí mismo todas las rentas pertenecientes a la federación”. A consecuencia de esta determinación, todo lo relacionado a las rentas federales quedó centralizado en la figura del secretario de Hacienda.³³ La estructura centrali-

³² Fernando Sandoval, *El correo en las provincias internas*, p. 27.

³³ Luis Jáuregui, “La primera organización de la Hacienda pública federal en México”, p. 234.



zada tenía semejanzas con la administración virreinal de finales del siglo XVIII. Sin embargo, la nueva organización institucional (una nación que reconocía en su máximo ordenamiento la soberanía regional) impedía una simple transposición de la centralización pensada en la etapa virreinal. Por esa razón, los legisladores vieron en los gobiernos estatales un apoyo fundamental para el desempeño del gobierno federal en las entidades. En las reglas para la administración de la Hacienda Pública de la federación en los estados se estableció que “los gobernadores de los estados y las primeras autoridades políticas de los pueblos ejercerán inspección sobre las comisarías generales y subalternas [...] y a dar cuenta los prefectos y autoridades políticas de los pueblos, al gobierno del estado, y este al comisario general de la mala versación y notarias omisiones de los subalternos”.³⁴ Los gobernadores y demás autoridades políticas debían también auxiliar a los comisarios en cuestiones de índole militar. Incluso en caso de situaciones extraordinarias que no admitieran demora, los gobernadores en los estados podrían tomar la administración de la comisaría.

Era evidente que no se pretendía que los administradores de correos llevaran por sí solos la administración del erario federal al interior del estado. De ahí que el comisario requiriera de la colaboración de funcionarios en los partidos para poder llevar a cabo sus objetivos. En Durango era común la colaboración entre la autoridad federal y estatal. Por tomar algunos de muchos ejemplos puede citarse que en 1826 el comisario ordenó al administrador de rentas del estado en Guarisamey que reuniera toda la pólvora existente en el fielato de Gavilanes, la condujera inmediatamente bajo su custodia y entregara los comprobantes de gastos de transporte para el debido reintegro por parte de la autoridad federal.³⁵ Otro ejemplo ocurrió en 1831, cuando el comisario escribió al subcomisario de Papasquiario que ya había pasado mucho tiempo de que “debía haberse remitido ha esta comisaría el libro en que constan las partidas sentadas del derecho de consumo como también el producto de él”.³⁶ Como es sabido, el subcomisario no estaba a cargo del cobro de alcabalas, pues esta consistió en una renta estatal. En ese caso su obli-

³⁴ 21 de septiembre de 1824, Reglas para la administración de la hacienda pública de la federación en los estados, en Dublán y Lozano, vol. 1, pp. 715-717.

³⁵ Correspondencia con el administrador de rentas del estado en Guarisamey, en AHED, cajón 18, exp. 17, 1826, s/f.

³⁶ Correspondencia con las subcomisarías de los partidos de este estado en AHED, casillero 13, exp. 91, 1831, s/f.

gación únicamente era remitir a la comisaría lo que los funcionarios a cargo de la administración alcabalatoria le enviaran.

Los subcomisarios no necesariamente debían manejar caudales y la legislación así lo contemplaba.³⁷ No por eso su labor era irrelevante para la Hacienda federal. Como se vio en los ejemplos citados, las subcomisarías atendían las solicitudes de la comisaría general y fungían como representantes de esta autoridad al interior del estado, pues estos se encargaban de gestionar que los funcionarios de la Hacienda estatal cumplieran con las labores de apoyo a la comisaría que la legislación federal determinó.

Las comisarías fueron diseñadas para que la Hacienda federal mantuviera presencia en todo el territorio nacional. En ese sentido, no era una tarea fácil sostener una administración eficiente en las tan diversas regiones del país. Como se mencionó, el 26 de octubre de 1833 se emitió el bando que ordenó la reforma de las comisarías generales. Bajo el argumento de que “las circunstancias del erario demandan la reducción de gastos públicos” y que las comisarías estaban “dotadas con mucho mayor número de empleados del que necesita”³⁸ se ordenó reducir el número de comisarías. Dentro de esos cambios se contempló extinguir la Comisaría de Durango y en su lugar colocar una subcomisaría, dependiente de la Comisaría General de Zacatecas. En otras palabras, la comisaría de Zacatecas sería la responsable de toda la administración en el territorio de Durango.

Cabe remarcar que lo que se buscaba con la reforma de 1833 era una reducción del gasto. Desde la creación de las comisarías, se pensó en dejar a cargo de las subcomisarías a los administradores de correo con el fin de disminuir los costos y después de 1833 se buscó reducir aún más la administración y que fuera la comisaría de Zacatecas la que absorbiera funciones que antes correspondían al subcomisario de Durango.³⁹ En general se cuenta con muy poca información después de 1833 y hasta el fin de la

³⁷ Ley de arreglo de las comisarías, 21 de mayo de 1831, en Manuel Dublán y José María Lozano, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia*, 1876, vol. 2, p. 329.

³⁸ Reforma de las comisarías generales, 26 de octubre de 1833, en Manuel Dublán y José María Lozano, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia*, 1876, vol. 2, pp. 566-569.

³⁹ Como el título del presente trabajo lo indica, esta investigación trata solamente lo administrativo y no el desempeño del erario, si bien un análisis del balance entre ingresos y egresos ayudaría a entender de mejor manera el porqué de la reducción de las comisarías, lo que aquí se intenta destacar la estrecha y necesaria relación entre la Hacienda y federal y la estatal.



primera etapa federalista en 1835. Aunque las comisarías se extinguieron hasta 1837, la falta de fuentes para los últimos años del federalismo, así como los cambios ocurridos a raíz del establecimiento del centralismo dificultan la comprensión de las implicaciones del cambio en la organización federal en la región, además de que su análisis requiere de un pormenorizado estudio que rebasaría los objetivos del actual trabajo.

REFLEXIONES FINALES

Los subcomisarios no necesariamente debían manejar caudales y la legislación así lo contemplaba. Esto era una muestra de que su labor iba más allá de la sola recepción y entrega de recursos, una de estas funciones fue facilitar el necesario enlace entre el erario federal y el estatal.

José Antonio Serrano Ortega señala al contingente y a la Renta del Tabaco como el “gozne de la federación”, el autor justifica su afirmación en que estas rentas obligaban a interactuar al gobierno federal con los estatales y más aún describe al binomio contingente-tabaco como el medio más propicio y efectivo para entender y evaluar la relación fiscal entre estados y federación.⁴⁰ Efectivamente, estas obligaciones eran muy representativas del pacto fiscal y generaron constantes conflictos entre los gobiernos locales y el general. Sin embargo, la relación fiscal entre los dos niveles de gobierno no se reducía a la eficacia del contingente y la Renta del Tabaco, sino que el acatamiento del pacto federal era también notorio en la colaboración del gobierno estatal con el general al interior de los estados, en el funcionario de rentas que por orden del comisario acudía a lejanos fielatos para hacerse de la pólvora requerida por la federación o en el subcomisario que presionaba a los encargados del cobro de alcabalas para entregar las partidas correspondientes a la comisaría de Durango.

Un elevado porcentaje del producto de las rentas del estado de Durango tenía que ser transferido a las arcas federales a través del pago del contingente y el pago del tabaco a la federación. En este sentido, vale recalcar, el binomio contingente-tabaco es de suma importancia para observar la problemática hacendaria, pero, como se ha explicado, para que la Hacienda federal pudiera mantener presencia dentro de todo el territorio nacional, los legisladores apostaron por reestructurar y adecuar la centralización que había funcionado hacia las últimas décadas de vida del

⁴⁰ José Antonio Serrano, “Tabaco y contingente”, p. 136.

virreinato. Por ese motivo, el éxito o fracaso de esa centralización es también muy importante para entender la relación fiscal entre las esferas de gobierno y esto no puede ser visto exclusivamente mediante las grandes transferencias del estado a la federación, pues las interrupciones o disminuciones de estos pagos pudieron obedecer a diversas circunstancias y no necesariamente al debilitamiento de la federación en las regiones.

FUENTES CONSULTADAS

Bibliográficas

- Bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente, 23 de octubre de 1835, [Recurso en línea], disponible en: <<https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2019/02/Bases-constitucionales-expedidas-por-el-congreso-constituyente-1835.pdf>>. (Consultado: 01/06/2024).
- BOSE, Walter, "Orígenes del correo terrestre en México, los correos mayores (1579-1765)", *Revista de Historia de América*, No. 23, junio, 1947, pp. 55-103.
- CASTAÑEDA ZAVALA, Jorge, "El contingente fiscal en la nueva nación mexicana, 1824-1861", en Carlos Marichal y Daniela Marino (comps.), *De colonia a nación. Impuestos y política en México 1750-1860*, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos, 2001, pp. 135-188.
- Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824* [Recurso en línea], disponible en: <<https://museodelasconstituciones.unam.mx/wpcontent/uploads/2023/03/1824Constitucion-Federal.pdf>>. (Consultado: 15/09/2024).
- DUBLÁN, Manuel y María Lozano, José, *Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia*, México, Imprenta del comercio, 1876.
- JÁUREGUI, Luis, "La primera organización de la Hacienda pública federal en México", en José Antonio Serrano Ortega y Luis Jáuregui (eds.), *Hacienda y política. Las finanzas públicas y los grupos de poder en la primera república federal mexicana*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán, 1998, pp. 227-264.
- , "Los comisarios generales como fuente para el estudio de la Hacienda Pública del México independiente", *América Latina en la Historia Económica*, enero-diciembre, 2000, pp. 25-32.



- , “Una Nueva Perspectiva Sobre La Fiscalidad De La Primera República Federal Mexicana: El caso de la comisaría De Nuevo León, 1824-1835”, *Historia Mexicana*, México, octubre, 2018, no. 2, octubre, pp. 509–555.
- NAVARRO GALLEGOS, César y Navarro Valdez, Pavel Leonardo, *Los Congresos Federalistas de Durango, 1824-1835: Colección de leyes y decretos del Congreso Constituyente al Cuarto Congreso Constitucional del Estado de Durango*, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2007.
- SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest, *Las alcabalas mexicanas 1821-1857*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Historia económica), 2009.
- SANDOVAL, Fernando, *El correo en las provincias internas*, México, Archivo General de la Nación, 1948.
- SERRANO ORTEGA, José Antonio, “Tabaco y contingente, el gozne fiscal entre federación y estados, 1824-1835”, en José Antonio Serrano ortega y Josefina Zoraida Vázquez (coords.), *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 135-153.
- TORRES MEDINA, Javier, *Centralismo y reorganización. La Hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Historia económica), 2013.
- VÁZQUEZ, Josefina Zoraida y Serrano Ortega, José Antonio, (coords.) *Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835)*, México, El Colegio de México, 2012.

Archivo

AHED Archivo Histórico del Estado de Durango



Guadalupe Victoria, primer presidente de México ¿de la gloria al olvido?

Laura Suárez de la Torre

Instituto de Investigaciones José María Luis Mora



Es difícil referirse a un personaje tan conocido por nosotros, que fue el primer presidente constitucional de México y que fue muy elogiado en su momento, precisamente por haberse afiliado a la causa independentista, formado parte del Supremo Poder Ejecutivo junto con Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete; haberse desempeñado como el primer mandatario del régimen republicano y ser el único presidente que logró cubrir sus cuatro años al frente de los Estados Unidos Mexicanos.

El México que encabezó en esos primeros años de país independiente significó el inicio de una lucha política que se prolongaría durante muchas décadas, pues distintos grupos codiciarían el poder y pugnarían por definir el rumbo de la nueva nación. Su paso por la vida pública se enjuició desde distintas perspectivas, en tanto insurgente y como primer magistrado, militar y hombre público. Como mexicano no dejó de ser centro de atención al ser un político al que se le confirieron diversos encargos. Su nombramiento como presidente le otorgó las primeras planas, pero pasado su mandato, pareciera que los titulares dejaron de centrarse en su nombre para devenir en un personaje público denostado por muchos.

La prensa puede ser una fuente muy valiosa para historiar a los personajes públicos, pero, al mismo tiempo, debe ser sometida a escrutinio para conocer quiénes emitieron los juicios que, lógico, se corresponden con las posturas políticas de los redactores, encargados de un determinado periódico, y así, las páginas pueden servir para respaldar o confrontar a un personaje o a un proyecto. Además de que la información que proporcionan es fragmentada, acomodada e incluso superficial. Si bien permite visualizar la manera en que en distintos momentos fue valorado para bien o para mal en la opinión pública un personaje, es necesario tener en cuenta el contexto en el que se escribió acerca de él.

Al hacer una revisión de algunos periódicos de la ciudad de México en el periodo que abarca 1824-1843 constatamos que, a lo largo de los años, Guadalupe Victoria estuvo presente en las páginas de la prensa debido a

los diversos cargos que ocupó, a la memoria de sus acciones como insurgente y a las acciones militares que emprendió.

Con este artículo me propongo mostrar la presencia de Guadalupe Victoria en la prensa de la capital del país con el afán de constatar si su imagen se denostó o continuó con el brillo con el que lo acogieron los redactores en tanto presidente de la república. Serán los propios periódicos los que nos van a dar pistas de su actuación y los que nos permitirán mirarlo en sus distintas actividades para reconocerlo justo desde otros espacios e intereses y visualizar si realmente perdió la gloria con la que comenzó su andar en la vida política del México ya independiente.¹

Para la década de los años veinte, la primera del México independiente, los periódicos cobraron una gran importancia y los folletos cedieron espacio a los nuevos proyectos editoriales que a su alrededor agrupaban a los hombres públicos que se encargarían de proponer y respaldar los planes de organización política que deseaban para el nuevo país. De ahí el surgimiento de una prensa política militante-partidista que dejaba ver los intereses que le guiaban y a los personajes con los que se identificaba o, por el contrario, a quienes denostaba en sus páginas.

La actuación de Guadalupe Victoria refleja precisamente el tiempo de acomodo de los distintos grupos políticos que surgieron con la independencia. Desde antes de ser nombrado presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos su persona fue acogida con beneplácito, en tanto viejo insurgente amante de su patria y defensor de Veracruz ante los españoles.² Su nombramiento de primer magistrado obtuvo la mayoría

¹ Se rescataron de la prensa digital de la Hemeroteca Nacional de México las noticias que daban cuenta de la actuación de Guadalupe Victoria y se procedió a seleccionar aquellas notas que resultaran representativas para este ejercicio. Agradezco a Maritere González Leal su apoyo.

² Alusiones a su persona: “La Legación inglesa cuya llegada anunciamos ayer, se ha presentado y fue recibida por el Excmo. Sr. D. Guadalupe Victoria, con todo el aparato que se acostumbra en semejantes casos. Los comisionados mostraron a aquel jefe la mayor consideración, y en el magnífico banquete con que les obsequió, bridaron por la independencia y por la rendición del castillo”. *Águila Mexicana*, 16 de diciembre de 1823. “Si en lo común son los escritos un fiel retrato del carácter y sentimientos de sus autores, en los del Sr. Victoria son los rasgos vehementes de su alma en favor de nuestros semejantes: en ellos se ve al vivo aquella mente y espíritu ocupado exclusivamente en el objeto sublime que lo arrebató, que es el amor a su patria”. *El Americano Reconocido*, “Sres. Editores”, *Águila Mexicana*, 24 de mayo de 1824. El Congreso Constituyente del Estado de Veracruz reconoció las virtudes de Guadalupe Victoria por las acciones encabezadas en bien de México y, por lo mismo, decretó que el nombre del general

de votos de las legislaturas, lo que da cuenta de su ascendiente entre los nuevos estados de la república.³ Su gestión al frente del país, reveló la instauración de un nuevo gobierno en el que la Constitución Federal de 1824 regiría como instrumento de orden y unidad de la nueva república, en la que se estableció la división de poderes. El nuevo gobierno buscaba el reconocimiento de otros países y el ideal de llevar a México al progreso.

El mandato de Guadalupe Victoria representó el escenario perfecto para la instauración y el actuar de las logias masónicas, las cuales adquirieron una gran importancia gracias a la acción de los distintos grupos políticos (republicanos federalistas o centralistas) y a la inclinación de estos por uno u otro de los ritos masónicos: yorkino o escocés.

Representa asimismo el primer blanco de crítica en el México republicano, ya que personificó el primer ejercicio de un gobierno de esta índole del que se fincaron grandes esperanzas y, a la vez, del que surgieron confrontaciones frente a la manera de gobernar y en torno a las decisiones que se tomaron. No obstante, la trascendencia de su gobierno, podríamos decir, ha quedado de lado y es muy poco lo que se ha escrito sobre su presidencia y menos aún sobre su actuación en los años posteriores, hasta preguntarnos si pasó de la gloria al olvido, como titulé este ensayo.

Por principio, tenemos que comprender la importancia de su nombramiento como presidente y constatar que emprender el primer gobierno republicano representó todo un reto. Ser el primer magistrado de un proyecto nuevo, en un régimen que se estrenaba y sin antecedente de gobierno similar, significó necesariamente un proyecto complicado que no tenía antecedente y que correspondió, precisamente, a Guadalupe Victoria poner cara y cuerpo a esa encomienda que resultaba extraña; un experimento en el que no sólo estaba implicada su persona, sino los distintos grupos políticos que se perfilaron, poco a poco, en los nuevos estados en que se había dividido a la república y, por ende, los diversos intereses partidistas, estatales y regionales que se formaron y las posturas que asumieron en el nuevo país que aspiraba al progreso. Asimismo, pesaban sobre él los intereses que manifestaron las diferentes naciones europeas, especialmente

Guadalupe Victoria se grabaría en letras de oro en un cuadro que se colocaría en el recinto constitucional; el Ayuntamiento dispondría la elevación de una pirámide triangular en la Plaza de Armas, en cuyos ángulos se grabarán las virtudes patrióticas del general Victoria, a los valientes defensores de la plaza y la última la fecha en que se erigió el monumento. *Águila Mexicana*, 29 de mayo de 1824.

³ "Soberano Congreso", *Águila Mexicana*, 3 de octubre de 1824.



Inglaterra y Francia, pero también Estados Unidos en torno al nuevo país que se mostraba como botín espléndido para sacarle provecho, pues su riqueza natural, su posición geográfica y su población podrían rendir frutos tanto a los países que lo visualizaron como botín como a los habitantes de esas naciones que vieron posibilidades para hacer negocios. El mismo Victoria reconoció la difícil tarea que se encomendaba:

la nave del Estado ha de surcar un mar tempestuoso y difícil; que la vigilancia y las fuerzas del piloto no alcanzan a contener el ímpetu de los vientos; que existen averías en el casco; y el norte es desconocido. Peligros no faltan, complicadas son las circunstancias, y solo el poder del regulador de los destinos, la ciencia y previsión de los representantes del pueblo, conducirán esta nave al puerto de la felicidad.⁴

Tenía frente a sí un horizonte complicado, una inmensa responsabilidad y avizoraba un ambiente políticamente enrarecido, con una crisis económica, un país empobrecido por la guerra con necesidad urgente de reconstrucción; un México marcado por los intereses y ambiciones regionales que buscaban su propia conveniencia; mexicanos y extranjeros que tenían puesta la mirada en el poder del que pretendían conseguir beneficios políticos y económicos. Sin olvidar la presencia e injerencia de Joel R. Poinsett que se volvería la piedra en el zapato que afectaría el andar de Victoria, puesto que durante su mandato las logias masónicas dirigirían la vida política, avivarían el debate público y contribuirán a formar grupos antagónicos que obstaculizarían el desarrollo pacífico de la república. Una república que, además, requería de préstamos imperiosos y el reconocimiento del extranjero; que enfrentaría las ambiciones de muchos, mexicanos y extranjeros, que sumirían al país en una constante crisis política. Un tiempo en donde la prensa adquirió gran importancia con distintos periódicos que reflejaban los intereses de los grupos políticos. Cada una

⁴ Fue en ese mismo discurso en donde incorporó aquella frase que se volvió su rúbrica: *"La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida"*. Guadalupe Victoria, "Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Guadalupe Victoria, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el acto de prestar el juramento prevenido en el artículo 101 de la Constitución Federal, en el seno del Soberano Congreso General Constituyente", *Águila Mexicana*, 10 de octubre de 1824.

de las logias tenía su propio vocero. A través de la prensa se ventilaron los asuntos nacionales y las rivalidades políticas.⁵

Cuando llegó el momento republicano, todos los ojos se centraron en la actuación de Victoria, el otrora insurgente que encarnaba las aspiraciones de aquellos que creyeron en el sistema republicano, lo que no significaba que contaba con el apoyo de todos. Los grupos políticos se fueron fragmentando en distintas posturas y, como señalé, el fortalecimiento de las logias definió dos ritos con claridad: el de los yorkinos⁶ y el de los escoceses;⁷ Victoria quedó, a la postre, en el primero y se ganó, lógicamente, la enemistad del segundo. Gobernar en este ambiente resultó muy complejo. Victoria debió sortear mil situaciones de política interna que le ganarían

⁵ No obstante, es importante señalar que desde el gobierno de Iturbide se fueron definiendo grupos distintos que buscaban el poder y establecer sus intereses políticos. “Entre 1821 y 1828, en torno a la masonería interactuaron varios de los aspectos que conforman la cultura política: la soberanía, la legitimidad, la representación, las prácticas políticas. Además, después de 1826 las identidades políticas de los grupos en contienda por el poder se formularon a partir de sus pertenencias masónicas. Las discusiones públicas acerca de la masonería resultan entonces fundamentales para comprender la cultura política del periodo, ya que detrás de ellas se puede observar la exposición y puesta en juego de los principios que sostenían y trataban de difundir los actores políticos; el análisis y la definición de las nuevas reglas de participación política: las disertaciones sobre lo que debía ser la nación, los representantes, las instituciones, así como las relaciones y negociaciones de y con el poder”. María Eugenia Vázquez Semadeni, “Masonería, papeles públicos y cultura política en el primer México independiente, 1821-182”, *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, p. 36, disponible en: <<https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/17760/16940>>. (Consultado: 14/05/2024).

⁶ A este rito promovido por Joel R. Poinsett pertenecían, por ejemplo: José María Alpuche, Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe, Anastasio Bustamante, Manuel Reyes Veramendi, Vicente Guerrero y Pedro María Anaya; tenían al periódico *Águila Mexicana* como su vocero político y se identificaban con el federalismo. Los escoceses fueron definidos por los yorkinos como aristócratas, hombres ricos, prohispanos, monárquicos y centralistas. A esta rama pertenecían, por ejemplo, Lucas Alamán, Manuel Gómez Pedraza. *Ibid.*, pp. 52-55. El poder que tenían lo define uno de sus miembros, Lorenzo de Zavala: “Las elecciones, los proyectos de ley las resoluciones del gabinete, las coaliciones de los empleados, de todo se trataba en la Gran Logia en donde concurrían diputados, ministros, senadores, generales, eclesiásticos, gobernadores, comerciantes y toda clase de personas que tenían influencia”. Lorenzo de Zavala, *Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830*, t. I, p. 281.

⁷ Desde la mirada yorkina, los “escoceses aparecieron como los aristócratas, ‘los señores principales’, los hombres ricos del centro del país, en su mayoría españoles o proclives a ellos, y los yorkinos se presentaron como los patriotas americanos, hombres comunes que no pertenecían al grupo grande de la sociedad, sino que trataban de exterminar a la aristocracia”. María Eugenia Vázquez Semadeni, *op. cit.*, p. 54.



la admiración de unos y la oposición de otros. De política externa con la que cosechó ciertos logros y remarcó su postura antihispanista.

Durante su mandato, la prensa fue un reflejo constante de su actuación y la visión en los periódicos tomaría matices distintos. En sus páginas consignaron la mirada de los redactores quienes formaban parte de las distintas facciones políticas que se constituyeron de manera paulatina, y quienes abiertamente alabaron o reprocharon el actuar del mandatario. Y pasado su periodo presidencial, la prensa recordaría constantemente su gestión, no por los buenos logros, sino por su filiación yorkina, por la defensa a Vicente Guerrero, por la rebelión de Montaña en contra de las logias, por la expulsión de los españoles, por el motín de la Acordada, por el declive del ejército mexicano, por el poco interés por la educación, en fin, sería definido como un mal gobierno y en las páginas de algunos periódicos se reconocería a Anastasio Bustamante como el político que había puesto orden en el país.⁸

VICTORIA EN LA PRENSA, 1824-1843

La prensa de estos primeros años de vida independiente fue un importante actor político; una prensa militante e informativa que se desarrolló gracias a la libertad de imprenta, aunque con sus límites; que estaba en correspondencia con el periodo de cambios que generó la vida política del país y que respondía a los intereses de las dos principales facciones políticas que rivalizaron como sectas masónicas y se definieron abiertamente durante su mandato al fijar una postura frente al mandatario.⁹

⁸ Así se señalaba, por ejemplo: “Los hombres no son tan fatales, malvados, o poco sociables, sino porque los que los gobiernan, o descuidan su educación, o les impiden instruirse, o procuran dividirles y pervertirles como sucede a los miserables pueblos que gimen bajo el chasquido del azote de los déspotas reyes y como aconteció a esta república cuando estuvo bajo la férula insoportable de la maldita administración de los Victorias y Guerreros, cuya grosera educación nos ocasionó males que no es fácil se borren en muchos años”. O como cuando se señaló en torno a la ley de expulsión de españoles: “En consecuencia de esa fraudulenta conspiración se dictó una ley de expulsión para todos los españoles; pero como el objeto de los facciosos era sacar dinero desde el presidente Victoria hasta el último pillito, fue preciso que la ley tuviese excepciones, que pidieron los diputados facciosos para salvar de la expulsión a muchos españoles que les dieron grandes cantidades de onzas de oro, amén de regalos muy valiosos”. *El Gladiador*, 27 de septiembre de 1830 y 11 de mayo de 1830, respectivamente.

⁹ Leonard Durvin Parrish, *The Life of Nicolas Bravo, Mexican Patriot (1786-1854)*, citado en María Teresa Pavía Miller, *Nicolás Bravo: su vida, acciones y pensamiento político*, p. 152.

Esta prensa reflejó las inquietudes del momento y tuvo un gran peso político. Se convirtió en un poderoso vehículo de transmisión de la ideología de los grupos políticos, pero también fue el pulso del país con las noticias de la vida política y con la crítica o alabanza de quienes se encontraban al frente de los negocios públicos. Los periódicos respondían a los intereses de grupo, eran un mecanismo de propaganda y presión. Escrita por quienes definían los rumbos del país no perdían la oportunidad de criticar a sus oponentes y alabar a sus correligionarios con una visión subjetiva.

Como voceros de los diferentes grupos aparecieron desde la primera década del México independiente *El Águila Mexicana*, yorquina, y *El Sol*, de filiación escocesa,¹⁰ surgidos en la capital, donde se encontraban asentados los poderes del país. Alrededor de sus páginas se aglutinaban aquellos que coincidían en la visión de país que buscaban instaurar. A grandes rasgos, los primeros fueron partidarios de una república federal y los segundos favorecedores de una visión centralista.

En su debut como presidente las noticias que publicaba *El Sol*, por ejemplo, eran halagüeñas. Se hablaba de las intenciones de Victoria por el porvenir de México o se insertaban felicitaciones por su nombramiento o incluso acciones particulares de amistades como Antonio Velasco, quien adornó con “fausto y gusto” su casa para recibirlo,

hubo al medio día un convite, y a la noche se puso una hermosa contradanza que después de las más vistosas mudanzas concluyó con desenvolver un gran letrado que decía *viva el héroe Victoria*; éste se veía circunvalado de sus amigos, que no le tributaban como a los tiranos los incienso de la adulación SINO DE LA MÁS PURA AMISTAD Y AGRADECIMIENTO.

Sus acciones militares eran alabadas y se publicaban sus disposiciones, en tanto primer magistrado.¹¹ Asimismo, se hacía alusión a su actuación en la

¹⁰ Tras la independencia, “aunque algunos autores como Alamán y Bustamante consideraban que el periódico de Codorníu, *El Sol*, era el órgano de las logias escocesas, sus editores no lo presentaron con ese carácter ni hablaron en él de su pertenencia masónica”. María Eugenia Vázquez Semadeni, *op. cit.*, p. 41.

¹¹ *El Sol*, 17 y 18 de junio, 3 de agosto, 6 de septiembre, 22, 24 y 26 de noviembre, y 10 de diciembre.



guerra de independencia, junto con Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.¹² O se refería al beneplácito del obispo de Guadalajara por el nombramiento presidencial de Victoria.

El tipo de noticias en 1824 que relacionan a Victoria tienen distintos temas, matices e importancia. El *Águila Mexicana*, por ejemplo, refiere la delicada situación de Oaxaca y la intervención de Victoria; el servicio a la patria del insurgente en Veracruz; el triunfo como presidente; las loas del primer magistrado a los soldados por sus acciones en favor de la república.¹³ Un año más tarde, se publicaba el agradecimiento del papa León XII a la misiva que el presidente le había enviado, así como la felicitación de Victoria a quienes habían conseguido la rendición de San Juan de Ulúa.¹⁴ Prisciliano Sánchez se congratulaba de la rendición de Ulúa y expresaba con alegría: “Vivan para siempre en nuestra gratitud los nombres de VICTORIA, Barragán y Esteva”.¹⁵ Para el gobierno de Victoria este triunfo tenía una importancia política y psicológica, como señala Costeloe, pues de seguir en manos españolas representaba la negación a la independencia por parte de España.¹⁶

Las alabanzas al presidente eran constantes en ese 1825 e incluso se colocaban bustos con su efigie y se componían sonetos.¹⁷ Por su parte, en *El Sol* publicaba un escrito tomado de la *National Gazette* de Filadelfia hablando de la esperanza puesta en la presidencia de Victoria; y otra nota pequeña en que no dudaba de que México alcanzaría la grandeza con Victoria al frente; o se publicaba, por ejemplo, una octava que loaba sus acciones.¹⁸ De ahí que se pueda afirmar que para entonces los dos periódicos, los más importantes, ofrecían en sus páginas una buena imagen del otrora insurgente.

Conforme pasó el tiempo, la problemática nacional se complejizó y el panorama de noticias respecto de la presidencia se amplió. Ya no era única-

¹² *El Sol*, 10 de junio de 1824.

¹³ *Águila Mexicana*, 8 de julio, 20 y 25 de agosto, y 8 de septiembre de 1824.

¹⁴ “Carta de Nuestro Santísimo Padre el Sr. León XII, al Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos Mejicanos, ciudadano Guadalupe Victoria, dirigida con nota del eminentísimo cardenal secretario de Estado, al respectivo de esta República” y “Contestación de S. E. el Presidente”, *Águila Mexicana*, 17 de noviembre de 1825.

¹⁵ “Viva la Patria libre”, *Águila Mexicana*, 11 de diciembre de 1825. Las mayúsculas son del original.

¹⁶ Michael P. Costeloe, *La primera república federal de México (1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente*, p. 40.

¹⁷ “Día de gloria para los habitantes de Mérida, capital de estado libre de Yucatán” y “Comunicado”, *Águila Mexicana*, 24 y 25 de noviembre de 1825.

¹⁸ *El Sol*, 5 de abril, 20 de septiembre y 30 de noviembre de 1825.

mente las cuestiones nacionales sino la importancia de entablar relaciones con el exterior. En 1826, el periódico *Águila Mexicana* hacía alusión a la independencia de Colombia y los lazos para con México; en mayo el discurso del presidente en el Congreso en donde señalaba el interés de España por recuperar sus posesiones y en donde también hacía alusión a las relaciones que su gobierno había emprendido con otros países y los obstáculos que se le presentaban. Más adelante, se insertó una defensa al Victoria presidente como garante de unión y confianza y un comunicado de Zacatecas contra *El Sol*, en donde se defendía a Victoria y a su gabinete ya que conducían a la patria “por un camino glorioso que a nuestros enemigos no puede agradar”, al mismo tiempo, se mencionaba, por ejemplo, su participación en la Compañía Lancasteriana.¹⁹ Se puede decir que subsistía todavía una visión halagüeña de su gobierno, aunque se perciban quejas que demuestran que Victoria ya está en el ojo público y que la facción escocesa difería de las acciones del mandatario. Símbolo de ello son las reacciones en contra de las facultades extraordinarias o la defensa que se empieza a hacer a su persona como presidente,²⁰ sin dejar de mencionar que su pasado insurgente lo legitimaba y le redituaba continua admiración.²¹

Las relaciones con el exterior eran complejas, con Inglaterra, por ejemplo;²² en tanto que, con la Iglesia, la cuestión del Patronato parecía encontrarse por buen camino.²³ Los levantamientos con un plan político contrarios al gobierno comenzaron a surgir como la conspiración del padre Arenas (enero de 1827) y el levantamiento de Montaña. Estos fueron hechos que necesariamente complicaron el panorama nacional, a más de que la ventaja obtenida por los yorkinos en el Congreso de ese 1827, llevaría a tomar medidas extremas como la expulsión de los españoles²⁴ y del embajador

¹⁹ *Águila Mexicana*, 16 de enero, 25 y 26 de mayo, 1 de julio, 13 de agosto, y 8 de octubre de 1826.

²⁰ *Águila Mexicana*, 28 de agosto y 28 de septiembre de 1826; *El Sol*, 2 de mayo de 1826, 19 de enero, 28 de marzo, 4 de abril, y 28 de agosto de 1827.

²¹ *El Sol*, 23 de marzo, 1 de septiembre de 1827.

²² *El Amigo del Pueblo*, 12 de septiembre de 1827 La relación anglo-mexicana fue compleja a causa de los empréstitos que el gobierno mexicano solicitó. Pese a ello, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación se logró en 1827 y México fue visto como un potencial país para invertir.

²³ *El Defensor de la Religión*, 6 de noviembre de 1826.

²⁴ “Con la ley de suspensión de españoles de los cargos públicos, civiles y militares, la facción yorkina obtuvo una victoria relativa, pues consiguió afectar a los escoceses que se habían mostrado contrarios a este decreto, y también se aseguró el apoyo de sectores medios de la población, que con dicha ley encontraron la posibilidad



de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, acusado de intromisión en la política nacional. Todo ello planteó diferendos en torno a su presidencia, los yorkinos como garantes y los escoceses como oponentes. Las elecciones para la presidencia reflejarían el ambiente que existía en México en el último tramo de su mandato. Los asuntos que enfrentaba, internos y externos, hacían más difícil la presidencia y tensaban más la situación para el presidente y la prensa daría noticia de ello.²⁵

No obstante, los federalistas yorkinos, sus defensores, señalaban en el *Correo de la Federación Mexicana*:

que si hay ingratos se prostituyan al vil interés o a otras pasiones igualmente innobles, sobran pechos valientes, liberales e ilustrados que no sucumben jamás, y que no vacilan en sacrificar su existencia y bienestar por sostener las glorias de una patria idolatrada: la república debe en todos tiempos contar con los brazos de estos ilustres campeones, y no temer por su libertad que está ya afianzada de un modo irrevocable, interín exista un Guerrero, un Victoria, un Gómez Pedraza.²⁶

Esto iba en clara oposición a Nicolás Bravo.²⁷ El enfrentamiento en la prensa que era un poderoso actor político, no descansaba. En el *Correo de la Federación Mexicana* y su antagonista político, *El Sol*, se manifestaban sin ambages. Así, se escribía, por ejemplo, que “La facción escocesa no se cansa aun de hacer esfuerzos: hoy nos declara la guerra por medio de ese periódico”, y el *Correo* presto, salía a la defensa del “virtuoso e inmaculado presidente” que “vuelve a ser objeto de su mordacidad y maledicencia”, por parte de *El Sol*.²⁸

de acceder a cargos públicos que con anterioridad ocupaban los peninsulares”. Ana Ivalú Oropeza Alfaro, *El proyecto político de los yorkinos: la política popular en la campaña electoral de Vicente Guerrero*, p. 92.

²⁵ *El Sol*, 13 de agosto de 1827.

²⁶ *El Correo de la Federación Mexicana*, 30 de enero de 1828. Se publicó en 1828. Fue un “Diario de corte liberal que, en calidad de órgano del partido yorkino, apoyó la expulsión de los españoles y combatió a los grupos escoceses y centralistas”. Miguel Ángel Castro Medina y Guadalupe Curiel Defossé (coords.), *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855*, p. 93.

²⁷ *El Correo de la Federación Mexicana*, 7 de abril de 1828.

²⁸ *El Correo de la Federación Mexicana*, 15 de marzo de 1828.

De ahí que se perciba ya un personaje entre dos fuegos, entre el amparo yorkino y la agresión de los escoceses quienes no se identifican más con su gobierno y, menos aún, por el apoyo otorgado al candidato Vicente Guerrero quien adquirió un gran protagonismo en las elecciones de 1828 y ganó la simpatía de sectores como los artesanos a quienes prometió una política proteccionista.²⁹ El gobierno de Victoria perdió popularidad pues, a la postre, pesarían sobre él, el saqueo de El Parián y el motín de La Acordada de diciembre 1828.

Al finalizar su periodo presidencial, el país se hallaba inmerso en una situación hacendaria catastrófica; las relaciones con el Vaticano no iban por buen camino; “corrían los rumores de una expedición de reconquista por parte de España; se había dictado la segunda ley de expulsión de españoles” —que correspondería al nuevo presidente Vicente Guerrero, ejecutarla—. ³⁰

A los males que se le achacaban se sumaban nuevos como lo era el reclamo de las autoridades eclesiásticas como la que manifestó Pedro Espinosa en *El Defensor de la Religión* publicado en Guadalajara, y donde se quejaba del “cuadro lastimero que presenta la Iglesia” y la situación que se vivía con la entrada de las publicaciones extranjeras que se convertían en veneno para los mexicanos porque atacaban el dogma, la moral y a la institución religiosa y todo ello sucedía durante la administración de Victoria. ³¹

Más aún otros escritos “con ponzoña de alacranes”, como *El Toro*, hacían un balance de su presidencia, al presentar, mediante la metáfora de una fuente, su mandato:

he aquí nuestra república, decía yo, el año de 25. La columna del centro representa al gobierno que rodeado de cuatro ministros figurados en los cuatro hombres desnudos, estaban sosteniendo la independencia, ponía en movimiento a la industria y al comercio que producen las riquezas preciosas re-

²⁹ Ver Silvia Marina Arrom, “Protesta popular en la ciudad de México: el motín del Parián en 1828”, pp. 83-116.

³⁰ Lillian Briseño Senosiain, María Laura Solares Robles y Laura Suárez de la Torre, *Valentín Gómez Farías y su lucha por el federalismo*, p. 61.

³¹ *El Defensor de la Religión*, suplemento al número 105, 16 de enero de 1829. Este periódico se publicó de 1827 a 1830, con entregas bisemanales, y de 1832 a 1833, con entregas semanales, descripción disponible en: <<https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/verDescripcionDescarga/558ff92c7d1e325230861409.pdf>>. (Consultado: 03/10/2024).



presentadas en la agua hermosa y abundante; las arcas nacionales en la taza, recibían estas riquezas, y el gobierno las repartía, según las urgencias de la nación y con proporción a sus distintos ramos; los hombres estaban desnudos y la columna figuraba muchas canales para denotar que los ministros deben ser desinteresados [...] ¡Oh desgracia, exclamé! ¿A dónde están aquellos días? ¡Oh Victoria, cómo no mueres de vergüenza! ¡Oh Poinsett indigno, mira lo que nos has robado! Volví mi consideración a la fuente y en ella encontré el retrato de mi patria en el año presente: un pedazo de columna, cuatro medios hombres hasta el estómago, eso existe de esa fuente, y eso representa muy al vivo nuestro actual gobierno.³²

Su gobierno terminó con un balance negativo, pese a los esfuerzos de sus partidarios por defenderlo.

EL VICTORIA DE LOS AÑOS TREINTA

En los años posteriores a su gobierno dos periódicos fueron críticos a su mandato: *El Gladiador*³³ y *El Sol*.³⁴ En sus páginas lanzaron duras críticas al gobierno de Victoria, pese a que ya no tenía el poder, pero se ocuparon de recordar a los lectores aquellos momentos críticos de su gobierno para denostarlo.

Así, por ejemplo, *El Gladiador* que inició su circulación el 27 de marzo de 1830, lanzó una fuerte crítica a la política seguida por Victoria.³⁵ Lejos quedaba aquella visión que gloriaba a la figura del insurgente que incluso había sido comparado con Washington y Bolívar.³⁶ Ya no se hablaba del

³² *El Toro* (segunda época, Diálogos 1-14), 4 de julio de 1829. En 1829 tuvo entregas semanales, y bisemanal entre 1830 y 1832, descripción disponible en: <<https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/verDescripcionDescarga/558ff9407d1e325230861558.pdf>>. (Consultado: 03/10/2024).

³³ *El Gladiador*, “Periódico semi-oficial de contenido principalmente político, que en diversas ocasiones defendió la administración del general Anastasio Bustamante”, descripción disponible en: <<https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/verDescripcionDescarga/558ff9337d1e32523086146d.pdf>>. (Consultado: 03/10/2024).

³⁴ *El Sol*, 3ra. época, 1829-1832.

³⁵ Son muchas las menciones que hace a la persona de Victoria con un sentido negativo.

³⁶ *El Amigo del Pueblo. Periódico mexicano, literario, científico, de política y comercio*, 29 de agosto de 1827. Se publicó entre 1827 y 1828 con interrupciones. Señala que “se mantendrían distantes de la adulación y que la federación sería el principal objeto de sus tareas”.

héroe como se hizo en otro tiempo.³⁷ Se hacía referencia a su mandato no recordándolo como el primer presidente de la república, sino como el gobierno de un binomio, el de Victoria-Guerrero que, según su visión, resultó funesto para el país y los años que siguieron, serían complicados para gobernar con Vicente Guerrero al frente en disputa.

Detrás de las páginas de *El Gladiador* se encontraban militares que se decían patriotas “en busca del desengaño de los pueblos”, pero en realidad mostraban una postura favorable a la administración de Anastasio Bustamante y la mejor manera de hacerlo era infamar la figura de Victoria a quien acusaban, entre otras cosas, de ser manipulado por Poinsett. Así escribían:

Hable de Victoria, de ese héroe benemérito de la patria por haberla robado y destrozado: de ese valiente de la cueva: de ese general ignorante, incapaz de mandar cuatro soldados; de ese presidente traidor, compañero de los de la Acordada, y, por último, de ese usurpador de la hacienda de El Jobo que vive impunemente con indignación de los cielos y escándalo de los hombres.³⁸

Ese era el Victoria dibujado por los contrarios a los yorkinos en las páginas del diario.

Un Victoria que también aparecía en las páginas de *El Sol* con una imagen negativa en la que se afirmaba que él no gobernó, sino que se dejó seducir por las logias que en realidad guiaron al país. Visto así se concluía que todas las decisiones que se tomaron no eran en beneficio de México, sino de los intereses que existían detrás de ellas.³⁹ Este enfrentamiento parecía encarnado en Victoria que para unos representaba el ideal perseguido y para otros la traición del mismo.

La prensa escocesa en 1830 y 1831, lógicamente atizó duro en contra del otrora presidente. Las páginas del *El Sol*, *El Gladiador*, *El Diario del Gobierno* se desquitaban con el exprimer mandatario, sin considerar el mo-

³⁷ “Los hombres del Viejo Mundo al volver sus miradas a la patria de Washington, de Victoria, de Bolívar, de Rivadavia olvidarán su oro y sus inmensas riquezas, para fijarse en el triunfo de los principios sociales. El viajero descuidará de medir nuestras soberbias montañas”. *El Amigo del Pueblo*, 29 de agosto de 1827.

³⁸ *El Gladiador*, 29 de julio de 1830.

³⁹ Ver *El Sol*, 24 de marzo de 1830, 15 de junio de 1830, 16 de noviembre de 1830, y “Juicio imparcial sobre los acontecimientos de México en 1828 y 1829” que se publicó en distintos números del mes de noviembre de 1830.



mento que le tocó enfrentar, un primer experimento en el que salieron a relucir intereses de los grupos de poder, de los grupos que se afiliaron al rito de York o al escocés, pero también jugaron un papel decisivo las ambiciones de Estados Unidos con Poinsett al interior de la casa, la de los países extranjeros que buscaban ser los primeros en recibir privilegios del nuevo país, de la necesidad de recurrir a empréstitos para poder sobrevivir... Denostaron un gobierno sin considerar que eran parte de lo que ellos mismos criticaron.

Desde otra visión, *El Fénix de la Libertad*,⁴⁰ otorgó “legitimidad constitucional” al gobierno de Victoria en contraposición a la figura de Bustamante “que se apoderó del mando a bayonetazos proclamando el principio de insurrección y apoyando en él sus títulos al supremo mando”.⁴¹ Y no era extraño que así fuera, cada diario reunía a su alrededor a los partidarios de un proyecto y echaban mano de la pluma para, en este caso, apoyar al antiguo insurgente.

Sin embargo, la misma situación nacional le daría oportunidad para conciliar su imagen. Se apelaría a su experiencia para actuar frente a los problemas del país, al ser nombrado mediador en conflictos nacionales y con el extranjero. Gracias a esto, su imagen tomó otro perfil y se convirtió en un militar en constante actividad cuyas acciones se reflejaban en la prensa. Así se hablaba de su gestión para la pacificación ante el levantamiento de Antonio López de Santa Anna con quien se reuniría en Puente Nacional para acordar la paz.⁴² O refería ya en 1833, frente al levantamiento de “Religión y Fueros”, la proclama que lanzó en Tacubaya o el ascendiente que tenía entre el pueblo al señalar que “el general Victoria participa el entusiasmo que reina en las tropas de su mando y en los pueblos que le ofrecen servicios de todas clases”,⁴³ o incluso como defensor de la ley, la libertad y

⁴⁰ Se publicó entre 1831 y 1834 con interrupciones. Vicente Rocafuerte fue su fundador y colaboraron con él, Andrés Quintana Roo, Mariano Riva Palacio, Manuel Crescencio Rejón y Juan Rodríguez Puebla. “El objetivo del periódico era hacer posible la libertad de imprenta y expresión y abogar por el triunfo de la república [...] contrario a los políticos conservadores como Mangino, Espinosa y Facio [...] fue el más fuerte opositor al gobierno de Anastasio Bustamante [...] sufrió numerosos atentados y represiones y en 1832 la pérdida de su libertad, alentada por Lucas Alamán”, descripción disponible en: <<https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/verDescripcionDescarga/558ff9327d1e325230861459.pdf>>. (Consultado: 03/10/2024).

⁴¹ *El Fénix de la Libertad*, 28 de enero de 1832.

⁴² *El Fénix de la Libertad*, 27 de junio de 1832.

⁴³ *La Antorcha. Periódico religioso, político y literario*, 5 de junio de 1833. Tuvo una vida efímera de abril a junio de 1833. “Atacó a los liberales y presentó como inmorales

la federación. En noviembre, se hablaba de su presencia en Oaxaca para enfrentar a Valentín Canalizo.⁴⁴ Sus acciones dieron lugar a reconocer su labor por la patria, como lo hizo el *Diario de la Revolución*, al recordar así a Victoria en los años de la guerra de independencia: “mientras todos sus compañeros se sometían al poderío español, este ilustre caudillo, repetimos, cubierto de gloriosas cicatrices luch[ó] siempre entre la vida y la muerte por la herida que nos dio libertad”.⁴⁵ Además, se consignaba su ausencia en el Senado al que había sido nombrado como representante de Veracruz, dada la encomienda al frente de las tropas para sofocar los levantamientos surgidos a causa de las reformas liberales promovidas en 1833.

En las páginas de los distintos diarios tenía cabida su nombre y pasado el gobierno de Bustamante se le visualiza nuevamente como senador, presidente de la Cámara, representando a Veracruz y a Durango; se le ve como al político con propuestas para el comercio o aprobando el millón de pesos para los herederos de Agustín de Iturbide, cuando se diesen las circunstancias y hubiese recursos, “en premio del sublime mérito que contrajo haciendo la independencia de su patria”,⁴⁶ o siendo el defensor de la Constitución o el partidario de la propuesta de “olvido absoluto de todos los delitos políticos cometidos desde el 27 de septiembre de 1821 hasta el 4 de enero del presente año”.⁴⁷

Pero no todo eran halagos al viejo insurgente. Algunos de sus enemigos no perdieron la oportunidad de reiterar el ataque al otrora presidente

los actos del Congreso”. Miguel Ángel Castro Medina y Guadalupe Curiel Defossé (coords.), *op. cit.*, p. 22.

⁴⁴ *El Demócrata*, 22 de noviembre de 1833. Tuvo una vida efímera de agosto a noviembre de 1833. Su lema era “Federación o muerte”. Partidario de las reformas liberales de Valentín Gómez Farías, *ibid.*, p. 123.

⁴⁵ *Diario de la Revolución*, 15 de octubre de 1833. Publicado en Guadalajara, su epígrafe era “Federación o muerte es del jalisciense la suerte”.

⁴⁶ *Diario del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos*, 29 de mayo de 1835. Publicación oficial.

⁴⁷ *La Lima de Vulcano*, 8 de marzo de 1835. Periódico que se publicó de 1833 a 1837 con interrupciones. El epígrafe de los primeros tres tomos decía: “Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la [sic] Acta Constitutiva que establecen la libertad y la independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los supremos poderes de la federación y de los estados”. Fue un periódico “animado por Luis Espino [y un] periódico político de corte conservador”, descripción disponible en: <<https://hndm.iib.unam.mx/consulta/publicacion/verDescripcionDescarga/558ff9357d1e32523086149c.pdf>>. (Consulta: 03/10/2024).



y volver a señalar los yerros en su gestión. Así, *El Mosquito Mexicano* escribía:

No solo a D. Guadalupe Victoria que por experiencia sabemos tiene don de acierto, le ocurrió poner a un Esteva de ministro de Hacienda en un tiempo que aún era bonancible y pacífico, para que empeñase la nación, dilapidase su erario y plagase de ladrones y de empleados la república, con el fin de hacer formidable su facción, sino que otros han seguido su ejemplo.⁴⁸

Cabe mencionar que los años del centralismo coinciden con pocas menciones en la prensa y su persona vuelve a estar ya no tanto por cuestiones políticas sino personales como cuando por ejemplo el Banco de Avío le hizo un préstamo para varias empresas agrícolas en su hacienda de El Jobo por 100 000 pesos. Y su prestigio como general se reconoció una vez más cuando surgió el conflicto con Francia y se le nombró comandante general de Veracruz.⁴⁹ Frente a sus soldados lanzó una patriótica proclama para alentar a las tropas en la defensa del país.⁵⁰ El gobierno buscó que la guerra con Francia no se alargara. Los diarios siguieron su actuación en las conferencias que entabló con Carlos Baudin, como lo nombraban, para lograr la paz. Volvía a tener gloria el general que nunca dejó de prestar servicio a su patria. Tocó a él izar la bandera en la fortaleza de Ulúa, de lo que dejó noticia *El Noticioso de Ambos Mundos* del 18 de mayo de 1839.

Lo que siguió fue un homenaje al antiguo alumno del Colegio de San Ildefonso⁵¹ y su nombre vinculado a la cuestión de Texas. Para terminar con la noticia de que “El Sr. General Victoria se ha enfermado de suma gravedad en las inmediaciones de Perote: su situación es tristísima bajo de

⁴⁸ *El Mosquito Mexicano*, 10 de mayo de 1836. Se publicó de 1834 a 1839, con interrupciones. Periódico “oposicionista de carácter satírico”. Miguel Ángel Castro Medina y Guadalupe Curiel Defossé (coords.), *op. cit.*, p. 272.

⁴⁹ *El Mosquito Mexicano*, 15 de noviembre de 1836. Para Victoria, que “consideraba a Veracruz como su territorio”, fue muy importante, dado que en tiempos de la insurgencia él se mantuvo allí y fue defensor de Ulúa frente a los españoles. Un terruño.

⁵⁰ *Noticioso de Ambos Mundos*, Nueva York, 30 de diciembre de 1838.

⁵¹ *El Siglo Diez y Nueve*, 15 de mayo de 1842. Se publicó entre 1841 y 1858. Fue “uno de los principales abanderados de las luchas liberales; durante su periodo inicial fue órgano del Partido Liberal Moderado”. Miguel Ángel Castro Medina y Guadalupe Curiel Defossé (coords.), *op. cit.*, p. 402.

muchos aspectos: los que recuerden el heroísmo de este antiguo sostenedor de la independencia, no podrán menos de interesarse por su suerte”.⁵²

Su muerte acaeció en marzo de 1843 y un mes más tarde el presidente provisional José María Tornel decretaba que su nombre se inscribiría en letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Su sepultura, en el Panteón de Santa Paula en donde se elevaría un monumento a su persona, junto con Vicente Guerrero, de cuya sombra no pudo desvincularse.⁵³

¿DE LA GLORIA AL OLVIDO?

A pesar de su larga trayectoria en la vida pública, en el ocaso de la etapa virreinal y de las primeras décadas del México independiente, lo que pervivió en la imagen y memoria de los mexicanos en torno a Guadalupe Victoria fue la visión de ser el insurgente escondido y valiente y el primer presidente de México. Piedra inicial en la construcción del Estado nacional, le tocó un momento fundacional muy complicado. Le correspondió encarar a los distintos grupos políticos que se perfilaron, poco a poco, y que fueron decisivos para el elogio o el desprestigio a su persona. El nuevo tiempo mexicano resultó muy complejo por las diferentes facciones políticas que surgieron y que querían imponer su proyecto de país.

Su imagen cobró una mirada diferenciada de acuerdo a los intereses de las facciones políticas que se radicalizaban día con día; marcaban una oposición a su actuar o una defensa partidista en las páginas de la prensa que se forjó en esas primeras décadas del México independiente y que, como vimos, se correspondía con intereses de grupo.

La modernidad política se identificaba con el liberalismo y la república,⁵⁴ y Victoria sería representante de ello. De ahí que, quienes no se identificaron con este proyecto de nación atacaron, no al insurgente que dio muestras de valor, sino al primer magistrado que fue manipulado por

⁵² *El Cosmopolita*, 26 de noviembre de 1842. Se publicó entre 1836 y 1843 con interrupciones. En sus páginas se analizaron cuestiones referentes al centralismo, al federalismo, a los departamentos y todo lo relacionado con la organización del Estado”, *ibid.*, p. 101.

⁵³ *El Cosmopolita*, 19 de abril de 1843, y *Diario del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos*, 20 de marzo de 1843.

⁵⁴ Véase Alfredo Ávila Rueda, *Para la libertad. Los republicanos en tiempos del Imperio, 1821-1823*.



la logia yorkina y sus intereses. Victoria se vio duramente juzgado por los escoceses, entre otras cuestiones, por su antihispanismo, por haber facilitado a Poinsett su injerencia en el país y por haber dejado llegar a Vicente Guerrero a la primera magistratura.

Su presencia en los periódicos revela el tiempo de construcción de un nuevo país y la organización del Estado; su actuación pública deja ver la complejidad del momento, México como país independiente y la ambición de las naciones extranjeras por el nuevo país; la prensa en tanto actor político, muestra cómo la rivalidad y los intereses de las facciones se manifestaron en relación a su persona y arrojaron distintas visiones en torno a su desempeño en los espacios en los que se desenvolvió. Su nombre estuvo presente en las páginas de la prensa en diverso grado, desde la etapa de la guerra insurgente y hasta su muerte.

Este ejercicio permitió constatar el estreno de una prensa militante de ese tiempo fundacional para México y reconocer el poder de los periódicos que encontraron en los actores políticos un rico material para manifestar sus filias y fobias políticas y que recurrieron a la pluma para alabar o denostar a los políticos del momento, tema central de la prensa de entonces.

FUENTES CONSULTADAS

Bibliográficas

ARROM, Silvia Marina, "Protesta popular en la ciudad de México: el motín del Parián en 1828", en Silvia Marina Arrom y Servando Ortoll (coords.), *Revueltas en las ciudades. Políticas populares en América Latina*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/El Colegio de Sonora/Miguel Ángel Porrúa, 2004, pp. 83-116.

ÁVILA RUEDA, Alfredo, *Para la libertad. Los republicanos en tiempos del Imperio, 1821-1823*, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México (Historia Moderna y Contemporánea, 41), 2005.

BRISEÑO SENOSIAIN, Lillian, María Laura Solares Robles y Laura Suárez de la Torre, *Guadalupe Victoria, primer presidente de México (1786-1843)*, México, Secretaría de Educación Pública/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1986.

—, *Valentín Gómez Farías y su lucha por el federalismo, 1822-1858*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Gobierno del Estado de Jalisco, 1991.

- CASTRO MEDINA, Miguel Ángel y Guadalupe Curiel Defossé (coords.), *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855*, México, Universidad Nacional Autónoma de México (Al siglo XIX. Ida y regreso), 2000.
- COSTELOE, Michael P., *La primera república federal de México (1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
- OROPEZA ALFARO, Ana Ivalú, *El proyecto político de los yorkinos: la política popular en la campaña electoral de Vicente Guerrero*, [tesis de licenciatura en Historia], México, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.
- PARRISH, Leonard Durvin, *The Life of Nicolas Bravo, Mexican Patriot (1786-1854)*, [tesis de doctorado en Filosofía], Austin, Universidad de Texas, 1951.
- PAVÍA MILLER, María Teresa, *Nicolás Bravo: su vida, acciones y pensamiento político*, [tesis de doctorado en Historia], México, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
- VÁZQUEZ SEMADENI, María Eugenia, "Masonería, papeles públicos y cultura política en el primer México independiente, 1821-1828", *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, México, núm. 38, julio-diciembre de 2009, pp. 35-83, disponible en: <<https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/17760/16940>>. (Consultado: 14/05/2024).
- ZAVALA, Lorenzo de, *Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830*, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica/Instituto Cultural Helénico, 1985.

Águila Mexicana.

La Antorcha

El Correo de la Federación Mexicana

El Cosmopolita

El Defensor de la Religión

El Demócrata

Diario del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

Diario de la Revolución

El Fénix de la Libertad

El Gladiador

La Lima de Vulcano



El Mosquito Mexicano
El Noticioso de Ambos Mundos
El Siglo Diez y Nueve
El Sol
El Toro



La invocación a dios en la constitución mexicana de 1824 y sus homólogas estatales

José Enciso Contreras

Poder Judicial del Estado de Zacatecas



INTRODUCCIÓN

El propósito principal de este texto es, con base en la fórmula diplomática constitucional conocida como “invocación”, contar con un medio más para la comprensión e interpretación de las distintas correlaciones de fuerzas políticas suscitadas en el seno de los congresos constituyentes mexicanos, así nacionales como estatales del primer federalismo, cuestión que al mismo tiempo acabaría definiendo el perfil constitucional de cada caso.

Debe apuntarse que son muy pocos los estudios sobre la historia constitucional mexicana que utilicen el instrumental conceptual que aporta la diplomática, por lo que su empleo nos permitirá acercarnos a estos documentos desde otra perspectiva.

INCUNABLE DIPLOMÁTICA CONSTITUCIONAL HISPANO AMERICANA

Muchas fórmulas diplomáticas españolas típicas del periodo colonial se mantuvieron durante el proceso de la lucha emancipatoria, pervivieron en la documentación legal mexicana durante un buen tramo del periodo independiente, y me atrevo a decir que algunas sobreviven actualmente, aunque, claro está, evolucionadas y adaptadas a las nuevas circunstancias. No podía ser de otro modo si ya en el aspecto jurídico se reconocía, hasta por parte de los grupos insurgentes más radicales y genuinos, la vigencia de la legislación del antiguo régimen en tanto la soberanía nacional no dictara otra nueva que la fuera sustituyendo.¹ Las solemnidades documentales de la diplomática del antiguo régimen alcanzaron a influenciar notablemente tanto la documentación constitucional peninsular como la americana.

¹ *Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana*, Art. 211. El decreto estableció que en tanto el congreso no dictara leyes que sustituyeran a las antiguas, permanecerían vigentes estas últimas con todo su vigor, con excepción de las derogadas expresamente en la constitución y las que en adelante se fueran derogando.

Como parte importante del protocolo de las cédulas y las reales provisiones, entre otros documentos, normalmente iniciándolos, se encuentra la invocación. Ésta “Tiene carácter religioso y devoto, cuyo origen suele ubicarse en aquellas palabras de San Pablo a los colosenses...”,² en el sentido de que toda actividad del hombre, incluyendo la escrituraria, debería estar dedicada a dios. Por otro lado, se atribuye a san Juan Crisóstomo la afirmación de que “por eso nosotros en las cartas ponemos por delante el nombre del Señor... pues si los nombres de los cónsules hacen que los decretos sean firmes, mucho más lo hará el nombre de Cristo”;³ así que con el tiempo la invocación, más que ser simple y devota dedicatoria llegó utilizarse, al antiguo estilo romano, como elemento de legitimidad del documento. Por su parte, la doctrina diplomática contemporánea suele asociar la invocación exclusivamente con documentos del antiguo régimen y no con las constituciones actuales. Se le define como la:

Expresión y cláusula documental no esencial, mediante la cual, de modo explícito o verbal o de forma implícita y simbólicamente se invoca y pide a Dios, a la divinidad..., con palabras claras o genéricas, la protección y buen resultado del acto, contrato, decisión, etc., que se escritura. Forma parte del protocolo inicial y su empleo se limitó a algunos documentos, si bien, por uso y costumbre, hasta los siglos XV-XVI puede calificarse de frecuente, tanto en documentos oficiales solemnes, como en cartas familiares, en testamentos y contratos privados.⁴

² Colosenses 3:17 y Efesios 1:10. “Todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”. En Efesios: “hacer que todo tenga a Cristo por cabeza”. En otro estudio analizamos conceptual e históricamente este y otros elementos diplomáticos y su influencia en las constituciones hispanas. Cfr., José Enciso Contreras, “La invocación a dios en las constituciones mexicanas del siglo XIX. Una perspectiva política”, en *Derechos del Pueblo Mexicano*, tomo III, pp. 395 y ss.

³ José Manuel Ruiz Asencio, *et al.*, *Paleografía y diplomática*, tomo II, pp. 177-178.

⁴ Ángel Riesco Terrero, *Vocabulario científico-técnico de paleografía, diplomática y ciencias afines*, p. 221.

En el protocolo de la constitución gaditana de 1812, es decir en su parte inicial, fue ejecutado en términos digamos que más ortodoxos dentro de la tradición diplomática hispana, o sea que la invocación contenida en él fue algo más verbosa, exuberante y trinitaria; el detalle distintivo es que en la intitulación, es decir, nombre y título de la autoridad que expide el documento, también se cita como fuente del texto a la propia constitución y a las Cortes; y es justo ahí donde la intitulación deja de ser estrictamente tradicional y adquiere definitivamente tintes de modernidad al introducir la semántica del principio de soberanía popular,⁵ o sea aquella que dimanaba del pueblo español. Encontramos aquí innovación mas no ruptura con la tradición diplomática en la misma medida en que el régimen no dejaba de ser monárquico, aunque ahora se presentaba en la novedosa versión de *monarquía constitucional*.⁶ La invocación aparece dentro del texto constitucional propiamente dicho, es de carácter verbal o explícito y, como ya lo decíamos, en contraste con los usos diplomáticos de esos tiempos —que ya tendían a simplificar el dato—, vigorosamente se vuelve como en este caso al uso de la letanía, a la ampulosidad y barroquismo devoto de los viejos pero que muy viejos tiempos del absolutismo bajomedieval:⁷ “En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”.⁸

⁵ La idea de soberanía popular que se utiliza en la Constitución de Cádiz, es decir, la que descansa en el pueblo, base de la nación, a quien correspondía el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

⁶ *Constitución Política de la Monarquía Española*. “Don Fernando Séptimo, por la Gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución Política de la Monarquía Española”.

⁷ Cfr., Jean René Aymes, *La guerra de España contra la revolución francesa (1792-1793)*, pp. 21 y ss.

⁸ *Constitución Política de la Monarquía...* Ciertamente que, en estricto sentido, la llamada Constitución de Bayona, de 1808, representa la primera versión constitucional escrita en español, aunque generalmente la doctrina no la considere así, ni fuese referida como tal coetáneamente en los congresos. En todo caso, también contiene una invocación lacónica, de tan sólo seis palabras, obviamente al estilo francés: “En el nombre de Dios Todopoderoso...”. Cfr., “Constitución de Bayona de 1808”.



La explicación de este retorno a la ortodoxia y verborragia religiosa puede entenderse igualmente como animosa respuesta ante la amenaza liberal que se veía en la Revolución Francesa, cernida sobre España ya desde el conflicto que sostuvieran ambas naciones entre 1792 y 1795, y cumplida con la invasión napoleónica.

ACERCA DEL PROTOCOLO CONSTITUCIONAL MEXICANO HASTA ANTES DE 1824

*Los Elementos constitucionales del
insurgente Ignacio López Rayón*

Debemos al abogado e insurgente Ignacio López Rayón, en noviembre del mismo año de la promulgación de la Pepa, uno de los primeros intentos en nuestro país, de reflexión política y filosófica acerca de los elementos sobre los cuales debía confeccionarse la constitución para la nueva nación independiente, plasmado en el documento llamado *Elementos de nuestra Constitución*. Agudo observador de la realidad militar y política, López Rayón sabía que el estado de cosas imperante en el ocaso del Imperio español no podía cambiarse súbitamente —como lo ha apuntado uno de sus biógrafos—⁹, ni el conjunto de hábitos y costumbres que habían mantenido a la nación postrada bajo el dominio extranjero. Esto se aplicaba a la política, la cultura y las creencias religiosas. De tal suerte que la independencia debería proponerse a las masas como un programa que les fuese atractivo, en la misma medida que se debilitaba la influencia de las ideas de los realistas. Esto explica el hecho de que los primeros tres puntos de los 38 *Elementos* que redactó fueran de carácter religioso, como queriendo decir que el movimiento insurgente no podría malquistarse con las creencias populares, fuesen las que fuesen, ni con los ministros que administraban esas creencias, claro está.¹⁰

Y aunque casi medio año después el propio López Rayón explicara a Morelos no estar ya tan convencido de sus *Elementos*, la influencia del

⁹ Carlos Herrejón, *La independencia según Ignacio Rayón*, p. 40.

¹⁰ Ignacio López Rayón, “Los elementos de nuestra Constitución, 7 de noviembre de 1812”, en Carlos Herrejón, *op. cit.*, pp. 237 y ss. “1. La religión católica será la única, sin tolerancia de otra. 2. Sus ministros por ahora continuarán dotados como hasta aquí. 3. El dogma será sostenido por el Tribunal de la Fe, cuyo reglamento, conforme al sano espíritu de la disciplina, pondrá distantes a sus individuos de la influencia en las autoridades constituidas y de los excesos del despotismo”.

documento sobre el pensamiento constitucional del Siervo de la Nación es indudable.¹¹ Llegado el momento de ir documentando constitucionalmente la propuesta independentista, la cuestión religiosa era para el movimiento libertador un asunto de primer orden por varias razones, principalmente de carácter político.

LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN

El primer documento constitucional de México, la Constitución de Apatzingán de 1814, muestra una ruptura con su antecedente peninsular de 1812 en la medida en que carece de invocación —coincidiendo en este detalle con la llamada Constitución de Cundinamarca, de 1811—, y contiene una intitulación bastante exigua: “El Supremo Congreso Mexicano”.¹² Esta frugalidad verbal sólo aparentemente anómala ya ha sido comentada en parte por algunos especialistas que se percatan de tal discontinuidad no sólo respecto de la muy incipiente tradición constitucional hispana, sino inclusive de la francesa y, al parecer, de la estadounidense. “Al leerlo se advierte de inmediato la ausencia de una referencia inicial a Dios, en cuyo nombre se sancionaban las Constituciones hispanas, y que no es infrecuente encontrar en las francesas y en los textos norteamericanos”.¹³ Sin embargo, hay que subrayar que no había en este caso, como dice el autor, otras “constituciones hispanas” en que se basaran los legisladores de Apatzingán, sólo los modelos de Cundinamarca y el doceañista, no todas ellas con invocación. Tampoco, como ya vimos en el caso colombiano, la omisión debe achacarse a un exabrupto laicista —que no lo tuvieron ninguno de los documentos insurgentes—, ni mucho menos, sino que creo bien puede explicarse por la bisoña técnica legislativa de nuestro primer congreso, o bien simplemente porque estaban inaugurando una tradición

¹¹ Felipe Tena Ramírez, *Leyes fundamentales de México, 1808-1987*, p. 23.

¹² *Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana*, Apatzingán, 22 de octubre de 1814. *Constitución de Cundinamarca. Su capital Santa Fe de Bogotá*, 1811.

¹³ Emilio Martínez Albesa, “Preámbulo y exposición de motivos del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (‘Constitución de Apatzingán’) de octubre de 1814”, en Serafín Ortiz Ortiz y José Luis Soberanes Fernández (coords.), *La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014)*, p. 115. Seguramente Martínez Albesa se refiere a algunas de las constituciones de los estados de la unión americana, la cual en su constitución federal también carece de invocación. *Cfr.*, Richard Morris, *Documentos fundamentales de la historia de los Estados Unidos de América*, pp. 79 y ss.



constitucional mexicana,¹⁴ pero, por otra parte, aquel congreso salió bueno también para inaugurar la intolerancia de cultos a nivel constitucional en México. El primero de los artículos, siguiendo precisamente la tónica y el orden de los *Elementos* de López Rayón, es enfático y no deja al respecto lugar a dudas: “La religión católica apostólica romana es la única que se debe profesar en el estado”.¹⁵

De cualquier forma, la hipótesis de la novatez parlamentaria y legislativa como causa de la omisión de la invocación parece confirmarse cuando nos enteramos del encarecido fervor mariano de los principales jefes insurgentes —curas en muchos casos—, no sólo de Hidalgo, sino de don José María Morelos, hacia la Virgen de Guadalupe, como emblema de la nueva nación independiente. En el documento intitulado *Sentimientos de la Nación*, de noviembre de 1813, el generalísimo proponía en su artículo 19o. que se instituyera en la nueva constitución el 12 de diciembre como día nacional, dedicado a “la Patrona de nuestra Libertad, María Santísima de Guadalupe...”.¹⁶ El propio Congreso de Chilpancingo en su sello estampó el anagrama guadalupano.¹⁷

Asimismo, el generalísimo dispuso que se dijieran misas de gracia en los pueblos “en señal de acatamiento y obediencia” al gobierno insurgente.¹⁸ Por su parte, don Ernesto de la Torre Villar se ahorra cualquier comentario sobre la ausencia de invocación en la Constitución de Apatzingán, y expone en cambio que el primer apartado del texto es sumamente religioso, entre otras razones porque los constituyentes querían deshacerse de las acusaciones de herejes que pendían sobre ellos por parte de los

¹⁴ Puede consultarse al respecto el alto nivel de intolerancia religiosa contenido en la documentación insurgente preconstitucional de Apatzingán, y en el propio cuerpo de la misma, en Rosa María Álvarez González, *et al.*, “Cádiz: intolerancia religiosa y Constitución: México, siglo XIX”, en Eduardo Alejandro López Sánchez, *et al.*, *La Constitución de Cádiz de 1812 y su impacto en el occidente novohispano*, pp. 40, 51 y ss.

¹⁵ *Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana...*, Art. 1o.

¹⁶ José María Morelos y Pavón, “Sentimientos de la nación”, Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813, en Berta Ulloa *et al.*, *Planes de la Nación Mexicana. Libro uno: 1808-1830*, pp. 121-122.

¹⁷ El maestro Luis Villoro dedica estupendos párrafos a esta cuestión. Luis Villoro, *El proceso ideológico de la Revolución de Independencia*, pp. 92 y ss.

¹⁸ “Morelos dispone que se digan misas de gracias en todas las localidades”, Chilpancingo, 27 de septiembre de 1813, en Francisco Ibarra Palafox, *El Congreso de Anáhuac y la Constitución de Apatzingán. Obra documental*, p. 175.

realistas,¹⁹ la cual para aquellos tiempos y coyuntura era una pesada y acuciante motivación política.

Los pactos y contratos de Francisco Severo Maldonado

Se sabe que ante los congresos nacionales celebrados entre 1822 y 1824, se presentaron numerosos proyectos de constitución, de los cuales se han publicado por lo menos 11.²⁰ Todos ellos deben ser tomados como antecedentes y fuentes importantes para conocer el incipiente pensamiento constitucional mexicano y, además, los usos diplomáticos en ellos empleados y que fueron generando tradiciones en la materia. Pero muy por aparte de los antecedentes documentales constitucionales de corte político, también es conveniente tomar en cuenta aquellos que, no obstante su naturaleza meramente doctrinal, pudieron haber influenciado el pensamiento y la acción de los constituyentes mexicanos, tanto en los congresos nacionales como estatales. La publicación de la *Constitución de Cádiz* al parecer puso en la mesa de los pensadores y docentes de instituciones educativas, la materia constitucional, lo que conllevaba la realización de ejercicios de reflexión teórica y política al respecto, en el seno de algunos claustros universitarios y colegios de educación superior. En ese sentido, sin que hayan sido producto de movimientos políticos o militares, destacan proyectos como los de Francisco Severo Maldonado,²¹ que justamente llegaría a ser profesor de Valentín Gómez Farías y Juan de Dios Cañedo,²²

¹⁹ Ernesto de la Torre Villar, *La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano*, pp. 55 y 56.

²⁰ David Pantoja Morán, *Bases del constitucionalismo mexicano. La Constitución de 1824 y la teoría constitucional*, p. 50.

²¹ Maldonado fue originario de Tepic, donde nació el 7 de noviembre de 1775. Estudió en el Seminario Conciliar y se doctoró en la Universidad de Guadalajara en 1802. Fue propietario de una buena biblioteca donde se encontraban obras de autores prohibidos en aquella época, como Voltaire, Diderot y Rousseau, “convirtiéndose, según algunos autores en propagandista del socialismo y, según los mismos, en el primero que difundió esa doctrina política en la Nueva España (...) pero incapaz de una actitud heroica o de sacrificio, o sinceramente arrepentido, ya que la inconstancia en política fue una de sus características, retornó a la ciudad en virtud de indulto solicitado y concedido”. Más tarde fue diputado a las Cortes de Cádiz e iturbidista. Murió abandonado en Guadalajara en marzo de 1832. José María Miquel i Vergés, *Diccionario de insurgentes*, p. 353.

²² Alfonso Noriega Cantú, *Las ideas políticas en las Declaraciones de Derechos en las Constituciones Políticas de México*, p. 16.



más tarde constituyentes en 1824. En su *Contrato de asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac*, publicado en 1823, Maldonado no incluye invocación alguna, y sí en cambio una extensa intitulación en que no aparece la palabra *Dios* sino muy diluida, al estilo francés, la referencia a un “Ser Supremo”.²³

LA CONSTITUCIÓN DE 1824

No fue sino hasta la constitución federalista de 1824²⁴ donde se advierte la recuperación parcial del protocolo instaurado en Cádiz. En ella se escribió finalmente una invocación verbal, seguida de una intitulación más o menos extensa. Veamos.

Debate sobre la invocación: “el ser supremo o cosa semejante...”

El congreso que aprobó la constitución federalista de 1824 se reunió a partir del 5 de noviembre de 1823, y se instaló solemnemente dos días después. Tras aprobar el *Acta constitutiva de la federación*, el debate sobre el proyecto de constitución comenzó el 1o. de abril de 1824, y fue finalmente aprobada el 3 de octubre de ese mismo año.

En el proyecto original de constitución presentado al congreso —al igual que su antecedente de Apatzingán— no se incluía la invocación. Según se explicaría más tarde por sus autores, se creyó innecesaria porque ese documento ya dedicaba un artículo expresamente a la religión de la nación mexicana.²⁵ En retrospectiva creemos que los principales redactores del proyecto —figuraban ahí personalidades como Miguel Ramos Arizpe, destacado diputado por Coahuila en las Cortes de Cádiz, y el joven radical Crescencio Rejón, ambos decididamente liberales—, seguramente influyeron en la omisión de la invocación porque, realmente, con la mínima voluntad política, la dedicación de un artículo exclusivamente a la tutela de la religión católica por parte del Estado, en nada reñía con que apareciera aquélla en el texto constitucional. Adicionalmente, distanciándose del

²³ Francisco Severo Maldonado, *Contrato de asociación para la República de los Estados Unidos de Anáhuac. Por un ciudadano del Estado de Xalisco*, p. 15.

²⁴ Emilio O. Rabasa, *Historia de las constituciones mexicanas*, p. 16.

²⁵ “Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación Mexicana”, en José Barragán Barragán, *Actas constitucionales mexicanas (1821-1824)*, tomo VIII, p. 28. Véase la intervención del diputado Becerra.

modelo gaditano, el proyecto original proponía una intitulación a todas luces influenciada léxicamente por la de los Estados Unidos de América, de 1789,²⁶ y que por cierto solemnemente fue leída de la siguiente manera: “Nos el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, usando del derecho que incontestablemente nos corresponde para afianzar nuestra independencia de España”.²⁷

Momentáneamente la cuestión no pareció causar efecto alguno entre los diputados, quienes decidieron ponerse a debatir acerca de asuntos que les parecieron más importantes a la sazón. Don Carlos María de Bustamante y Crescencio Rejón protagonizaron parte de aquella discusión, y fue el zacatecano don Santos Vélez quien al entrar propiamente en materia llamó la atención acerca de la intitulación con que se comenzaba el proyecto, proponiendo se le adicionara alguna frase que trajese a colación el tipo de gobierno representativo que se pretendía instaurar.²⁸ En este marco, el cura don José María de la Llave, diputado por Puebla, refiriéndose al modelo estadounidense de constitución —de donde se afirmaba haber tomado ejemplo para la redacción de la intitulación—, expuso interesante argumento a propósito de la doctrina constitucional que seguiría el congreso, con plena autonomía de otros modelos.²⁹

De esta intervención se desprende que en el imaginario del Constituyente pesaba fuertemente el ejemplo político y constitucional estadounidense, valga decir que tenían a la mano ejemplares de ella, y que fue leída parcialmente en voz alta en más de una ocasión, como lo hizo el diputado Servando Teresa de Mier, el 2 de abril de 1824.³⁰ Así que como lo apuntaba el diputado De la Llave, había que dejar asentado que no se trataba del único ejemplo constitucional en el mundo y que, ya apurados, la soberanía del Constituyente mexicano podría en todo momento optar por innovar donde y como le pareciera pertinente. No se opuso a que el

²⁶ *Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787*. La intitulación estadounidense comienza: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar...”. Richard Morris, *op. cit.*

²⁷ “Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación...”, p. 2.

²⁸ *Ibid.*, p. 16.

²⁹ *Ibid.*, p. 20. “Si se me alega que aquella expresión se ha puesto en la constitución de los Estados Unidos, digo lo primero, que como vuestra soberanía tiene toda la autoridad de constituir, de alterar, moderar y de separarse de todas las demás constituciones, puede poner como quisiere, y no precisamente como está puesto en aquella que se quiere suponer como original de todas y de que es imposible separarse”.

³⁰ *Ibid.*, p. 28.



congreso imitara, pero propuso otros modelos para no apartarse de cierta ortodoxia doctrinal hispana.³¹ Agregó que en el congreso cesante, es decir, el de 1822 disuelto por Agustín de Iturbide, la cuestión había ocupado por largas horas a los diputados, y que algunos de ellos habían sido de la opinión de poner “En el nombre de Dios &”, y que otros optaban por una versión trinitaria, más extensa: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, autor &”. Se pronunció además por modificar la intitulación del proyecto que se presentaba y por anteponer la invocación en términos más o menos gaditanos.³²

En otras palabras, estábamos oyendo al primer partidario mexicano de una invocación *in extenso*, verbosa y abundante, muy al estilo del propuesto en su tiempo en Cádiz por el duranguense Juan José Guereña, aunque no tan abigarrada. Este crédito le corresponde justamente a De la Llave y no a otros eclesiásticos, de quienes se ha dicho defendieron la invocación religiosa en aquella asamblea.³³ Desde otra perspectiva, también comenzaba en el nuevo congreso el proceso de confrontación entre las tradiciones doctrinales y políticas del vecino del norte, y la propiamente hispana, derivada de la constitución doceañista.

Previendo que el debate se inclinaba peligrosamente hacia la anquilosada idea del origen divino de la soberanía, Rejón defendió con énfasis la propuesta original de la Comisión de Constitución, de la que también formaba parte, atacando las ideas de varios diputados de reducir la soberanía popular a mera ficción; eso era lo importante para el joven campechano, de tal manera que finalizaba su alocución diciendo brevemente sobre la invocación: “En cuanto a la invocación de Dios que el señor Llave quiere que se ponga, no habrá inconveniente por mi parte, pero no por eso se debe impugnar el artículo”.³⁴

³¹ *Ibid.*, p. 21. “...y más conveniente sería empezar como la mayor parte de las constituciones modernas, por el origen primario y por la fuente de toda soberanía, es decir, por la invocación de Dios; así ha comenzado la constitución española: *En nombre de Dios Todopoderoso &*, así comienza la constitución de Colombia *En el nombre de Dios &*. En el acta constitutiva tenemos un artículo expreso que dice que la religión única de la federación es la católica, apostólica, romana, y esta religión viene notoriamente de Dios, pues que todo lo noble y perfecto descende del padre de las luces. Por consiguiente, debe comenzar toda constitución por su origen y principio, y así nuestra constitución en lugar de decir *Nos el pueblo*, debe decir: *En el nombre de Dios autor &*”.

³² *Ibid.*, p. 22.

³³ Martín Escobedo Delgado, José Miguel Gordo. *El drama de la transición política (1777-1832)*, p. 205.

³⁴ “Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación...”, pp. 22-23.

Enseguida el abogado Juan de Dios Cañedo, diputado por Jalisco —que también había sido diputado en las Cortes de Cádiz y educado en sus mocedades nada menos que por el doctor Francisco Severo Maldonado, en sus buenos tiempos— intervino en apoyo de Rejón y su idea liberal sobre la soberanía popular.³⁵ A la propuesta de De la Llave en torno a la precedencia de la invocación a la intitulación, se opuso con más argumentos que Rejón, y definitivamente la calificó de innecesaria. Colocándose así en la postura del doceañista Diego Muñoz Torrero —es decir la de la racionalidad y concisión de la invocación, separando la religión de la política—, porque adujo que la constitución colombiana, por ejemplo, mostraba esa invocación extensa porque en su contenido nada se hablaba de religión, y para que se supiera reconocían un autor de las sociedades, pero en el caso mexicano se había dedicado un artículo a la religión, estableciendo a la católica como oficial del Estado.³⁶

El diputado Teresa de Mier remarcó que no solamente existían los ejemplos estadounidense o gaditano, y aludió por primera vez —algo que sería inimaginable en el seno de las Cortes de Cádiz— al estilo constitucional francés por el que al parecer mostraba simpatía, en cuyo constituyente “estaba reunida la flor de la canela y lo más grande que tenía la Francia”, y que habían comenzado su texto, simplemente: “Nos los representantes del pueblo francés, en presencia del Ser Supremo &”.³⁷

Se advierte en esta propuesta que, irónicamente, fray Servando está restando peso a lo religioso en relación con lo político, que realmente era la substancia del texto constitucional. No descreído, pero sí muy crítico y nada afectado, el padre Mier provenía de un largo y tortuoso proceso de formación en cuanto a sus ideas liberales y, como pocos, sabía que las

³⁵ “... y no me cansaré de decir que el congreso no es el autor de las *constituciones*, sino el eco de la voluntad general del pueblo, y de ninguna manera puede decirse que los mandatarios harán su voluntad”. Véase “Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación...”, p. 25.

³⁶ *Idem*. “Con eso se dice todo: la Biblia entera está en ese artículo, y el repetirlo sería una especie de afectación... Seamos religiosos pero no seamos afectados, de lo que tenemos necesidad es de inculcar los principios políticos, porque los religiosos ya están consignados en los catecismos”.

³⁷ *Ibid.*, pp. 27-28. Recordó el debate sobre la invocación suscitado en Cádiz, congreso al cual acudió como espectador, en donde hubo pronunciamientos por la elegancia de la brevedad de aquélla. Finalmente, calificando a los Estados Unidos como “la piedra de amolar”, propuso que se escribiera, muy a la francesa y estadounidense: “Nos los representantes de la nación mexicana, en presencia de Dios Todopoderoso (o del Ser Supremo o cosa semejante) establecemos o acordamos &”.



cosas de dios eran bastante más ambiguas si se las metía en la política; eso, insistimos, lo sabía muy bien el neoleonés. Desde 1811 había escrito: “¡Que los hombres hayan siempre de pretender hacer a Dios cómplice de sus pasiones! Los españoles que tan indignamente abusaron de la religión para destronar y degollar 300 reyes en América hoy están abusando de ella para mantener a sus reyes en la tirana usurpación”.³⁸

En su turno José María Becerra, diputado por Veracruz, apoyó la propuesta de la comisión y “En cuanto al nombre de Dios ya se ha dicho que se omitió porque tenemos un artículo expreso de religión. Además que nuestras leyes se han de fundar precisamente en la razón sin ofensa de la religión”. Aunque terminó diciendo que, por su parte, se pusiera la invocación que se deseara.³⁹ Y así se hizo. La invocación en la Constitución de 1824 fue recuperada transcribiendo casi textualmente la barroca invocación verbal formulada en el texto gaditano, si bien eliminando el elemento trinitario: “En el nombre de Dios Todopoderoso, Autor y Supremo Legislador de la sociedad”.⁴⁰

Finalmente, puede decirse que la inclusión de la invocación en la constitución federalista se complementó política e ideológicamente con la consagración constitucional de la intolerancia de cultos, inaugurando otra tradición constitucional, nacional y provincial, que se prolongaría enraciándose por casi un siglo en la historia de México.

LA INVOCACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Por lo general, en las constituciones estatales no hay una invocación igual a otra, con excepción de los casos de Jalisco y Yucatán, aguerridos federalistas, por un lado, y Occidente y Tamaulipas, por el otro. Además, en lo que respecta a las dimensiones de estas cláusulas también encontramos diferencias. Hay desde las muy lacónicas, al estilo francés, de tan sólo seis palabras, hasta las ultrabarrocas de 36 vocablos.

³⁸ Servando Teresa de Mier, *Carta de un americano al español sobre su número XIX*, pp. 58-59.

³⁹ “Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación...”, p. 28.

⁴⁰ *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824*, en *Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. Régimen constitucional 1824*, tomo 1.

CUADRO 1.

Invocaciones en las constituciones federalistas de los estados de México (1825-1828), por número de palabras

<i>Estado</i>	<i>Fecha</i>	<i>Núm. de palabras</i>
Chiapas	9-II-1826	36
San Luis Potosí	30-VIII-1828	26
Zacatecas	18-I-1825	22
Oaxaca	10-I-1825	18
Querétaro	12-VIII-1825	18
Nuevo León	5-III-1825	17
Chihuahua	7-XII-1825	17
Michoacán	19-VII-1825	15
Durango	1-IX-1825	15
Puebla	7-XII-1825	14
Jalisco	18-XI-1824	13
Yucatán	6-IV-1825	13
Occidente	2-XI-1825	12
Tabasco	26-II-1825	12
Tamaulipas	7-IV-1825	12
Estado de México	26-II-1827	12



Coahuila y Texas	11-III-1827	12
Guanajuato	14-IV-1826	6
Veracruz	3-VI-1825	0

Fuentes: *Constitución del Estado de las Chiapas*, 9 de febrero de 1826. *Constitución del Estado de Chihuahua*, 7 de diciembre de 1825. *Constitución del Estado de Coahuila y Tejas*, 11 de marzo de 1827. *Constitución del Estado de Durango*, 1 de noviembre de 1825. *Constitución del Estado de Guanajuato*, 14 de abril de 1826. *Constitución del Estado de México*, 26 de febrero de 1827. *Constitución del Estado de Michoacán*, 19 de julio de 1825. *Constitución del Estado de Nuevo León*, 5 de marzo de 1825. *Constitución del Estado de Oajaca*, 10 de enero de 1825. *Constitución del Estado Libre de Puebla*, 7 de diciembre de 1825. *Constitución del Estado Libre de Querétaro*, 12 de agosto de 1825. *Constitución del Estado Libre de San Luis Potosí*, 30 de agosto de 1828. *Constitución del Estado Libre de Occidente*, 2 de noviembre de 1825. *Constitución del Estado Libre de Tabasco*, 26 de febrero de 1825. *Constitución del Estado Libre de las Tamaulipas*, 7 de abril de 1825. *Constitución Política del Estado Libre de Veracruz*, 3 de junio de 1825. *Constitución Política del Estado Libre de Xalisco*, 18 de noviembre de 1824. *Constitución Política del Estado Libre de Yucatán*, 6 de abril de 1825. *Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas*, 18 de enero de 1825, en *Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. Régimen constitucional 1824*, 3 tomos, México, Mariano Galván Rivera, 1828.

Tenemos que de las diecinueve constituciones estatales elaboradas entre 1824 y 1828, 95 por ciento de ellas tenían invocación. Solamente los legisladores del estado de Veracruz optaron por omitirla olímpicamente en su texto de junio de 1825, por lo que sería sumamente interesante conocer los debates, si los hubo, que dieron en el seno de aquella singular asamblea constituyente, de aromáticas exhalaciones yorquinas. Lo mismo podemos decir para el caso de los congresos que optaron por redactar las pesadas invocaciones prosopopéyicas, por ejemplo, los de Chiapas, San Luis Potosí y, cómo no, Zacatecas.

También decidimos clasificar las invocaciones de la primera hornada de constituciones federalistas mexicanas de acuerdo con otro criterio, la influencia de las invocaciones formuladas en las tres constituciones que llamaremos modélicas, en esa coyuntura, sin mencionar a la estadounidense que, por carecer de esta cláusula, solamente parece haber influenciado a la constitución veracruzana:

- a) Constitución francesa, de 21 de junio de 1793 (5 palabras): “en presencia del ser supremo”.

- b) Constitución de Cádiz, de 19 de marzo de 1812 (18 palabras): “En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”.
- c) Constitución federalista mexicana, 4 de octubre de 1824 (13 palabras): “En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad”.

Estos datos se expresarían en el cuadro siguiente:

CUADRO 2

Invocaciones de acuerdo con tres constituciones
modélicas (1793-1824), por número de palabras

<i>Documento</i>	<i>Fecha</i>	<i>Núm. de palabras</i>
Constitución francesa	21-VI-1793	5
Constitución de Cádiz	19-III-1812	18
Constitución de México	4-X-1824	13

Es pertinente insistir en que el criterio aquí aplicado es cuantitativo, basado simplemente en el conteo de las palabras con que la invocación ha sido redactada en cada caso, obteniendo así cuatro grupos.

CUADRO 3.

Tipos de invocaciones en las constituciones estatales (1824-1828)

<i>Tipo</i>	<i>Rango de palabras</i>	<i>Núm. de Const.</i>	<i>Porcentaje</i>
Prosopopéyicas	de 25 o más	2	11.1
Ampulosas	de 15 a 24	7	38.8
Afectadas	de 7 a 14	8	44.4
Simples	hasta 6	1	5.6
<i>Total</i>	<i>18</i>	<i>100</i>	

Fuentes: Las mismas del cuadro 1.



La constitución veracruzana, como ya adelantábamos, muestra la inoculable influencia del modelo estadounidense:

Veracruz, 3 de junio de 1825 (No invocación): “Nos los representantes del estado libre y soberano de Veracruz, reunidos en congreso constituyente, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución política para su gobierno”.

Como complemento de este arranque enmarcado en los límites del liberalismo purista y yorquino, ahora refiriéndose a la intolerancia de cultos, este documento constitucional la estableció en su artículo 5o., curiosamente sin hacer mención a religión alguna, como aceptando de mala gana la práctica integrista generalizada en el constitucionalismo de la época y consagrada en el artículo 3o. de la constitución nacional de 1824: “Art. 5 La religión es la misma de la federación”.

FUENTES CONSULTADAS

Bibliográficas

- AYMES, Jean René, *La guerra de España contra la revolución francesa (1792-1793)*, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert (Diputación de Alicante), 1991.
- Biblia de Jerusalén, Nueva edición revisada y aumentada*, Bilbao, Desclée de Brower, 1998.
- ENCISO CONTRERAS, José, “La invocación a Dios en las constituciones mexicanas del siglo XIX. Una perspectiva política”, en *Derechos del Pueblo Mexicano*, tomo III, México, Miguel Ángel Porrúa, 2016.
- ESCOBEDO DELGADO, Martín, *José Miguel Gordo. El drama de la transición política (1777-1832)*, Zacatecas, Arquidiócesis de Guadalajara/Congreso del Estado de Zacatecas, 2014.
- HERREJÓN, Carlos, *La independencia según Ignacio Rayón*, México, Secretaría de Educación Pública, 1985.
- IBARRA PALAFOX, Francisco, *El Congreso de Anáhuac y la Constitución de Apatzingán. Obra documental*, México, UNAM, 2016.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, Eduardo Alejandro, et al., *La Constitución de Cádiz de 1812 y su impacto en el occidente novohispano*, México, UNAM, 2015.

- MALDONADO, Francisco Severo, *Contrato de asociación para la República de los Estados Unidos de Anáhuac. Por un ciudadano del Estado de Xalisco*, Guadalajara, Poderes de Jalisco, 1973.
- MIQUEL I VERGÉS, José María, *Diccionario de insurgentes*, México, Porrúa, s. f. e.
- MORRIS, Richard, *Documentos fundamentales de la historia de los Estados Unidos de América*, México, Libreros Mexicanos Unidos, 1962.
- NORIEGA CANTÚ, Alfonso, *Las ideas políticas en las Declaraciones de Derechos en las Constituciones Políticas de México*, México, UNAM, 1985.
- ORTIZ ORTIZ, Serafín y José Luis Soberanes Fernández (coords.), *La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014)*, México, UNAM/Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2014.
- PANTOJA MORÁN, David, *Bases del constitucionalismo mexicano. La Constitución de 1824 y la teoría constitucional*, México, FCE, 2017.
- RABASA, Emilio O., *Historia de las constituciones mexicanas*, 2 tomos, México, UNAM, 2004.
- RIESCO TERRERO, Ángel, *Vocabulario científico-técnico de paleografía, diplomática y ciencias afines*, Madrid, Barrero y Azedo, 2003.
- RUIZ ASENCIO, José Manuel, et al., *Paleografía y diplomática*, tomo II, Valladolid, España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989.
- TORRE VILLAR, Ernesto de la, *La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano*, México, UNAM, 1964.
- TENA RAMÍREZ, Felipe, *Leyes fundamentales de México, 1808-1987*, México, Porrúa, 1987.
- TERESA DE MIER, Fray Servando, *Carta de un americano al español sobre su número XIX*, Londres, W. Lewis, 1811.
- ULLOA, Berta, et al., *Planes de la Nación Mexicana. Libro uno: 1808-1830*, México, Senado de la República/El Colegio de México, 1987.
- VILLORO, Luis, *El proceso ideológico de la Revolución de Independencia*, México, UNAM, 1967.

Archivos y documentos

- Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. Régimen constitucional 1824*, tres tomos, México, Mariano Galván Rivera, 1828.
- “Constitución de Bayona”, en *Constituciones españolas, 1808-1878*, edición de Javier Carlos Díaz Rico, Madrid, Universidad Carlos III, 2016.
- Constitución de Cundinamarca. Su capital Santa Fe de Bogotá*, Bogotá, Imprenta Patriótica de don Nicolás Calvo y Quijano, 1811.



Constitución Política de la Monarquía Española, Cádiz, Imprenta Real, 1812.
Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, Apatzingán, 22 de octubre de 1814.

Fuentes parlamentarias

BARRAGÁN BARRAGÁN, José, *Actas constitucionales mexicanas (1821-1824)*, tomo VIII, México, UNAM, 1980.



¿Reformar lo irreformable?
Una aproximación al cambio normativo
desde el constitucionalismo estatal
mexicano. 1824-1827

Óscar Hernández Santiago

El Colegio Mexiquense



INTRODUCCIÓN

Recientemente se ha presentado en el ámbito jurídico nacional un enconado debate en torno a los límites sustantivos a las reformas constitucionales. Los motivos son de sobra conocidos: una completa transformación del poder judicial federal —y subsidiariamente de los estatales—, el cual deberá ser elegido por el voto popular a partir del 1o. de junio de 2025.

El núcleo de la polémica giró en torno a la facultad otorgada al Poder Constituyente Permanente para transgredir un principio considerado dogma en la teoría constitucional: la división de poderes. Los defensores de la reforma afirman que sí está autorizado para realizar una mutación jurídica de esta envergadura, legitimado en una abrumadora mayoría legislativa obtenida en las recientes elecciones; los detractores, por su parte, consideran que carece de dicha facultad, toda vez que la elección de jueces por el voto libre, popular y directo representa un peligro para la independencia e imparcialidad de la judicatura, la cual se vería sometida a oscuros intereses políticos, económicos e incluso criminales.¹

Sobra decir que este tipo de elecciones judiciales no son nuevas, pues en los orígenes del constitucionalismo moderno se manejó esta posibilidad como un medio de control de una judicatura que hasta entonces había actuado de manera imparcial. Más recientemente, sólo Estados Unidos, Japón, Suiza y Bolivia validan esta forma de elección con muy diversos resultados.

No es la intención de estas líneas dilucidar sobre la veracidad o falsedad de las anteriores afirmaciones, ya que los elementos empíricos son insuficientes para calificar este bisoño experimento constitucional; sin embargo, han sido traídas a colación para enfatizar la trascendencia del debate actual sobre los límites materiales a las reformas constitucionales,

¹ Martín Reyes, Javier y Marván Laborde, María (coords.), *La iniciativa presidencial de reforma electoral: análisis técnico del Plan C electoral*.

cuya defensa corresponde a los “guardianes de la constitución”, bien sean tribunales constitucionales o cortes supremas.²

Estas instituciones tienen su fundamento de legitimidad no en su carácter electivo, sino en la conocida “premisa contra mayoritaria”, que les ha permitido decretar incluso en algunas circunstancias la inconstitucionalidad de la propia ley fundamental.³ Esta afirmación, incoherente a primera vista, adquiere toda su potencia cuando la constitución deja de ser concebida como un mero documento formal emanado de un poder soberano —la experiencia histórica permite observar los dislates cometidos en nombre de la ley—⁴ para dar paso a una concepción axiológica, sustentada en un “orden objetivo de valores”.

Sin abundar más en el tema de los jueces constitucionales, debe precisarse que la mayoría de las constituciones actuales poseen cláusulas de intangibilidad o pétreas, es decir, decisiones políticas fundamentales imposibilitadas de ser sometidas a reforma por la simple discrecionalidad del legislador, aun si este fuera constituyente, pues se suponen necesarias para la supervivencia del Estado.

Si lo anterior no fuera suficiente, en caso de existir la necesidad de una alteración sustancial a la constitución, se precisa de un procedimiento especial que debe contar con mayorías calificadas de las respectivas asambleas; en algunos casos, cabe también la posibilidad de requisitos mínimos para reformarlas. En estos ejemplos se está en presencia de la conocida tipología de James Bryce: constituciones rígidas o flexibles, la cual las diferencia, más que por su contenido, por la dificultad o facilidad para reformarlas.⁵

² Carpizo, Jorge, “La reforma constitucional en México. Procedimiento y realidad”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, pp. 543-598.

³ Roznai, Yaniv, *Reformas constitucionales inconstitucionales: los límites al poder de reforma*; Landau, David, *Derechos sociales y límites a la reforma constitucional: la influencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en el derecho comparado*. Aun cuando la mayoría de la teoría constitucional contemporánea participa de estas consideraciones, también han existido, de forma minoritaria, posturas en contra de la tiranía de los jueces: Lambert, Edouard E., *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis*; Waldron, Jeremy, *Contra el gobierno de los jueces. Ventajas y desventajas de tomar decisiones por mayoría en el Congreso y en los tribunales*.

⁴ Rütters, Bernd, *Derecho degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich*.

⁵ Bryce, James, *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*. Riccardo Guastini añade dos variantes más a esta tipología: las absolutamente inmodificables (petrificadas) y las ambiguas, que pueden ser flexibles o absolutamente inmodificables. Guastini, Riccardo, *Estudios de Teoría Constitucional*, pp. 185-207.

A modo de ejemplo, la constitución alemana de Bonn de 1948 —paradigma del constitucionalismo del siglo xx— dispone en su artículo 19.2:

En ningún caso se podrá afectar el contenido esencial de un derecho fundamental”. Mientras que su numeral 79.3 establece: “Será ilícita toda modificación de la presente ley en virtud de la cual se afecte a la división de la Federación en Estados, a los fundamentos de la cooperación de los Estados en la potestad legislativa o a los principios establecidos en los artículos 1º y 20”.

En el caso de la constitución mexicana de 1917, ésta ordena un rígido procedimiento de reforma en su artículo 133,⁶ mientras que las treinta y dos constituciones estatales nacionales contienen similares requisitos que imposibilitan su mutación discrecional por parte de las legislaturas, debiendo supeditarse, como lo mandata el artículo 41, “a las estipulaciones del pacto federal” y a su respectivo ámbito competencial, conforme al título v de la Constitución Federal (Arts. 115-122).

Respecto a la materia constitucional de los estados, debe resaltarse que ha sido poco abordada por los estudiosos del derecho constitucional contemporáneo y la historiografía nacional, ambos han sido más proclives al análisis del fenómeno federal, relegando su análisis a un segundo término.⁷ No obstante esta exclusión, las constituciones locales deben ser reputadas como espacios de recepción de las inquietudes de comunidades e individuos que las componen.

Atendiendo a este vacío, la siguiente investigación pretende dilucidar sobre un aspecto poco abordado por juristas e historiadores: los procedimientos de reforma constitucional de los primeros diecinueve textos constitucionales estatales, en un periodo comprendido de 1824 a 1827. Este ejercicio de derecho constitucional comparado en clave diacrónica, servirá para entender, a través de estos textos legales, las inquietudes y expectativas de los constituyentes estatales en un momento en el que la cultura constitucional mexicana iniciaba su andar.

⁶ Artículo 133: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.

⁷ Barceló, Daniel, *Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano*.



El ordenamiento jurídico medieval debe concebirse siempre desde una postura teológica y organicista, en donde existía una jerarquización de las leyes que gobernaban a los hombres. La primera, la *lex aeterna*, era idéntica a la razón divina; la segunda, la *lex divina*, derivaba de la anterior y estaba contenida en las Sagradas Escrituras; la *lex naturalis* se manifestaba en el orden de las cosas; finalmente, la *lex humana* era la ley creada por el hombre, e incluía tanto al *ius gentium* como al *ius civile*.⁸

De acuerdo con esta jerarquía, la ley humana debía obedecer esta prelación, y en el caso específico del monarca —depositario de la soberanía de su comunidad a la cual le correspondía su titularidad—, tenía a la impartición de justicia como principal empresa política. Existía entonces un ideal de príncipe justiciero, representado como la imagen más cercana a Jesucristo, cuya encomienda puede ser sintetizada en la expresión declarada a los reyes de Aragón antes de su entronización: *Rex eris si recte facias si non, non eris*, un reflejo de las expectativas de las jurisdicciones para que el monarca respetara sus privilegios adquiridos con anterioridad.

Esta justicia o *epikeia* —equidad— no era el único dique a los afanes absolutistas y despóticos de los soberanos, en ese ámbito medieval también existía un término muy utilizado por los teóricos: las *leges fundamentales*. Éstas eran consideradas el núcleo duro e inmodificable del ordenamiento jurídico, indisponibles para el rey porque se trataba de leyes intrínsecas a la esencia del reino no al monarca, en otras palabras, constituían sus límites racionales.⁹ Hobbes, en el siglo XVII, las definía de manera negativa al afirmar que “no fundamental es aquella ley cuya derogación no implica la disolución de la república, y tales son las leyes relativas a las controversias entre súbdito y rey”.¹⁰

En el ámbito hispano, éstas pueden ser resumidas en las siguientes: el juramento de los reyes, el contrafuero y el principio de legalidad en el marco del derecho divino de los reyes.¹¹ El juramento remarcaba el respeto a los fueros, franquicias, privilegios y libertades al que se compromete-

⁸ Aquino, Tomás de, *Tratado de la justicia*, pp. 18-38.

⁹ Monhaupt, Heinz, “Von den ‘leges fundamentales’ zur modernen Verfassung in Europa”, pp. 121-158.

¹⁰ Citado por Tomás y Valiente, Francisco, “La génesis de la Constitución de 1812. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución”, p. 24.

¹¹ Corona González, Santos M., “Las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen (Notas sobre la constitución histórica española)”, pp. 127-218.

tían los monarcas apenas ascendían al trono. El contrafuero consistía en el resarcimiento del daño cuando un rey transgredía los límites a los privilegios obtenidos por sus vasallos. Finalmente, el principio de legalidad implicaba que toda ley sujeta a promulgación por el rey, de manera obligada debía pasar por el tamiz de las Cortes, en tanto que éstas representaban la voz de los estamentos.

Así, si bien no había espacio en el orbe medieval para los *check and balances*, sí existía uno para el *rule of law* y el *due process*, instituciones que garantizaban privilegios mínimos de defensa, pero lo suficientemente fuertes para contrarrestar mediante las vías judiciales idóneas el acoso de la pluralidad de poderes.¹²

La aparición del constitucionalismo a finales del siglo XVIII generó que el derecho pasara de una dimensión societaria a una dimensión del poder. A partir de esta escisión, el derecho sería identificado con la norma, una prescripción cuyo sentido no radicaba en su contenido, sino en su procedencia de una entidad soberana —parlamento— que le otorgaba validez.

No obstante, los representantes del pueblo soberano no poseían un total arbitrio legislativo, sino que tenían límites para no emular el despotismo monárquico. En este sentido, Juan Jacobo Rousseau expuso con claridad los contornos de este poder:

Es evidente que el poder soberano, por más absoluto, sagrado e inviolable que sea, no traspasa ni puede traspasar los límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer libremente de los bienes y de la libertad que estas convenciones le han dejado; de modo que el soberano no tiene facultad para gravar a un súbdito más que a otro, porque, haciéndose entonces el asunto particular, su poder ya no es competente.¹³

El mismo sentir estaría presente en Estados Unidos de América, en donde se polemizaría, durante la discusión de su ley fundamental sobre las implicaciones de un excesivo poder de las asambleas legislativas. James Madison así lo exponía en uno de los números de *El Federalista*, citando un texto de Thomas Jefferson —quien había ya recomendado una reforma integral transcurridos 19 años, el tiempo de una generación—: “la sola de-

¹² Lee, Daniel, *Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought*, pp. 8-9.

¹³ Rousseau, Juan Jacobo, *El contrato social*, pp. 40-41.



terminación en un pergamino de los límites constitucionales de los varios departamentos no es suficiente salvaguardia contra las usurpaciones que conducen a la concentración tiránica de todos los poderes gubernamentales en las mismas manos”.¹⁴

Los temores de un despotismo asambleario encontrarían eco en la redacción de la constitución estadounidense de 1787, cuyo artículo V facultaría al Congreso para presentar enmiendas, avaladas por las dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras, pudiendo también ser promovidas por las dos terceras partes de las asambleas estatales. Durante los años sucesivos, la Corte Suprema sería la encargada de ir desarrollando la *judicial review* como forma de contención de las debilidades asamblearias, una postura que tenía como antecedente del *Bonham's case* de 1610 y que en tierras estadounidenses hallaría nuevos bríos.

Dentro del mismo orden de ideas, en Francia existió un temor generado por la dictadura de la democracia, ante este hecho, la constitución francesa de 1791 estipuló en su artículo 1o., título VII, “el derecho imprescriptible” de la nación para “cambiar” su estructura constitucional, sin embargo, estas revisiones se realizarían cuando tres legislaturas consecutivas hubieran “emitido un deseo uniforme para el cambio de algún artículo constitucional”, correspondiéndole a la legislatura siguiente —constituida en “asamblea de revisión”— hacer la declaratoria de reforma.

En tierras galas, tanto Emanuel Sieyès y Nicolás Benoît Frochot compartirían, al igual que en Estados Unidos, las mismas inquietudes sobre los límites temporales para realizar una reforma, la cual podría generar profundas convulsiones políticas cuando las sociedades no estaban preparadas para ese cambio. Además, como apuntaba Sieyès, definir una fecha para la reforma podría suponer una crisis de legitimidad ante su proximidad, por lo cual sugería que sólo con causas ciertas y evidentes podría llevarse a cabo.¹⁵

La Constitución de Cádiz de 1812 es toral en esta materia, pues el constitucionalismo estatal mexicano, como se verá más adelante, replicaría en gran parte su estructura y contenido. Su título x —*De la observancia de la constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella* (Arts. 372-382)— ordenaba la realización de un juramento de lealtad y cumplimiento

¹⁴ Madison, James, *et al.*, *El Federalista*, no. 48.

¹⁵ Fernández Sarasola, Ignacio, “La constitución generacional en el pensamiento revolucionario francés”, *Revista de Estudios Políticos*, pp. 45-74.

por parte de las autoridades, así como las infracciones constitucionales en caso de su desacato,¹⁶ mecanismos indispensables para el cumplimiento de la ley y la consecuente supervivencia del orden.¹⁷

En el caso de la reforma constitucional, señalaba el texto gaditano, sólo procedería “hasta pasados ocho años”, un proceso largo y kafkiano iniciado con la propuesta de por lo menos 20 diputados, siendo leída tres veces con un intervalo de seis días entre una y otra ocasión, para que finalmente, después de su tercera lectura, se decidiera su procedencia; en la discusión eran seguidos los mismos procedimientos de una ley ordinaria. El tortuoso *iter legis* continuaba con la votación de las dos terceras partes de los diputados, quienes la turnarían a la siguiente legislatura para su aprobación final por los dos tercios de los representantes.

Por su parte, el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 ordenaba en su artículo 24 un parámetro o limitante para cada una de las legislaturas estatales: no podrían contravenir lo establecido por la constitución general, en especial en lo referente al mantenimiento del pacto federal (Art. 34). Aun cuando su vigencia era sólo transitoria, el Acta mandaba que su contenido sólo podría “variarse en el tiempo y término que prescribía la constitución general”.

Los mismos lineamientos serían empleados en la Constitución Federal, promulgada el 4 de octubre de 1824, cuyo título VII —*De la observancia, interpretación y reforma de la constitución y acta constitutiva*— secundaba a grandes rasgos la tónica gaditana. Se preveía su reforma sólo hasta 1830, pudiendo intervenir las legislaturas estatales con las adecuaciones consideradas necesarias. Sin embargo, el Congreso Federal sólo se limitaría a decidir cuáles proposiciones podían ser sujetas al escrutinio de la siguiente legislatura, correspondiendo al ejecutivo su publicación y circulación, mientras que la legislatura inmediata sería la encargada de decidir si la reforma era procedente. Un proceso similar se seguiría después de 1830, decidiendo la legislatura en su segundo año de funciones si era conveniente la reforma, de ser ésta aceptada sería turnada a la sucesiva legislatura para su deliberación y posible inserción en el texto constitucional.

¹⁶ Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz*, pp. 303-398; García Gestoso, Noemí, “La reforma de la Constitución de Cádiz. Algunas consideraciones a propósito de la defensa de la Constitución”, pp. 53-77.

¹⁷ Lorente Sariñena, Marta, *Las infracciones a la Constitución de 1812*.



Esta constitución tenía también una cláusula de intangibilidad en su artículo 171 que protegía “la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la federación y de los Estados”. La medida, como los hechos posteriores mostrarían, sería de poca valía ante las pasiones políticas subsecuentes.¹⁸

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS

Una vez promulgada la constitución federal el 4 de octubre de 1824, los 19 estados harían lo propio, correspondiéndole a Jalisco, apenas unas semanas después, ser la primera entidad en promulgar su ley fundamental; casi tres años después, en marzo de 1827, sería Coahuila-Tejas el último estado en presentar su constitución.

Estos textos revelan una gran similitud en su forma y contenido con la ley gaditana, aunque las influencias estadounidense y francesa también eran notables, toda vez que para esas fechas el lenguaje constitucional era compartido a ambos lados del Atlántico. De este modo, su procedimiento de reforma constitucional es una viva muestra del linaje francés de 1791, pasado por el filtro del constitucionalismo español, pero con leves alteraciones generadas a partir del espectro constituyente estatal.

Cada una de esas diecinueve constituciones tenían asignado un capítulo específico a la reforma constitucional, semejante y con pocas variaciones entre ellos.¹⁹

1. Chiapas (Capítulo IX. *De la observancia, interpretación y reforma de esta Constitución*, arts. 126-133);
2. Chihuahua (Título XXI. *De la observancia de la Constitución, de su interpretación, adición y reforma*, arts. 121-129);
3. Coahuila-Tejas (Título VII. *De la observancia de la Constitución*, arts. 218-225);

¹⁸ Andrews, Catherine, “Discusiones en torno de la reforma de la constitución federal de 1824 durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)”, pp. 71-116.

¹⁹ Todas las menciones a estas constituciones se hallan contenidas en Galván Rivera, Mariano, *Colección de constituciones de los Estados Unidos Mexicanos*.

4. Durango (Sección XII. *De la observancia de esta Constitución, su interpretación, modo de proceder en su adición y reforma, y de las leyes antiguas no derogadas*, arts. 135-139);
5. Estado de México (Título VII, capítulo II. *De la reforma de la Constitución*, arts. 232-237);
6. Guanajuato (Título VII. *De la observancia de la Constitución y requisitos que deben intervenir para hacer variaciones en ella*, arts. 221-231);
7. Jalisco (Título VII. *De la observancia de la Constitución*, arts. 263-272);
8. Michoacán (Título IX. *De la observancia de esta Constitución, y modo de proceder para hacer variaciones en ella*, arts. 212-223);
9. Nuevo León (Título XX. *De la adición y enmienda de esta Constitución*, arts. 264-272);
10. Oaxaca (Capítulo XXVIII. *De la observancia de la Constitución*, arts. 248-258);
11. Occidente (Sección XIX. *De la observancia de esta Constitución, modo y tiempo de hacer variaciones en ella*, arts. 311-319);
12. Puebla (*De la reforma de la Constitución*, arts. 180-184);
13. Querétaro (Título XIV. *De la observancia de la Constitución, de su interpretación, adición y reforma*, arts. 261-272);
14. San Luis Potosí (*De la observancia de la Constitución, y modo de hacer variación en ella*, arts. 265-273);
15. Tabasco (Capítulo XI. *De la observancia, interpretación y reforma de esta Constitución*, arts. 217-224);
16. Tamaulipas (Título VII. *De la observancia de la Constitución*, arts. 238-247);
17. Veracruz (Sección XV. *De la revisión de la Constitución*, arts. 79-84);
18. Yucatán (Capítulo XXIV. *De la observancia de la Constitución, y modo de proceder para hacer variaciones en ella*, arts. 230-237);
19. Zacatecas (Título VIII. *De la observancia de la Constitución, modo y tiempo de hacer variación en ella*, arts. 192-198).

Como se desprende de los títulos, destaca el uso del vocablo “observancia” en quince textos, es decir, había un marcado interés por obligar tanto a autoridades como a ciudadanos al acatamiento de los imperativos constitucionales, el cual se veía casi siempre reforzado con algún otro numeral que imposibilitaba de manera expresa la “dispensa” de algún artículo. La flamante cultura jurídica tenía claro que la *dispensatio* medieval carecía de



sentido en un mundo en donde la seguridad y certeza de las leyes debían prevalecer.

En contraste, los constituyentes locales fueron más cautos en el uso de la palabra “reforma”, pues sólo cinco estados la usaron en sus títulos, siendo el Estado de México y Puebla los únicos parcos en su lenguaje al nombrar sólo a su capítulo “De la reforma de la Constitución”. Por otra parte, siete entidades intentarían suavizar el lenguaje utilizando la frase “modo de proceder para hacer variaciones en ella”; mientras que Nuevo León utilizaría “adición y enmienda” y Veracruz la muy genérica “revisión”.

Tampoco debe pasarse por alto el uso en cinco de estas leyes fundamentales del vocablo “interpretación”. Su inclusión obedecía a la profunda desconfianza en el estamento judicial como intérprete de la ley, pues, en voz de los constituyentes, su arbitraria labor de los siglos precedentes los había inhabilitado para esta labor, la cual correspondía sólo al propio legislativo. Estas alusiones a la “interpretación” de las constituciones venían a reforzar lo ya establecido en los capítulos respectivos relativos a los poderes legislativos y judiciales, en donde se mencionaba de manera explícita el constreñimiento del juez a la mera aplicación del derecho.²⁰

La única cláusula de intangibilidad común a todas estas leyes era la obligación de que la religión sería “perpetuamente la católica” y la preservación “por leyes sabias y justas de la libertad, igualdad, propiedad y seguridad de todos sus individuos”. Cuando no determinaban la mayoría simple o calificada para proceder a la reforma, se remitía casi siempre al procedimiento de las leyes ordinarias.

Sobre los motivos que impulsaron a los constituyentes a incluir en sus textos la posibilidad de una reforma constitucional, los preámbulos aportan algunas luces al respecto —resta una compulsa de sus respectivos diarios, actas de debates y expedientes—, cuyas líneas captan la necesidad de no tornar en inamovibles las instituciones, antes bien, debía procederse a realizar los ajustes necesarios derivados de la propia experiencia, como lo exponía la constitución oaxaqueña:

²⁰ A modo de ejemplo, confróntense los siguientes numerales del estado de Occidente que, con diferentes matices, están presentes en las restantes constituciones:

Artículo 109: “Las atribuciones del Congreso son: I. Decretar las leyes concernientes a la administración y gobierno interior del estado en todos sus ramos: interpretarlas, aclararlas, suspenderlas o derogarlas”.

Artículo 215: “A los tribunales y jueces toca únicamente hacer la aplicación de las leyes, y jamás podrán dispensarlas, interpretarlas, ni suspender su ejecución”.

No basta haber fundado sobre las bases de la justicia y de la igualdad el edificio social: no basta dar al estado una constitución que asegure la libertad y la paz; es menester que ella contenga entre sus propias leyes medios fáciles de perfeccionarla, haciendo las variaciones que la experiencia y la voluntad general estimen necesarias. Con este fin la constitución designa las fórmulas y los intervalos con que se debe proceder a variar alguno o algunos artículos de la misma.

Esta “experiencia” era necesaria para ese “perfeccionamiento” de las instituciones, como bien aseguraban los diputados oaxaqueños. Así, resulta claro que en esta materia los diecinueve constituyentes locales retomaban la cautela estadounidense, francesa y gaditana al momento de abordar la reforma constitucional; por este motivo, seguían en esencia el mismo rígido procedimiento explicado a continuación.

De manera general, las constituciones ordenaban que las reformas no podrían realizarse de manera inmediata a su promulgación, sino que debían ser maridadas durante un cierto tiempo por la realidad local enfrentada. Algunas establecían un año específico como 1830 —este era el caso de Tabasco, Michoacán, Querétaro y Estado de México— o 1831 —Puebla—. Otras más indicaban un término de dos años —Chiapas, Guanajuato, Zacatecas—, cinco —Yucatán— o hasta seis —San Luis Potosí—, o bien la reforma a partir del segundo año de la primera legislatura.

Empero, en donde si eran bastante coincidentes era en la forma de proceder a la reforma. En primer lugar, señalaban tres tiempos legislativos, es decir, una primera legislatura decidiría por escrito y con el apoyo de las dos terceras partes de los diputados si era factible una reforma, en caso de ser aceptada se imprimía y hacía circular entre la población y/o ayuntamientos. A la legislatura posterior le tocaría convalidar la reforma o desecharla, si ésta era aceptada se seguía un procedimiento idéntico al de la asamblea precedente, correspondiéndole a la subsecuente legislatura, es decir, a la tercera, votar la reforma y añadirla al texto constitucional. En caso de ser desechadas las proposiciones, éstas sólo podrían volver a ser presentadas después de cuatro años.

Resulta notable la ausencia del poder ejecutivo en estos procedimientos de reforma, se encontraba limitado sólo a su circulación, pero sin ninguna consideración relevante para hacer observaciones a las proposiciones. Igual de importante eran la voz y voto otorgados en ciertas entidades



a los ayuntamientos —Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, Querétaro, Occidente y San Luis Potosí—, para la manifestación de su opinión sobre las reformas. El dato debe recalcar, porque supone la participación de unos entes políticos que en algún momento llegaron incluso a disputar la titularidad de la soberanía.

CONCLUSIONES

La aparición del constitucionalismo a finales del siglo XVIII, instauró un nuevo régimen en donde la constitución se erigía en la única fuente de normatividad. Su legitimidad provenía del consenso entre la nación, de la voluntad general o del pueblo, según el ente elegido por cada ley fundamental, teniendo como principal objetivo la limitación del poder.

Los temores de que la soberanía del pueblo recayera en una asamblea degenerada o en el tiránico poder de una persona, provocaron que en variados casos fueran creadas cláusulas de intangibilidad, es decir, artículos que impedían la reforma constitucional en ciertas decisiones políticas fundamentales.

No obstante, los constituyentes también eran conscientes de que la constitución también debía reformarse para adecuarse a las nuevas condiciones impuestas por una realidad en extremo voluble. Por esta razón, idearon artículos específicos encargados de su regulación, pues si el cambio debía producirse, debía seguir siempre los cauces legislativos adecuados.

Los constituyentes de los diecinueve estados originarios de México así lo entendieron, por lo cual decidieron adecuar de forma más o menos similar un mismo esquema rígido de reforma en el que la triple reflexión parlamentaria de las asambleas no debe ser vista como un óbice, sino como un espacio necesario de meditación sobre sus pros y contras. De esta manera, se aseguraba la continuidad de las instituciones durante un tiempo razonable, el cual buscaba asegurar su adaptación entre las autoridades y la población, en un momento en el que para ambas partes se trataba de innovaciones jurídicas completamente diferentes a las del Antiguo Régimen.

De cierta manera, las líneas anteriores sirvieron para hacer un ejercicio de derecho comparado en perspectiva diacrónica, la cual debe ser siempre uno de los objetivos principales de la historia constitucional. Así, una mirada al propio linaje constitucional nunca estará de más para cono-

cer algunas de las instituciones olvidadas —y no por ello obsoletas— de nuestra propia tradición, alejadas de la linealidad progresiva impuesta por la modernidad jurídica, pues, como se cuestiona Ran Hirschl,

¿qué tan universales, representativas o generalizables son las lecciones de un cuerpo de conocimiento que casi nunca se refiere a la experiencia constitucional, al derecho, ni a las instituciones de más del noventa y cinco por ciento del universo constitucional?²¹

FUENTES CONSULTADAS

- ANDREWS, Catherine, “Discusiones en torno de la reforma de la constitución federal de 1824 durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)”, *Historia Mexicana*, vol. LVI, no. 1, 2006, pp. 71-116.
- AQUINO, Tomás de, *Tratado de la justicia*, Trad. Carlos Ignacio González, México, Porrúa, 1975.
- BARCELÓ, Daniel, *Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano*, México, UNAM-III, 2016.
- BLANCO VALDÉS, Roberto L., *El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal*, Madrid, Alianza, 1994.
- BRYCE, James, *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*, Madrid, CEPC, 2015.
- CARPISO, Jorge, “La reforma constitucional en México. Procedimiento y realidad”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, año XLIV, no. 131, 2011, pp. 543-598.
- Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos*, 3 tomos, México, Miguel Ángel Porrúa, 1988.
- CORONA GONZÁLEZ, Santos M., “Las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen (Notas sobre la constitución histórica española)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, vol. LXV, no. 65, 1995, p. 127-128.
- FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio, “La constitución generacional en el pensamiento revolucionario francés”, *Revista de Estudios Políticos*, no. 185, 2019, pp. 45-74.
- GARCÍA GESTOSO, Noemí, “La reforma de la Constitución de Cádiz. Algunas consideraciones a propósito de la defensa de la Constitución”, *Civitas Europa*, no. 29, 2012/2, pp. 53-77.

²¹ Hirschl, Ran, *Asuntos comparativos. El renacimiento del derecho constitucional comparado*, p. 254.



- GUASTINI, Riccardo, *Estudios de Teoría Constitucional*, México, UNAM-Fontamara, 2001.
- HIRSCHL, Ran, *Asuntos comparativos. El renacimiento del derecho constitucional comparado*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014.
- LAMBERT, Edouard E., *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis*, París, Giard, 1921.
- LANDAU, David, *Derechos sociales y límites a la reforma constitucional: la influencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en el derecho comparado*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015.
- LEE, Daniel, *Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought*, Oxford, Oxford University Press, 2016.
- LINARES, Sebastián, *La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes*, Madrid, Marcial Pons, 2008.
- LORENTE SARIÑENA, Marta, *Las infracciones a la Constitución de 1812*, Madrid, CEC, 1988.
- MARTÍN REYES, Javier y MARVÁN LABORDE, María (coords.), *La iniciativa presidencial de reforma electoral: análisis técnico del Plan C electoral*, México, UNAM-III, 2024.
- MONHAUPT, Heinz, “Von den ‘leges fundamentales’ zur modernen Verfassung in Europa”, *Ius commune*, no. XXV, pp. 121-158.
- ROZNAL, Yaniv, *Reformas constitucionales inconstitucionales: los límites al poder de reforma*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.
- RÜTHERS, Bernd, *Derecho degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich*, Madrid, Marcial Pons, 2016.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “La génesis de la Constitución de 1812. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, vol. LXV, no. 65, pp. 13-126.
- VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín, *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz*, Madrid, CEC, 1983.
- WALDRON, Jeremy, *Contra el gobierno de los jueces. Ventajas y desventajas de tomar decisiones por mayoría en el Congreso y en los tribunales*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018.



**SOBERANÍA Y PODERES
EN DURANGO A 200 AÑOS
DE SU PRIMERA CONSTITUCIÓN**

“EL TRANQUILO GOCE DE SUS NATURALES
E IMPRESCINDIBLES DERECHOS”

Tania Celiset Raigosa Gómez
Pavel Navarro Valdez
Coordinación

fue editado por el

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO.

Se terminó en la Ciudad de México en noviembre de 2025.

Tras el breve episodio del Imperio de Iturbide, el Congreso Nacional Constituyente elegido para redactar la constitución de la República Mexicana y que además asumió la tarea de reorganizar el gobierno y las instituciones del país, al expedir el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana en enero de 1824 determinó la creación del Estado Interno del Norte, el cual quedaría integrado por las antiguas provincias de Chihuahua, Nuevo México y Durango, con capital en la ciudad de Chihuahua. La decisión del Constituyente fue objetada por el gobierno y la Diputación Provincial de Durango, que estaba ya separada de la de Chihuahua, mediante diversos manifiestos y exposiciones dirigidos al congreso general, presentados ante el Constituyente por el diputado duranguense Francisco Elorriaga, que demandaban que Durango se integrara por sí mismo en un estado de la Federación. Igualmente, las diputaciones provinciales de Chihuahua y Durango cruzaron entre sí varios comunicados, a través de los cuales los primeros expresaron su respaldo a la decisión del congreso, en tanto que los duranguenses reiteraron su propuesta.

Ante estas posturas divergentes y la posibilidad de que el diferendo entre Durango y Chihuahua evolucionara hacia un conflicto de mayores dimensiones el Constituyente dio marcha atrás y resolvió la separación de Durango del Interno del Norte. El 22 de mayo de 1824 la Comisión de Constitución, presidida por Miguel Ramos Arizpe, presentó un dictamen para erigir a Durango en un estado más de la Federación, el cual fue aprobado por el pleno del congreso y unos meses más tarde, al promulgarse en el mes de octubre la Constitución de 1824, se ratificó su existencia como estado de la Federación.

El presente libro comparte el estudio de diversos temas relacionados con la construcción del estado de Durango y su primera constitución, promulgada en septiembre de 1825 en el contexto de la Primera República Federal en México. Todo ello, teniendo en cuenta que las indagaciones sobre un régimen federalista no pueden lograrse sin aquilatar la historia desde las regiones, cuanto más en un sistema que otorga autonomía y soberanía a los estados integrantes. El nacimiento del texto constitucional federal y los correspondientes estatales es una de las etapas más importantes en la construcción del federalismo mexicano. Las constituciones locales dotaron de voz y dieron cabida a los protagonistas regionales y sus intereses entreverados en la relación con el gobierno establecido en la ciudad de México, que se mantuvo como el centro político de la nación.

